

Programa Andino de Derechos Humanos

Informe sobre derechos humanos

Ecuador 2012

**UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR
SEDE ECUADOR**

INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS

Ecuador 2012

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, SEDE ECUADOR

PROGRAMA ANDINO DE DERECHOS HUMANOS, PADH

Toledo N22-80 • Apartado postal: 17-12-569 • Quito, Ecuador

Teléfonos: (593 2) 3228085, 299 3600 • Fax: (593 2) 3228426

www.uasb.edu.ec • uasb@uasb.edu.ec

Programa Andino de Derechos Humanos

INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS

Ecuador 2012



**UNIVERSIDAD ANDINA
SIMÓN BOLÍVAR**
Ecuador



Quito, 2013

Informe sobre derechos humanos
Ecuador 2012

Programa Andino de Derechos Humanos

Primera edición:
Universidad Andina Simón Bolívar
Quito, julio de 2013

ISBN: 978-9978-19-586-4
Derechos de autor: 038485
Depósito legal: 004784

Cubierta: Mosca estudio gráfico basada en idea de El Antebrazo
Diagramación: Mosca estudio gráfico
Impresión: F. R. Ediciones, Rumipamba E1-35 y 10 de agosto
Edif. Vanderbilt, piso 1, Ofic. 103, Teléfono: 245 8134

Índice



Presentación / 7

Objetivos y metodología /9

Acceso a la información y derechos humanos / 11

Respuestas a peticiones de acceso a información pública / 11

Información de la Defensoría del Pueblo del Ecuador / 14

Información del Sistema Nacional de Información / 17

Seguimiento a la prensa / 20

Producción sobre derechos humanos 2012 / 23

Conflictividad social y derechos humanos / 31

Desarrollo normativo y derechos humanos / 33

Proyectos y leyes aprobadas / 33

Resoluciones legislativas / 38

Recomendaciones internacionales para el desarrollo normativo / 38

Justicia y derechos humanos / 43

Control constitucional / 43

Garantías jurisdiccionales / 45

Reforma a la administración de justicia / 48

Defensa pública / 49

Protección a víctimas de delitos / 50

Casos del Informe de la Comisión de la Verdad / 51

Política pública y derechos humanos / 55

El enfoque de derechos humanos en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) / 55

Indicadores meta del PNBV / 56

Derechos del buen vivir, igualdad y equidad / 58

Seguridad integral / 65

Seguridad jurídica y estados de excepción / 65

Delitos contra la seguridad del Estado / 67

Caso “Los 10 de Luluncoto” / 68

Otros delitos contra la seguridad / 70

Casos de desaparición / 71

Derechos colectivos y de la naturaleza / 73

Políticas petroleras y mineras / 74

Daños e impactos ambientales / 76

Conclusiones y recomendaciones / 81**Bibliografía / 85****Anexos / 91**

Presentación



El Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, inició en 2009 la publicación anual de un informe sobre derechos humanos como una contribución a la reflexión y observancia de su cumplimiento. Tomó como referencia el nuevo marco constitucional, adoptado a finales de 2008, el cual plantea nuevos desafíos al Estado ecuatoriano y al conjunto del país en el fortalecimiento del catálogo de derechos y de garantías y sus principios, entre ellos integralidad, interdependencia, *pro homine*, aplicación directa y progresividad.

Cada nueva entrega del *Informe* fue sujeta a una evaluación y fue incorporando ajustes y modificaciones. El correspondiente al año 2011, publicado el año pasado, tuvo gran impacto nacional e internacional. En muchos sectores fue muy bien recibido, pero provocó el rechazo del Gobierno. La Universidad y el PADH explicaron ante la opinión pública el contenido y alcances de la publicación, pero se generó un conflicto público. Ante ello, el presidente del Consejo Superior, de acuerdo con el rector de la sede ecuatoriana, en ejercicio de la autonomía universitaria, consultó a los miembros de ese organismo sobre la posibilidad de que se designara una comisión internacional para que estudiara el *Informe* y presentara sus observaciones y sugerencias.

La respuesta de los miembros del Consejo Superior fue afirmativa y la comisión internacional fue designada. Así se lo comunicó a la comunidad universitaria y a las autoridades de la República del Ecuador. La comisión, integrada por el Dr. Enrique Bernal Ballesteros (Perú) y la parlamentaria andina Gloria Florez Schneider (Colombia), trabajó por varios meses y visitó Quito, entre enero y febrero de este año. La comisión internacional delimitó su labor a examinar la metodología del informe y a establecer recomendaciones para su fortalecimiento. Presentó su informe en abril y su versión final estuvo lista para publicación en junio. El contenido

completo del documento ha sido publicado, por disposición del Presidente del Consejo Superior, en la página web de la Universidad: <http://www.uasb.edu.ec/padh_contenido.php?cd=1158&pagpath=1&swpath=inf&cd_centro=5&ug=ac>.

Desde mediados de 2012, el PADH continuó con las actividades necesarias para realizar el *Informe* correspondiente a 2012, pero a inicios de 2013 se resolvió esperar el informe de la comisión internacional para concluirlo y publicarlo. Una vez que lo conoció, el equipo de PADH procuró recoger las observaciones y recomendaciones. Es así como se han realizado algunos ajustes. El principal fue una división entre el “Informe” propiamente dicho, que prepara el PADH en forma institucional, y las contribuciones, bajo la modalidad de artículos, de la sociedad civil, docentes y entidades del Estado. Por ello, desde este año, aparecerán dos publicaciones. Por un lado el *Informe sobre Derechos Humanos*, un balance preparado por el equipo responsable. Por otro lado, una publicación colectiva titulada *Horizontes de los derechos humanos* que analiza varios casos y temáticas relevantes de 2012, con la contribución de varios representantes de organizaciones de la sociedad civil y docentes. También se incorporan los dos artículos presentados por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y por el Ministerio Coordinador de la Política Interna y Externa.

Los cambios señalados no modifican las características principales del *Informe*, pues mantiene el principio de la integralidad de los derechos humanos; la articulación de la información del ámbito normativo, del diseño y funcionamiento institucional y de la política pública; la perspectiva comparada, la priorización de temas cruciales para la vigencia de los derechos humanos en los ámbitos de justicia, seguridad y ambiente; la incorporación de otros temas relevantes; y la recopilación de la producción en materia de derechos humanos del año.

El presente informe contiene ocho numerales, inicia con la exposición del objetivo y la metodología, continúa con el análisis desde la perspectiva de derechos humanos de varios temas como: acceso a la información, conflictividad social, producción normativa, justicia, seguridad, políticas públicas, y derechos colectivos y de la naturaleza. Se cierra con las conclusiones y recomendaciones generales; y acompañan la bibliografía y varios anexos que sustentan y amplían el contenido.

Es grato reiterar el agradecimiento a quienes, desde sus respectivos aportes y responsabilidades, han hecho posible contar anualmente con este informe. Expresamos nuestro reconocimiento a la comisión internacional que revisó el *Informe 2011*, por sus sugerencias y por su recomendación de que se continúe con la publicación de este trabajo. Reconocemos también el apoyo recibido por las autoridades y la comunidad de la Universidad Andina Simón Bolívar. Finalmente, es preciso señalar que la tardanza en la publicación responde a los reajustes efectuados. Como todos los informes, el presente, se encuentran disponible en: <<http://www.uasb.edu.ec/padh.php>> o <<http://www.repositorio.uasb.edu.ec>>.

Objetivos y metodología



El objetivo general de este *Informe* es contribuir al trabajo de promoción, garantía y exigibilidad de los derechos humanos mediante el seguimiento de su evolución y desarrollo en el año 2012, para ubicar niveles de cumplimiento, contribuir a fortalecer la memoria social y promocionar la acción del Estado y la sociedad.

Este *Informe* se inscribe en el campo de la investigación social aplicada y se basa en diferentes tipos de fuentes secundarias: bibliográficas, hemerográficas y archivísticas (informes, estudios, bancos de datos, información institucional, procesamiento de denuncias, casos o situaciones, peticiones de información, revisión de prensa, entre otros).

Como toda investigación científica, el *Informe sobre derechos humanos* busca producir nuevos conocimientos sobre el estado de los derechos humanos en Ecuador y, a partir de ello, establecer recomendaciones.

El análisis prioriza los siguientes aspectos del enfoque de derechos humanos: el carácter integral, interrelacionado e interdependiente de los derechos; la responsabilidad estatal que surge de los acuerdos internacionales y del marco constitucional; la articulación de las garantías constitucionales en el ámbito normativo, el diseño y funcionamiento institucional, la política pública y las acciones jurisdiccionales para la tutela de los derechos.

Además, promueve la perspectiva comparada, la priorización de temas cruciales para la vigencia de los derechos humanos, y la recopilación de la producción en materia de derechos humanos del año. A través de este monitoreo se establecen avances, límites y retrocesos, y se emiten recomendaciones encaminadas a mejorar el cumplimiento de los derechos.

A fin de recabar la información necesaria, oficial y no oficial, se recurrió a las siguientes fuentes:

- Peticiones de información pública a distintas entidades estatales, cuyas respuestas alimentan los puntos tratados y, además, son un indicador respecto del acceso a la información pública (28 peticiones, 15 respuestas). Cabe señalar que fue necesario elaborar una base de datos específica para procesar las respuestas enviadas por la Función Judicial, debido a que se recibieron más de 300 respuestas enviadas por diferentes judicaturas del país (ver anexo 1).
- Revisión de informes de gestión o rendición de cuentas de la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE) y de la Secretaría Nacional de Planificación del Desarrollo (SENPLADES).
- Revisión de información estadística del Sistema Nacional de Información (SNI), especialmente de las metas del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 (PNBV), hasta marzo de 2013.
- Revisión de datos estadísticos proporcionados por la Función Judicial de Pichincha sobre ingresos y resoluciones de garantías constitucionales. Información enviada para el estudio “Garantías jurisdiccionales y migraciones internacionales en Quito”, realizado por el PADH, mediante convenio con la Fundación Ambiente y Sociedad, con firma de honor del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2012.
- Cronología realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis de la Coyuntura del Ecuador del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO), con la coordinación de Mario Unda (Centro de Investigaciones Ciudad).
- Bases de datos del PADH: estados de excepción; seguimiento de prensa virtual; seguimiento de prensa escrita; desarrollo normativo; conflictividad; y registro de producciones sobre derechos humanos.
- Además, se revisaron instrumentos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, informes de instancias del sistema internacional de protección, y notas de prensa.

Las referencias de las respuestas a las peticiones de información entregadas por las instituciones del Estado se encuentran detalladas en la bibliografía; los documentos originales reposan en los archivos del PADH.¹

El alcance del presente informe muestra los avances y los límites en la generación de información especializada en derechos humanos por parte del Estado, principalmente de aquella proporcionada por las entidades estatales en respuesta a las peticiones de información expresamente realizadas para este informe.

Notas

1. Para propiciar la agilidad en la lectura en el texto se menciona la respuesta recibida y la institución, mientras que para otras fuentes se indica la referencia completa.

Acceso a la información y derechos humanos



Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección (Convención Americana de Derechos Humanos –CADH–, art. 13).

Se ubican alcances y limitaciones en el acceso a la información pública, oficial y no oficial, sobre la situación de derechos humanos en Ecuador, para ello presentamos una muestra a partir de los siguientes parámetros: a) las repuestas a las peticiones de acceso a información pública; b) la información de la DPE; c) la información del SNI; d) el seguimiento a la prensa; y e) la producción de libros, informes, audiovisuales y herramientas de trabajo en derechos humanos.

Respuestas a peticiones de acceso a información pública

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información (CRE –Constitución de la República del Ecuador–, art. 18, num. 2).

Se reconoce y garantizará a las personas, el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas (CRE –Constitución de la República del Ecuador–, art. 66, num. 23).

Durante 2012, el PADH formuló 28 peticiones de acceso a información pública sobre derechos humanos, considerando las atribuciones previstas por la Constitución, la ley y los reglamentos orgánicos funcionales de las principales instituciones del Estado con competencia directa o conexas en derechos humanos.

Del total de peticiones formuladas, el 54% fueron contestadas (12 instituciones enviaron información de 15 peticiones). Si se compara este porcentaje de respuesta con el alcanzado en 2011 (21%), se registra un aumento de 25 puntos en las respuestas de acceso a la información. El detalle de las instituciones y sus respuestas es el siguiente:

Cuadro 1
Respuestas institucionales ante peticiones de información, 2012

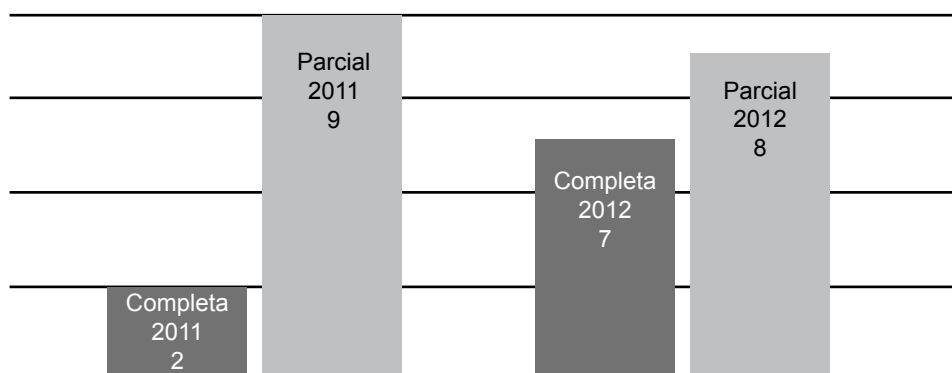
No.	Institución	Envían información	Tipo de información
1	Asamblea Nacional (A)	Sí	Completa
2	Asamblea Nacional (B)	Sí	Parcial
3	Banco Nacional de Fomento	No	
4	Comisión de Transición Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género	Sí	Parcial
5	Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador	No	
6	Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa	No	
7	Consejo de la Judicatura de Transición (A)	Sí	Parcial
8	Consejo de la Judicatura de Transición (B)	No	
9	Consejo Nacional de Discapacidades	No	
10	Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia	Sí	Parcial
11	Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano	No	
12	Corte Constitucional	Sí	
13	Corte Nacional de Justicia	Sí	Completa
14	Defensoría del Pueblo del Ecuador	No	
15	Defensoría Pública General	Sí	Completa
16	Fiscalía General del Estado (A)	Sí	Completa
17	Fiscalía General del Estado (B)	Sí	Completa
18	Fiscalía General del Estado: Dirección Comisión de la Verdad y Derechos Humanos	Sí	Parcial
19	Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca: Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria	No	
20	Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca: Plan Tierras	No	
21	Ministerio de Ambiente	Sí	Parcial
22	Ministerio de Defensa	No	

23	Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos	Sí	Completa
24	Ministerio de Relaciones Exteriores	No	
25	Ministerio del Interior	No	
26	Policía Judicial e Investigaciones		
27	Vicepresidencia de la República	Sí	Parcial
28	Procuraduría General del Estado	Sí	Completa

Fuente: Peticiones de información (28) solicitadas por el PADH y respuestas recibidas (15).
Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Respecto a la calidad de información proporcionada, tomando en cuenta las 15 respuestas, se evidencia una mejora en tanto se incrementó el porcentaje de contestaciones con información completa, de 18% en 2011 a 47% en 2012.

Gráfico 1
Calidad de las respuestas a peticiones de información, 2012



Fuente: Respuestas a peticiones de información 2011 (11) y 2012 (15), archivo PADH.
Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Debido a que la información proporcionada por la Comisión de Transición Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y la Vicepresidencia de la República, fue general, lo que impidió hacer un análisis de lo ocurrido en 2012. Mas, valorando que puede aportar a otro tipo de reflexión, se adjunta en el anexo 2.

De esta forma, se evidencia una tendencia de avance en la atención a peticiones de acceso a información pública, pero existe un importante 44% de déficit que debería superarse para los próximos años.

Al considerar que el acceso a la información pública es un derecho y que contribuye, tanto a la generación de políticas públicas eficaces como a la rendición de cuentas por parte de las autoridades, se espera que, para el siguiente año,

aumente sustantivamente el número de respuestas a las peticiones de acceso a información pública y mejore la calidad de las mismas.

Información de la Defensoría del Pueblo del Ecuador

La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país (CRE, art. 215).

Considerando que la DPE es la institución nacional de derechos humanos del país, el 15 de octubre de 2012 el PADH formuló dos peticiones de información a esta institución; la primera sobre las políticas que, de acuerdo a sus atribuciones y competencias constitucionales y legales, implementó entre noviembre de 2011 y octubre de 2012; y la segunda sobre la elaboración de un pequeño artículo de balance de la situación de derechos humanos en dicho período.

El 31 de octubre de ese mismo año la DPE dio respuesta a las dos peticiones en una sola comunicación en la que manifestaba: “lamentamos que en esta ocasión no podamos cumplir con este requerimiento, ya que por lo extenso de la información que tendríamos que recabar para armar un artículo alineado a la realidad con bases sólidas y debidamente sustentado, requiere de más tiempo para su realización”.²

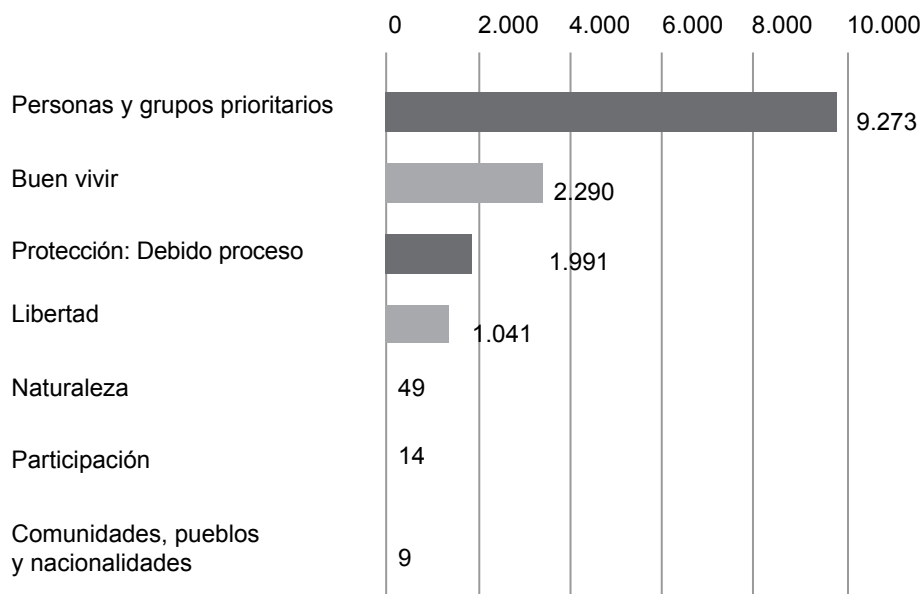
Como se ha constatado en informes anteriores, la DPE no elabora un informe periódico sobre la situación de derechos humanos, pese a que legalmente está obligada a realizarlo,³ y no cuenta con un sistema de información pública que procese información estadística y analítica sobre el cumplimiento de los derechos, construido y basado en indicadores de derechos humanos susceptibles de ser observados a mediano y largo plazo. Su página web no brinda información suficiente ni se encuentra construida por atribuciones y competencias, y enfatiza en la gestión más que en el análisis de derechos humanos.

Ante esta falta de respuesta y los límites de generación de información, se procedió a sistematizar la información del Informe de Labores 2012 de esta institución.⁴ Según dicho informe, la DPE durante 2012 recibió 41.503 casos, de los cuales 14.667 (35,34%) fueron admitidos para atención en el marco de su competencia, en los restantes 26.836 (64,66%), brindó asesoría y fueron remitidos a las instituciones pertinentes.

El informe da cuenta de acciones desarrolladas en los tres ejes temáticos priorizados por la DPE para su accionar: 1. la lucha contra la discriminación y la violencia; 2. el derecho a la vida y la integridad personal, lucha contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; y 3. la adecuada prestación de servicios públicos domiciliarios. En cada uno de ellos se señalan las actividades realizadas, a su vez en los campos de: tutela (protección), educación (promoción) e incidencia (política pública).

El detalle de los casos admitidos por competencia se encuentra en varias partes del informe, algunas cifras están ubicadas en los ejes de trabajo, otras por temas y también por derechos. A fin de contar con una visión global, se realizó una síntesis organizada por bloques constitucionales de derechos. El mayor número de casos se encuentran en los bloques de: personas y grupos de atención prioritaria (6.901 consumidores, 1.677 de usuarios de servicios públicos domiciliarios y 695 víctimas de violencia y discriminación); del buen vivir (entre los principales: 599 acceso a la información pública, 679 trabajo y seguridad social y 412 en educación); de protección, en concreto sobre el debido proceso (1.991); y de libertad (entre los principales: 418 dirigir quejas y peticiones, 281 integridad personal, 208 propiedad). En otros bloques el número de casos es menor (ver anexo 3):

Gráfico 2
Síntesis de casos por competencia ingresados por bloques de derechos constitucionales, DPE 2012

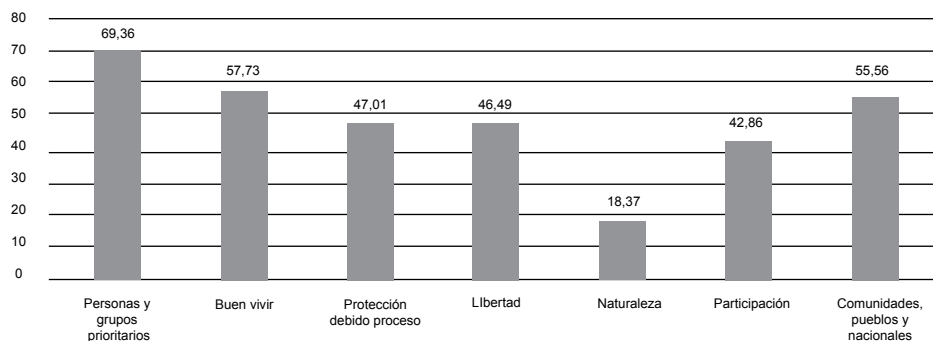


Fuente: Informe de labores 2012, DPE, p. 20, 30, 41, 44, 48-51 y 57.
Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Respecto al estado del trámite, de los 14.667 casos admitidos fue resuelto el 63% (9.194) y quedó pendiente un 37% (5.473). Sobre los primeros, no se cuenta con información sobre el grado de vulneración de derechos, tipo de gestiones y soluciones alcanzadas. Existe variación en los porcentajes de resolución de casos, siendo los derechos de la naturaleza el de menor porcentaje y el mayor sobre derechos de personas y grupos de atención prioritaria.

Considerando el porcentaje de resolución de casos por derechos, hay situaciones donde no se reporta ninguna (inviolabilidad de la vida, y tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la sexualidad); otros, donde el porcentaje es notoriamente menor (20% alimentación y 23% dirigir quejas y peticiones); y otros, donde los porcentajes son mayores (80% ser consultados, 76% vida digna y 71% derechos del consumidor).

Gráfico 3
Porcentajes de casos resueltos por bloques constitucionales de derechos, DPE 2012 (en porcentajes)



Fuente: Informe de labores 2012, DPE, p. 20, 30, 41, 44, 48-51 y 57.

Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

El 37% de casos pendientes, las marcadas variaciones en los porcentajes de resolución y la ausencia de información cuantitativa y cualitativa sobre el tipo de resolución interpelan en conjunto sobre la capacidad de la DPE para implementar formas efectivas de tutela de derechos.

Otra información contemplada en este informe de gestión es: 43 visitas a centros de privación de la libertad, sin determinar el tipo de centro, ubicación geográfica, problemas detectados, violaciones de derechos, gestiones realizadas y resultados obtenidos. En 2011 la DPE realizó 61 visitas a centros de rehabilitación social; no se puede establecer niveles de comparación por falta de desglose de información.

En el marco del cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), la DPE recibió 2.086 informes de las instituciones del Estado; de mantenerse el mismo catastro del año 2011, esto representaría el 41% del total de instituciones públicas, y muestra un importante incremento respecto del 15,7% de entidades públicas que informaron en 2011.

Respecto del accionar en la promoción de derechos y para la incidencia en políticas públicas, el informe de gestión presenta un listado de actividades, con distinto nivel de información (por ejemplo, no todos los cursos referidos cuentan con número de participantes y sus características, no siempre se informa el alcance

geográfico, no siempre se señala resultados, etc.), por lo que no es factible procesar la información para dar una visión global.

En 2012, la DPE inició la modalidad de *cartas públicas*, suscritas por el Defensor del Pueblo, sobre temas de interés nacional, con seis pronunciamientos que giraron sobre los siguientes temas:

- La discriminación en los medios.
- Las declaraciones homofóbicas del candidato presidencial del Partido Roldosista Ecuatoriano Nelson Zavala.
- El Caso Luluncoto.
- La sentencia judicial sobre la instalación del monumento de León Febres Cordero.
- Las opiniones en medios: carta a *El Comercio*.
- Las opiniones en medios: carta a Fundamedios.

No es posible realizar una comparación detallada con la información de 2011 por cuanto los informes de gestión anteriores cubrían el período agosto-julio; no obstante, considerando que son 12 meses de reporte, en términos globales se observa que para 2012, la DPE absolvió menos consultas, admitió menos peticiones y tuvo un mayor porcentaje de resolución de trámites, visitó menos centros de privación de libertad y recibió más informes de cumplimiento de la LOTAIP. En otros aspectos no se puede establecer ninguna comparación, pues en el informe 2012 no se mencionan cifras sobre otras atribuciones de la DPE,⁵ como, por ejemplo, la interposición de garantías jurisdiccionales o el establecimiento de medidas de cumplimiento, entre otros, que en 2011 sí fueron reportados.

Es urgente que la DPE incorpore en sus prioridades superar el déficit en información y análisis cuantitativo y cualitativo sobre el nivel de cumplimiento de derechos humanos, a partir de indicadores que le permitan la realización de un informe integral periódico sobre la situación de derechos humanos y en el cual dé cuenta de todas las atribuciones establecidas por la Constitución y la Ley.

Información del Sistema Nacional de Información

Garantizar a la población en general y, en particular, a los actores del Sistema Nacional de Planificación, el acceso a información confiable, oportuna y consistente sobre los diversos ámbitos de la realidad nacional; mediante la dirección, articulación y coordinación del Sistema Nacional de Información vinculado a la formulación de propuestas de desarrollo y diseño de políticas públicas a través de la investigación (Acuerdo 151-2007, Misión de la Subsecretaría de Información e Investigación, SENPLADES).

Una política importante en materia de generación de información adoptada en 2012 fue la entrada en funcionamiento del SNI, el cual estructura en forma ordenada y articulada información estadística y geográfica producida por distintas instancias estatales, su acceso es público, permite dar seguimiento a diversas temáticas a través del tiempo y constituye una fuente importante para la realización de investigaciones. El sistema está orientado a la planificación del desarrollo y de las finanzas públicas.⁶

En tanto el sistema no incluye un apartado específico sobre el nivel de cumplimiento de los derechos humanos, se toma como muestra la información sobre el cumplimiento de las metas establecidas en el PNBV 2009-2013 (anteriormente registrada en el Sistema de Información para la Gobernabilidad, SIGOB).

Hasta marzo de 2013, el sistema contaba con el 56% de información incorporada sobre los indicadores establecidos para las metas por objetivos; el objetivo 6 es el único que cuenta con información sobre todas las metas y el objetivo 9 el que menos tiene:

Cuadro 2
SNI: Indicadores meta PNBV con información disponible

Objetivos	Políticas	Metas indicadores	Metas indicadores en SNI	Porcentaje
1	10	19	12	63,2
2	8	19	10	52,6
3	7	19	8	42,1
4	7	15	4	26,7
5	7	11	8	72,7
6	8	9	9	100,0
7	8	4	1	25,0
8	5	2	1	50,0
9	6	6	1	16,7
10	6	5	3	60,0
11	13	23	16	69,6
12	7	5	3	60,0
	92	137	76	55,5

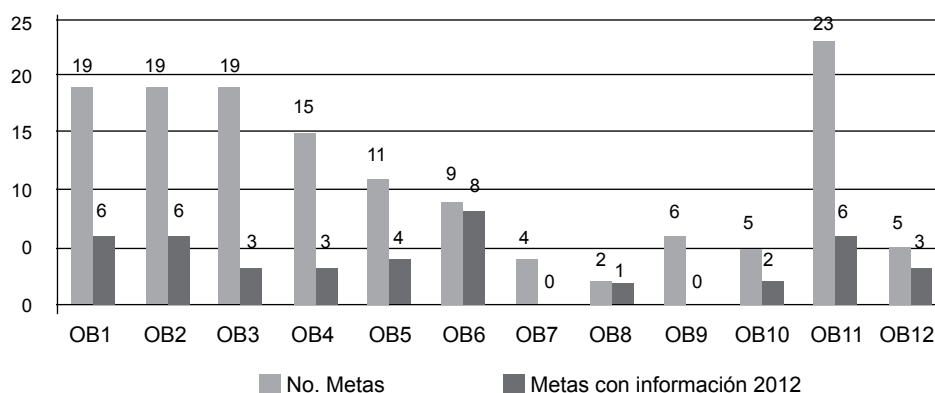
Fuente: Sistema Nacional de Información, Indicadores meta PNBV, marzo de 2013.

Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Sin embargo, la información proporcionada es diferencial: todos los indicadores incorporados registran la información nacional; no todos tienen información en cada año; no todos los indicadores cuentan con información desagregada según los parámetros previstos por el propio sistema: provincia, zona, área, sexo, etnia, grupo de edad, quintil, cantón Quito. Es importante señalar que el sistema no permite realizar cruces de variables, lo que limita la posibilidad de análisis.

De las 76 metas ingresadas al SNI, en 42 la información está actualizada hasta 2012 (algo más de la mitad) y significa el 30,7% del total de metas del PNBV (menos de la tercera parte):

Gráfico 4
SNI metas por objetivos del PNBV con información disponible a 2012



Fuente: Sistema Nacional de Información, Indicadores meta PNBV, marzo de 2013.
Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Como se puede apreciar, solo para el objetivo 6 se cuenta con la información casi completa (89%), en segundo lugar está el objetivo 12 y en tercero el 10; no hay información en dos objetivos (7 y 9) y los restantes tienen porcentajes menores (entre 16% y 40%). Por tanto, el desafío está en completar la información para la totalidad de indicadores y que esta cubra los períodos y niveles de desagregación propuestos; sería óptimo la posibilidad de cruzar variables.

En términos generales se espera que cuente con información sobre el nivel de cumplimiento de los derechos humanos, según indicadores, conforme las recomendaciones de los sistemas de protección internacional; más aún, tomando en cuenta que el Estado ecuatoriano asumió el compromiso voluntario de “Proseguir sus esfuerzos para establecer un sistema de información sobre los derechos humanos con el apoyo del ACNUDH”.⁷

Seguimiento a la prensa

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a [...] Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior (CRE, art. 18, num. 1).

El PADH, desde 2010, realiza el seguimiento de los hechos noticiosos publicados por la prensa⁸ y establece su repercusión en materia de derechos humanos, tomando en cuenta los bloques de derechos constitucionales. Se debe considerar que en los diferentes periódicos no hay una sección específica sobre derechos humanos, como lo hay para otros temas (judicial, deportes, economía, etc.); tampoco existe una publicación periódica sobre el tema, sea que sistematice las noticias, o verse sobre investigación de casos o la promoción de los derechos humanos.

Para 2012 se realizó el seguimiento en la prensa virtual de los siguientes medios:⁹ *El Comercio*, *El Universo*, *El Telégrafo*, *La Hora*, *Extra*, *El Mercurio* (Cuenca), *Independiente* (Sucumbíos) y la revista *Vistazo*. Se ubicó una muestra de 402 hechos mediante 15 descriptores: derechos humanos, caso de derechos humanos, accidentes de tránsito, asesinato, criminalización, detención, desalojo, femicidio, homicidios, militar, policía, secuestro, sicariato, suicidio y terrorismo.¹⁰

De la información obtenida, se observa que se mantiene la tendencia de incremento de hechos ocurridos a nivel local, que llega a 84% (9 puntos más), de los cuales el 28% fueron en el sector rural y 62% en el urbano.

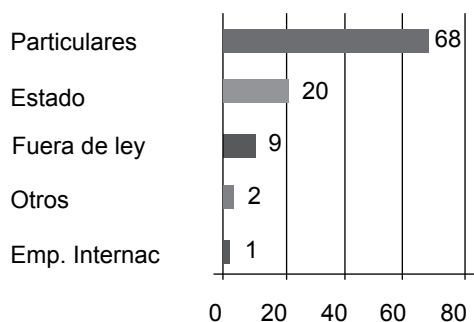
Las provincias que registran mayores porcentajes son Guayas (39,8%), Pichincha (19,3%), Manabí (7,1%), Azuay (6,2%), Esmeraldas (5%) y El Oro (4,5%). Es importante resaltar que, respecto a 2011, Pichincha presenta una disminución de 11 puntos y Esmeraldas de 1,6 puntos; mientras que las otras provincias mencionadas muestran un aumento: Manabí (3,4 puntos), Guayas (3,3 puntos), El Oro (2,2 puntos) y Azuay (0,5 puntos). Otras provincias con porcentajes menores pero que registran aumento son Santo Domingo de los Colorados, Tungurahua, Los Ríos, Cotopaxi y Carchi.

Los hechos registrados muestran que la responsabilidad directa de la vulneración recae en los particulares (68%) y presenta un aumento de 29 puntos respecto de 2011 (ver gráfico 5).

En el 79% de los hechos se registra una anulación del derecho y en el 71% el tipo de afectación es individual. Esto se relaciona con el aumento de hechos que atentan contra la seguridad integral y la vida como se expone a continuación.

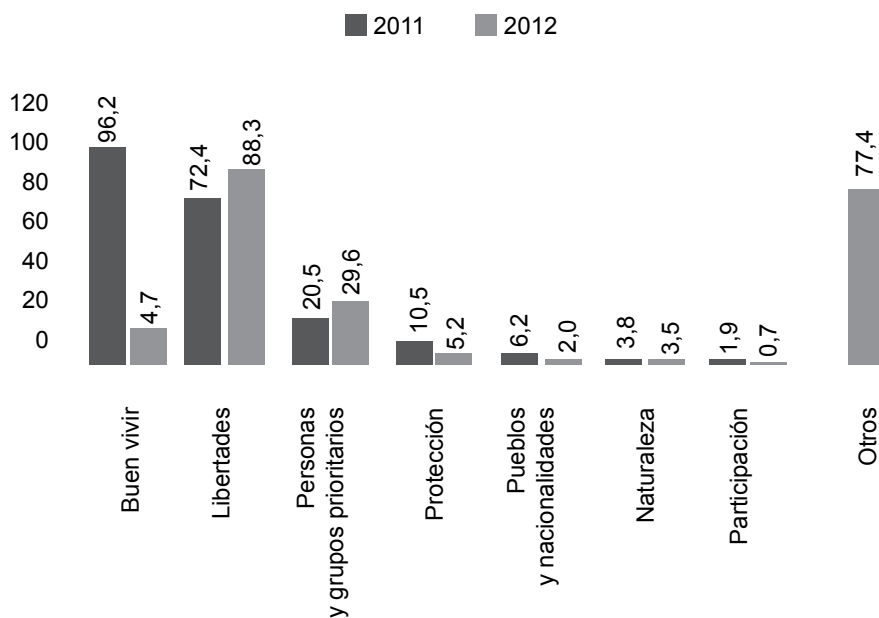
Aunque se presentan algunas variaciones porcentuales, en términos generales, también se mantiene la tendencia de afectación considerando los bloques constitucionales de derechos (ver gráfico 6).

Gráfico 5
Responsabilidad directa en afectación de derechos, 2012 (en porcentajes)



Fuente: Base de datos de prensa 2012, PADH.
Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Gráfico 6
Afectación de derechos por bloques constitucionales de derechos, 2011-2012 (en porcentajes)



Fuente: Base de datos de prensa 2011-2012, PADH.
Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PAD, 2013.

Como se puede apreciar, la información de 2012 presenta dos novedades: una disminución sustancial en los derechos del buen vivir y el apareamiento de un nuevo bloque de derechos denominado *otros*. Esto responde a que en los años anteriores se ubicaron todos los derechos constitucionales a partir de los siete bloques contemplados en el Título II de la CRE; y en 2012 se agruparon en el bloque *otros* los derechos que se encuentran por fuera del título señalado.

En este sentido, se precisa y resalta que el derecho a la seguridad integral (art.3, CRE) es el que marca la diferencia; en los años anteriores este derecho se incluyó en el bloque del buen vivir y en 2011 su porcentaje fue de 73,8%.¹¹ En 2012, la seguridad integral se encuentra en el bloque *otros*, con el porcentaje de 94,2%, lo que presenta un aumento de 20 puntos en relación a 2011.

Con esta precisión, la tendencia general se mantiene al ser los bloques con mayor afectación los de libertades, buen vivir y de personas y grupos de atención prioritaria. Considerando los derechos más afectados en cada bloque se ubica:

Cuadro 3
Derechos vulnerados por bloques constitucionales de derechos 2012

%	Derechos vulnerados	Bloque de derechos
94,2	Seguridad integral	Otros
85,7	Derechos de pueblos indígenas	Derechos de pueblos y nacionalidades
85,1	Vida (81,7%) Vida digna (3,4%)	Derechos de libertad
60,0	Ser consultado	Derechos de participación
52,4	Debido proceso	Derechos de protección
50,0	Propiedad/territorio	Derechos de pueblos y nacionalidades
44,5	Derechos de niños, niñas y adolescentes	Derechos de personas y grupos de atención prioritaria
37,3	Salud	Derechos del buen vivir
33,3	Respeto, restauración y restitución	Derechos de la naturaleza
28,6	Seguridad jurídica	Derechos de protección
25,0	No discriminación-racismo	Derechos de pueblos y nacionalidades
24,4	Derechos de mujeres víctimas de violencia	Derechos de personas y grupos de atención prioritaria
20,0	Participar en asuntos de interés público	Derechos de participación
18,6	Trabajo	Derechos del buen vivir
15,3	Comunicación	Derechos del buen vivir
15,3	Hábitat-vivienda	Derechos del buen vivir

Nota: El porcentaje se establece respecto del total de cada bloque. Los demás derechos obtienen porcentajes menores al 15%.

Fuente: Base de datos de prensa 2012, PADH.

Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Complementa lo expuesto la información resultante de la revisión de prensa escrita,¹² la cual también registra como bloques constitucionales de derechos más

vulnerados; libertades (59,9%), buen vivir (39,6%) y protección (19,4%). Los derechos con mayor porcentaje en cada uno de los bloques son:

- Derechos del buen vivir: trabajo (25%), comunicación (21%), educación (13%) y ambiente (12%).
- Derechos de personas y grupos de atención prioritaria: usuarios (29%), personas privadas de la libertad (22%) y personas en movilidad (18%).
- Derechos de pueblos y nacionalidades: pueblos indígenas (91%) y los derechos más afectados son de propiedad/territorio (39%), consulta previa (35%) y no discriminación/racismo (13%).
- Derechos de participación: a ser consultados (32%), elegir y ser elegidos (18%) y a empleo público (15%).
- Derechos de libertad: de pensamiento (23%), vida (16%) y libertad económica (12%).
- Derechos de protección: seguridad jurídica (60%), protección a víctimas (21%) y debido proceso (13%).
- Derechos de la naturaleza: respeto a su existencia (64%).
- En otros derechos consagrados en la Constitución, los de mayor frecuencia son: a la seguridad integral (22%), a una sociedad libre de corrupción (19%), a una sociedad democrática (14%) y a la oposición política (16%).

Significaría un avance importante para el país que la prensa implemente mecanismos de información específicos sobre la situación de los derechos humanos, incorporando el enfoque de derechos y con la producción periódica de reportes en la materia.

En síntesis, lo expuesto evidencia que, a pesar de los adelantos en materia de producción y acceso a la información, persiste el déficit de información especializada en derechos humanos que dé cuenta, en forma periódica, del nivel de cumplimiento de los derechos, base indispensable para la orientación de las medidas que podrían adoptarse en lo normativo, política pública e institucionalidad.

Es coincidente la información proveniente de la DPE y de la revisión de la prensa, virtual e impresa, sobre los cuatro principales bloques de afectación de derechos, aunque el orden entre ellos cambie: libertad, buen vivir, personas y grupos de atención prioritaria y protección.

Producción sobre derechos humanos 2012

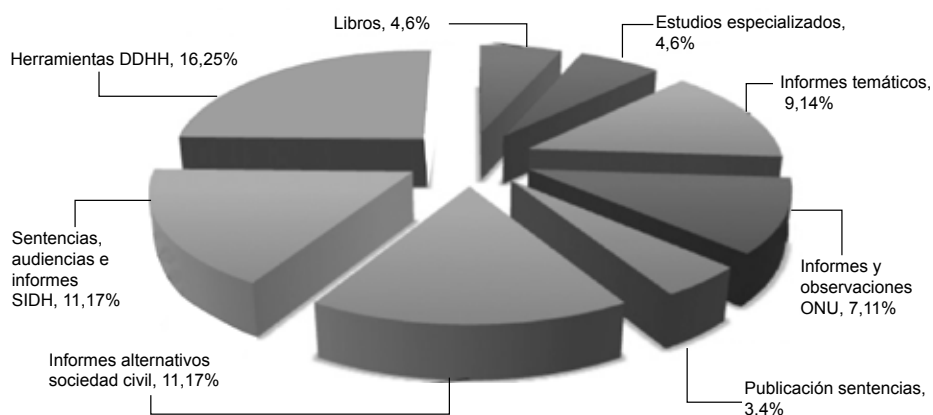
Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones (CRE, art. 66, num. 6).

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada,

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior (CRE, art. 18, num. 1).

En 2012 se registraron 65 producciones sobre derechos humanos,¹ entre libros especializados (4), estudios específicos (4); informes temáticos (9); informes del Estado ante órganos para la protección de derechos humanos de Naciones Unidas (4); informes paralelos (sombra o alternativos) de la sociedad civil ante estos mismos órganos (11); observaciones finales emitidas por estos órganos de Naciones Unidas (3); sentencias, informes y audiencias temáticas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (14); herramientas para el trabajo en derechos humanos como manuales, guías, memorias y producciones audiovisuales (16), (ver anexo 3).

Gráfico 7
Producción en derechos humanos, 2012

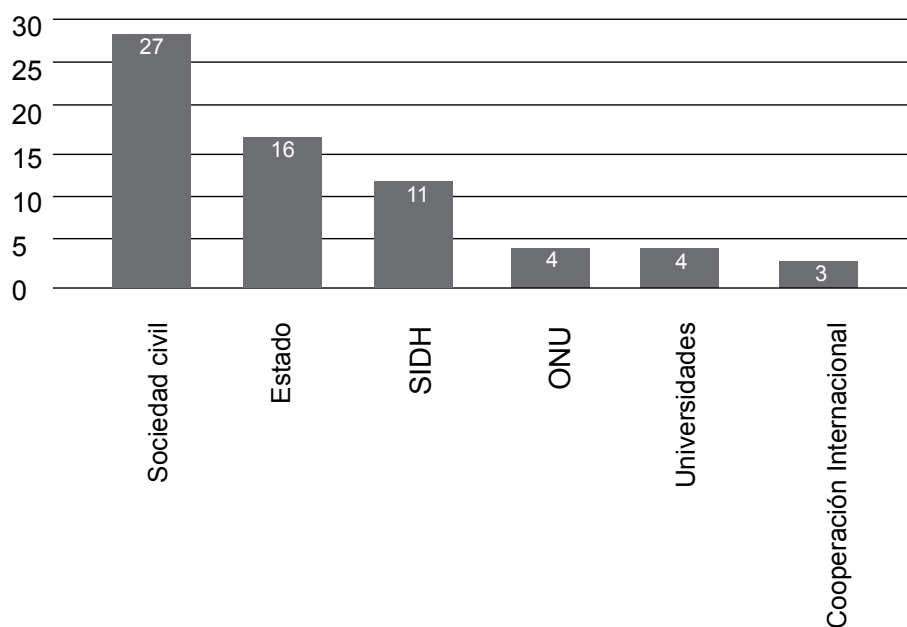


Fuente: PADH, Base de registro de producciones DDHH, 2012.
Elaboración: Gina Benavides Llerena, PADH, 2013.

Del total de la producción, el 41,5% corresponde a sociedad civil, el 24,6% al Estado, el 16,9% al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el 6,2% al Sistema de Naciones Unidas; el 6,2% a las universidades y el 4,6% a la cooperación internacional.

La producción del Estado se concentró en las siguientes instituciones: Defensoría del Pueblo del Ecuador (9), Ministerio de Relaciones Exteriores (4), Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (2) y Ministerio de Defensa (1). Por su parte, la producción de sociedad civil, provino de ONG de derechos humanos o de grupos específicos (16), coaliciones de organizaciones (8), veedurías y observatorios (2). La producción de las universidades se concentró en la UASB-E

Gráfico 8
Producciones en derechos humanos 2012, por sector



Fuente: PADH, Base de registro de producciones DDHH, 2012.

Elaboración: Gina Benavides Llerena, PADH, 2013.

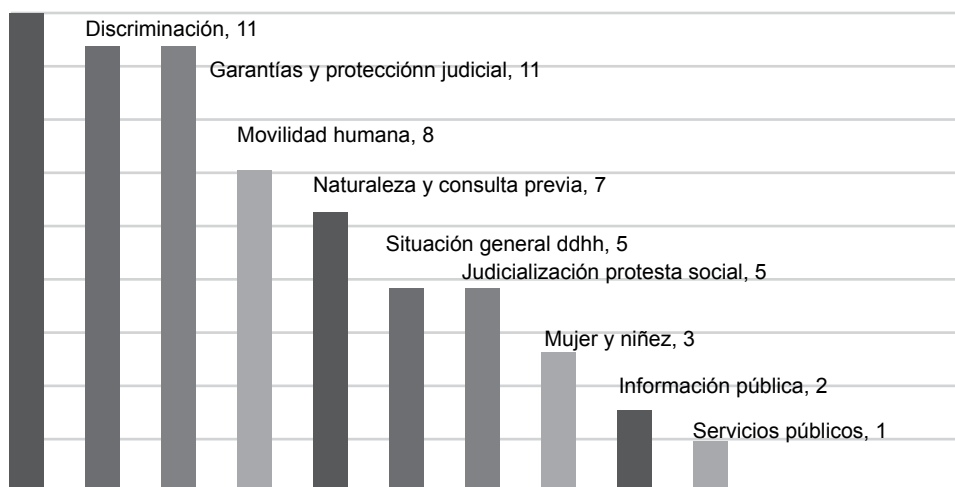
(3) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador (1); tres de estas producciones fueron auspiciadas por ACNUR. Y la producción de la cooperación internacional (3) se concentró en la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con una producción exclusiva y dos realizadas en cooperación con el Estado (Ministerio de Patrimonio y de Justicia y Derechos Humanos). En cuanto a la producción del Sistema de Naciones Unidas (3) está se concentró en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) y los Comités de derechos económicos, sociales y culturales (CDESC) y contra la discriminación racial (CDR) con un informe en cada uno; y la del Sistema Interamericano entre Corte IDH (2) y CIDH (9).

Las principales temáticas abordadas en el año giraron en torno a: derechos económicos, sociales y culturales y dentro de estos en particular los derechos de salud, educación y acceso a la tierra; derecho a la igualdad y no discriminación en especial a pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y migrantes; respeto a las garantías y protección judicial que incluye informes generales sobre justicia y casos sobre detención arbitraria, tortura y desaparición; derecho a la movilidad humana especialmente relacionadas al derecho al refugio; derechos de la naturaleza y consulta previa que giran en torno a las políticas extractivas y los derechos de pueblos indígenas; judicialización de la protesta social, en los casos de defensores de los derechos indígenas y de la naturaleza; y los jóvenes detenidos en el barrio Luluncoto;

y otras situaciones referidas a derechos de niños, niñas y adolescentes, acceso a información pública y servicios estatales.

Gráfico 9
Producciones en derechos humanos 2012, por temas

DESC, 12



Fuente: PADH, Base de registro de producciones DDHH, 2012.

Elaboración: Gina Benavides Llerena, PADH, 2013.

Durante 2012, el Estado ecuatoriano presentó cuatro informes periódicos de cumplimiento ante los siguientes órganos de supervisión de los tratados: Consejo de Derechos Humanos; Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación racial, CDR; Comité de derechos económicos, sociales y culturales, Comité DESC; y Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer, CEDAW.

A su vez, varias ONG y/o coaliciones de estas, presentaron informes paralelos a los del Estado ante los órganos de supervisión de tratados, con el siguiente detalle: Relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación (1); CDR (4); y Comité DESC (6). Ante el CDR los informes se concentraron en el análisis de la discriminación a los pueblos indígenas y a los migrantes internacionales y/o refugiados; y ante el Comité DESC las principales temáticas fueron políticas extractivas, territorio y derecho a la consulta previa e informada (3); derechos sexuales y reproductivos de las mujeres (2); y criminalización de la protesta social (1).

Como culminación del proceso de supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado ecuatoriano, tres órganos de Naciones Unidas (CDH, el CDR y el CDESC) emitieron sus recomendaciones y/o observaciones finales.

En relación con la producción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos durante el año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió dos sentencias: una que determina la responsabilidad del Estado por violación de los derechos de un pueblo indígena (Caso Pueblo Indígena Sarayaku vs. Ecuador); y la otra que niega la responsabilidad del Estado en el caso de secuestro, desaparición y muerte de una persona (Caso Palma Mendoza vs. Ecuador). En este año, el Gobierno ecuatoriano, dio cumplimiento a la obligación de publicación de tres sentencia emitidas por la Corte IDH (Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador; Crnel. José Alfredo Mejía Idrovo vs. Ecuador y Pueblo Indígena de Sarayaku vs. Ecuador).

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió seis informes de admisibilidad (Rodríguez Cárdenas y Familia; Fajardo y Náser; Peñafiel Salgado; García García y familia; S. y otras; Cedeño Muñoz y otros); en su mayoría relativos a la violación del derecho a las garantías y protección judicial; y uno de fondo sobre mala práctica médica que fue remitido a la Corte IDH para su juzgamiento (Suárez Peralta vs. Ecuador).

Además, las organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la CIDH, dos audiencias temáticas, una sobre la situación de la población refugiada en Ecuador; y la otra sobre la situación de los defensores de derechos humanos y de la naturaleza.

La producción de herramientas de orientación para el trabajo y la acción en derechos humanos fue muy variada durante el año y se concentró en: guías de información (4), memorias (2), manual (1), agenda (1), criterios (1), directrices (1), compendio de casos (1), cuaderno de trabajo (1). Las principales temáticas tratadas en estos materiales fueron: refugio (3), discriminación (2), derechos humanos en general (2), acceso a la información pública (2), educación (1), justicia (1) y ambiente (1). Su producción estuvo a cargo del Estado (6), sociedad civil (5) y cooperación internacional (1).

Por último, la producción audiovisual fue de tres productos: cuñas radiales, radio clip y video. Los temas que se abordaron fueron: derechos reproductivos, ambiente y criminalización. Su producción estuvo a cargo de organizaciones de la sociedad civil.

Como se puede apreciar, la producción en derechos humanos en 2012 evidencia un aumento importante respecto de 2011 (65 vs. 26 producciones). La tendencia general se encamina a una mayor concentración de la producción en la sociedad civil, sobre todo en informes alternativos y producción de herramientas de apoyo en el trabajo de derechos humanos. Por su parte, el Estado concentró su acción en los informes de cumplimiento y en la elaboración de informes temáticos y herramientas de orientación. Se evidencia un importante apoyo de organismos internacionales para la generación de producción especializada en derechos humanos. También se registra un interesante enlace de esfuerzos entre sociedad civil,

cooperación y universidades para la generación de estudios y/o investigaciones especializadas.

Pese a los avances, se registra la necesidad de fortalecer la producción que propicie la regularidad y los niveles comparativos para dar cuenta los niveles de progreso en el cumplimiento de los derechos humanos, así como incentivar estudios en profundidad y la ampliación de espacios de producción en el Estado y universidades.

Notas

1. Se debe indicar que este registro no agota la totalidad de la producción nacional, se concentra básicamente en las reseñas reportadas por las principales organizaciones sociales o de derechos humanos, especialmente las que tienen su sede en Quito, así como las instancias del gobierno central.
2. DPE, Oficio No. DPE-ADJP-2012-0091-0, de 31 de octubre de 2012. Suscrito por Patricio Benalcázar Alarcón, Adjunto Primero.
3. De acuerdo al art. 8, lit. p, de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, su titular debe informar anualmente a la Asamblea Nacional “sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador y de las labores de la Defensoría del Pueblo”.
4. DPE, “Informe de Labores 2012. El desafío de ser diferentes es sentirnos semejantes”, en <www.dpe.gob.ec>.
5. De acuerdo con la CRE, son atribuciones de la DPE, “además de las establecidas en la ley, las siguientes: 1. El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de protección, hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados; 2. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus incumplimientos; 3. Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos; 4. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas” (art. 215).
6. Este sistema incluye Sistemas de Información: Ecuador en Cifras. Información Estadística, Banco Central, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, Geoinformación 1:25000. Instituto Espacial Ecuatoriano, Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Sistema de Estadísticas Territoriales, Registro Interconectado de Programas Sociales, Sistema de Indicadores de Pasivos Ambientales y Sociales, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Sistema Integrado de Consultas, Sistema Único de Información Ambiental y Sistema de Información Sectorial Automatizado. En Información estadística-Consultas interactivas incluye: Indicadores PNBV, Información de Distritos y Circuitos, Información de inversión pública, Información de actualización diaria, Información socio-demográfica (educación, salud, vivienda y hogar), Información económica, Información agropecuaria, Información sector estratégico-Energía, Gobiernos autónomos descentralizados y Empresas públicas constituidas por la Función Ejecutiva. Además cuenta con la sección Geográfica y del SNI Territorial. Sistema Nacional de Información, en <http://www.sni.gob.ec/web/guest;jsessionid=0B0058E07C1949B9229C37060437B06B>.
7. Organización de Naciones Unidas, “Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal Ecuador”, Consejo de Derechos Humanos, (A/HRC/21/4), 2012, p. 25.

8. Tomando en cuenta que un hecho usualmente es mencionado en más de una noticia, se registran los hechos y no las noticias.
9. Cabe señalar que los principales medios cuentan, cada vez más, con la modalidad de prensa virtual y en varios está implementado el sistema de buscador, lo que permite indagar y acopiar información.
10. El período de revisión fue de enero a diciembre y la base fue alimentada por Gabriela Paredes.
11. PADH, *Informe sobre derechos humanos. Ecuador 2011*, Quito, UASB-E, 2012, p. 27.
12. PADH, “Base de datos. Seguimiento de prensa impresa”, PADH, 2012. Elaborada a partir de la Cronología realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis de la Coyuntura del Ecuador del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO), con la coordinación de Mario Unda (Centro de Investigaciones Ciudad), da seguimiento a dos diarios de alcance nacional: *El Universo* y *El Comercio*; el período de revisión fue octubre de 2011 a diciembre de 2012. Cuenta con 762 registros de hechos noticiosos con 2.102 registros de derechos afectados.

Conflictividad social y derechos humanos



Son deberes primordiales del Estado [...] Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción (CRE, art. 3, num. 1).

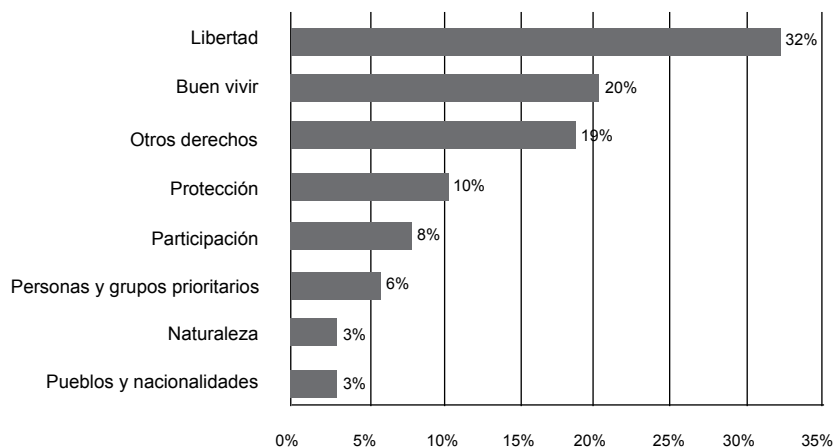
La conflictividad, como parte de toda dinámica social, permite ubicar, entre otros aspectos, las iniciativas, demandas y oposiciones de grupos poblacionales respecto de problemas y temas cruciales, generalmente activadas ante instancias estatales y expresadas de diferente manera; al mismo tiempo permite visualizar las formas de procesamiento de los conflictos, que en muchos casos ejercen influencia sobre sus resultados.

En continuidad a la línea de reflexión sobre la conflictividad y derechos humanos expuesta en los informes anteriores, se presentan los datos comprendidos entre octubre/2011 y diciembre/2012. De la revisión, se identifican 454 conflictos, de los cuales 101 se produjeron en el último trimestre de 2011 y 353 en 2012. Esta cantidad representa un incremento de la conflictividad, pues en el Informe de 2011, se registraron 280 conflictos, esto es, un aumento de 73 situaciones.

En 2012, la conflictividad en su conjunto repercutió principalmente en los derechos de: libertad (32%); buen vivir (20%); otros (19%), los demás bloques de derechos tienen porcentajes menores al 10%: (ver gráfico 10).

Respecto de 2011, se mantiene la tendencia de los dos bloques constitucionales de derechos más afectados, con una disminución de sus porcentajes, que responde en parte al cambio en el registro de la información de 7 a 8 bloques (incorpora *otros*), que se explicó en la parte de seguimiento de prensa. Se resalta el incremento de porcentaje de 2 a 6% en la repercusión de derechos en personas y grupos de atención prioritaria.

Gráfico 10
Conflictividad y derechos humanos octubre/2011-diciembre/2012



Fuente: PADH, Base de registro de producciones DDHH, 2012.

Elaboración: Gina Benavides Ulerena, PADH, 2013.

Los sujetos que disputan intereses y posiciones son diversos, unos organizados en gremios y otras asociaciones, y otros movilizados ante situaciones específicas, como por ejemplo víctimas y familiares que demandan solución a sus causas. El procesamiento/manejo de la conflictividad se desarrolló en la tendencia ya ubicada en años anteriores, de polarización ante el acuerdo o no de la gestión del Gobierno y con limitados espacios de efectivo diálogo y negociación.

Temas como la seguridad ante muertes violentas, violencia contra las mujeres, robos, sicariato, secuestro, accidentes de tránsito, entre otros cobraron fuerza. Otro grupo significativo de conflictos giró en torno a lo laboral (estabilidad y condiciones de trabajo), tanto en el sector estatal como privado. Continuó la conflictividad entre el Gobierno y los medios; se resalta: la condena al diario *El Universo* y a periodistas del libro *El gran hermano*; los casos de las revistas *Vanguardia* y *Vistazo*; las denuncia de amenazas telefónicas a Janeth Hinostroza luego del reportaje en el caso Duzac; y la disposición a ministros para que no den declaraciones en medios privados. La educación también registró varios conflictos en torno al acceso al bachillerato y la universidad; la situación laboral de docentes en los distintos niveles educativos; los cuestionamientos de las universidades a la Ley Orgánica de Educación Superior; y sobre algunos procedimientos en el caso de las universidades cerradas.

Otra línea de conflictividad se expresó sobre la oposición a medidas gubernamentales en torno al modelo económico, el peso de las actividades extractivas y temas relacionados como el agua y la tierra; las acciones dadas son principalmente lideradas por organizaciones de pueblos y nacionalidades indígenas; un punto relevante fue la movilización de marzo en torno la vida, el agua y dignidad, en la cual se dio una articulación con otros sectores sociales.

Cabe señalar que 2012, al ser un año preelectoral, buena parte de la conflictividad se manifestó y procesó en este marco.

Desarrollo normativo y derechos humanos



La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución (CRE, art. 84).

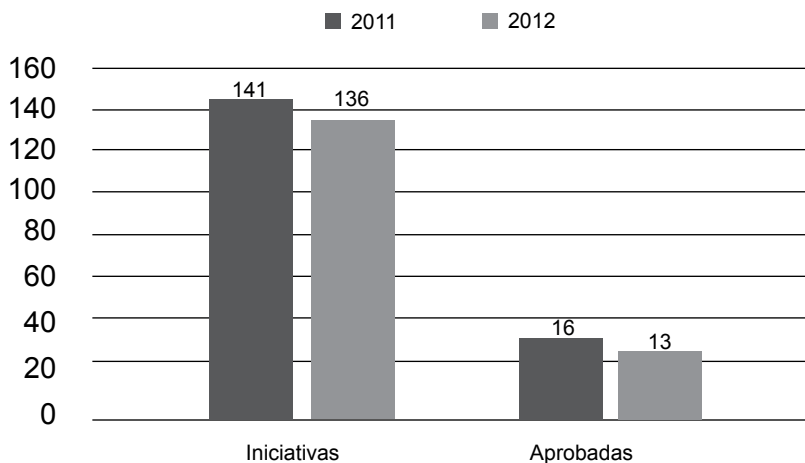
El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes (CRE, art. 82).

El desarrollo normativo es una de las garantías básicas para la protección de los derechos. Esta potestad no se limita a la función legislativa, sino a todas las funciones del Estado y otras instancias de gobierno, quienes deben ejercerla garantizando el respeto a la supremacía constitucional y a los derechos fundamentales. Ante la imposibilidad de abordar todo este amplio campo de acción, el análisis se limita a la labor de la Asamblea Nacional y se ubican algunas normas concretas de rango inferior que han generado preocupación nacional e internacional.

Proyectos y leyes aprobadas

De acuerdo con los datos de la Asamblea Nacional del Ecuador, procesados en la base de desarrollo normativo del PADH,¹ durante 2012, esta entidad recibió 136 proyectos de ley y aprobó 13 leyes, de las cuales cuatro corresponden a iniciativas presentadas en años anteriores.

Gráfico 11
Desarrollo normativo 2011-2012

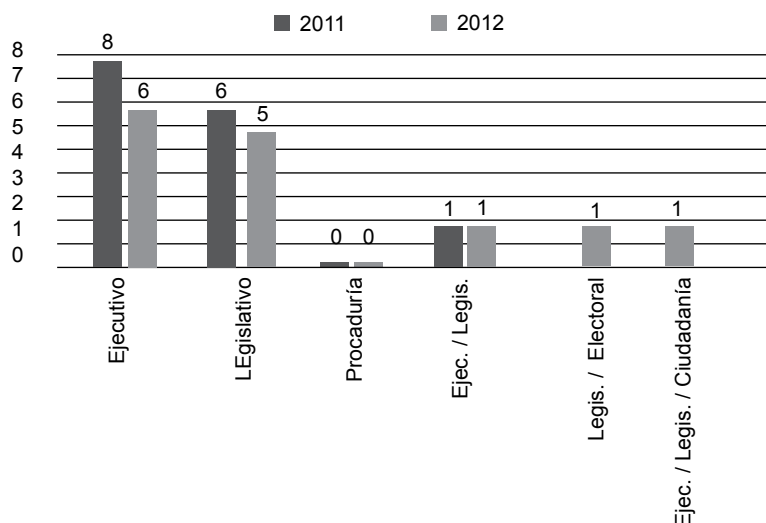


Fuente: Base desarrollo normativo Asamblea Nacional del Ecuador, PADH, 2011-2012.
Elaboración: Gina Benavides Llerena, PADH, 2013.

Del total de proyectos presentados 124 fueron de iniciativa legislativa (91%), 6 del Ejecutivo (4,41%), 5 de iniciativa popular (3,68%) y 1 de la Función Judicial (0,78%). Entre los que se destacan por su proyección para el desarrollo de los derechos constitucionales están: Ley Orgánica de Derechos Colectivos del Pueblo Afroecuatoriano; Ley Orgánica Intercultural para el Buen Vivir de las Juventudes; Ley Reformatoria a la Ley del Registro Civil, Identificación y Cedulación sobre Regulaciones sobre Unión de Hecho, Registro de Personas Transexuales y Cambio de Nombre; Ley para la Prevención, Diagnóstico, Control y la Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama; Ley Orgánica de Tierras y Territorios; Ley Orgánica de Comunas y Organización Comunitaria; Ley en Defensa de los Trabajadores Migrantes contra el Fraude Hipotecario Cometido en España; Ley Orgánica de Consulta a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Montubias y Afroecuatorianas; Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Personas de Diversa Condición Sexo Genérica; Ley Orgánica de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas; Código Orgánico de Trabajo; Ley Orgánica de los Consejos Nacionales de Igualdad; Ley de Protección y Asistencia a Madres Adolescentes; Ley de Prevención y Protección Integral Contra la Epidemia del VIH-SIDA; Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Contra la Violencia a la Mujer; y Ley Orgánica Contra la Violencia de Género hacia las Mujeres.

Del total de leyes aprobadas, cuatro fueron orgánicas, dos generales, tres derogatorias, una interpretativa y tres reformatorias. Durante 2012, se mantuvo la tendencia de mayor aprobación a las leyes provenientes del Ejecutivo, lo que guarda

Gráfico 12
Leyes aprobadas por iniciativa



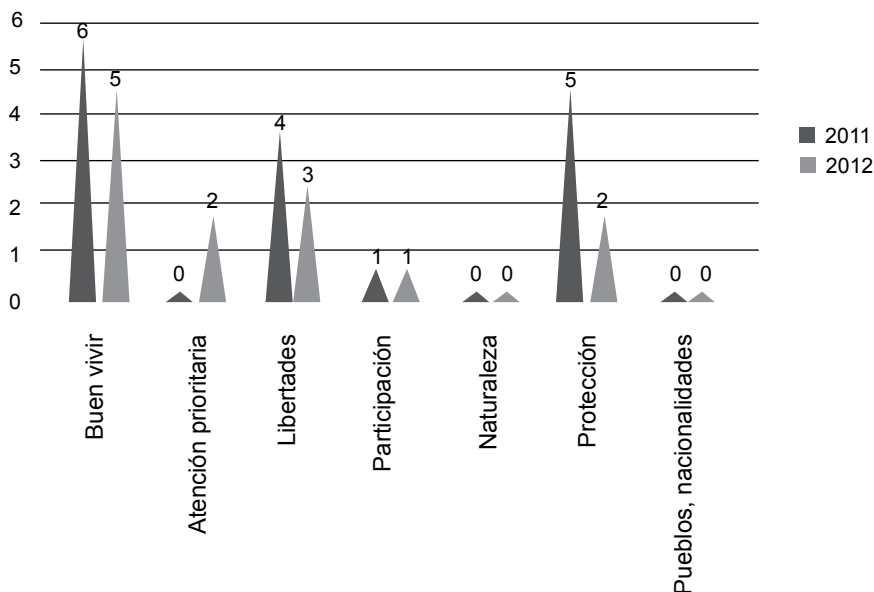
Fuente: Base desarrollo normativo Asamblea Nacional del Ecuador, PADH, 2011-2012.
Elaboración: Gina Benavides Llerena, PADH, 2013.

una relación inversa según el número de iniciativas presentadas. El 46% de las leyes aprobadas fue de iniciativa del Ejecutivo, el 38,5% del Legislativo, y el 15% fueron iniciativas presentadas de manera conjunta entre el Ejecutivo, Legislativo y una de la función Electoral. No se aprobó ninguna ley de iniciativa popular.

En relación con la repercusión de las leyes aprobadas por bloques de derechos, durante este año se mantuvo la tendencia de mayor producción de leyes sobre los bloques de buen vivir y libertades; y persistió el déficit en relación a los derechos colectivos y de la naturaleza. Se valora como positivo el aumento de aprobación de leyes sobre grupos de atención prioritaria.

Las leyes aprobadas que incluyen disposiciones para el desarrollo de derechos fueron: la Ley reformativa a la Ley Orgánica de Salud, sobre el Tratamiento de las Enfermedades Raras, Huérfanas y Catastróficas, que establece mecanismos para mejorar la atención y tratamiento de ese tipo de enfermedades, ubica a quienes las padecen como personas en doble vulnerabilidad y contempla la posibilidad de apoyo a migrantes en el exterior; Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos, que garantiza el acceso al crédito para uso familiar, evita que se comprometa el patrimonio personal en caso de incumplimiento y la ejecución de sentencias por préstamos hipotecarios en el extranjero; Ley Orgánica de Discapacidades, que fija las políticas y acciones específicas para enfrentar la no discriminación por discapacidad, determina la existencia de acciones afirmativas, fija el sistema nacional de protección integral de discapacidades y establece procedimiento en caso de violación a los derechos de las personas con discapacidad; Ley

Gráfico 13
Leyes aprobadas por bloques de derechos



Fuente: Base desarrollo normativo Asamblea Nacional del Ecuador, PADH, 2011-2012.
Elaboración: Gina Benavides Llerena, PADH, 2013.

Orgánica de Defensa Derechos Laborales, que contempla la ampliación de la jornada de lactancia a 12 meses, equipara la jornada de descanso obligatorio para el trabajo doméstico al del trabajador general, determina el procedimiento de coactivas para pagos de trabajadores de casinos; establece que el cálculo de utilidades de los trabajadores se hará a base de información dada por la empresa al SRI, fija un período de amnistía para la afiliación al IESS de los trabajadores con relación en los últimos 3 años.

Se aprobaron, además, leyes de organización institucional que contribuyen el ejercicio de derechos; estas fueron: Ley Derogatoria de la Ley de Burós de Información Crediticia y Reformatoria a la Ley Nacional del Sistema del Registro de Datos Públicos, a la Ley de Economía Popular y Solidaria, del Sector Financiero Popular y Solidario; y la Ley de Compañías, por la cual se establecen mecanismos de protección de los derechos de los titulares de la información crediticia, prohíbe la comercialización de esta información y crea la ficha única del ciudadano; y la Ley de Redistribución del Gasto Público, por la cual se estableció un mecanismo de financiamiento para el aumento del bono de desarrollo humano, y fijó prioridades de atención del mismo a las zonas de frontera, a las personas adultas mayores y con discapacidad.

De las leyes aprobadas, la que recibió cuestionamiento de diversos sectores fue la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones

Políticas, Código de la Democracia, al disponer que los medios de comunicación se “abstengan de hacer promoción directa, ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, postulados electorales o tesis política” (art. 21).

En 2012 la Asamblea Nacional mantuvo el déficit de aprobación de tres leyes que debían aprobarse en el plazo de 360 días después de la entrada en vigencia de la nueva Constitución: Ley de Comunicación, Ley de Recursos Hídricos y Ley de Cultura. Además persistió el déficit de desarrollo normativo sobre derechos de la naturaleza y de las comunidades, pueblos y nacionalidades, y quedaron pendientes de aprobación iniciativas de Ley de tierras y territorios; agro y biodiversidad; comunas, compatibilización entre la justicia indígena y ordinaria; y consulta previa.

En relación con los derechos de grupos de atención prioritaria, aunque el nivel de iniciativas de ley y leyes aprobadas aumentó en 2012, en general todavía este es un ámbito de regulación que mantiene déficit. Por ello, es importante el impulso a las iniciativas de ley sobre protección de los derechos de los pueblos afrodescendientes, de juventudes, atención a madres adolescentes, de igualdad de género, de violencia contra la mujer, normas de protección para población transexual, de movilidad humana y la de los consejos de igualdad.

Respecto a los derechos de libertad y protección, se mantienen pendientes de aprobación las iniciativas de ley sobre prevención de la tortura; reparación en general y en particular de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. En relación a esta última materia cabe tener en cuenta que, en 2010, la Comisión de la Verdad conjuntamente con la Defensoría del Pueblo presentaron a la Asamblea Nacional la propuesta de Ley de víctimas. En marzo de 2012 la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado emitió su informe para primer debate sobre esta ley, en el cual la propuesta presentada originalmente fue delimitada a un período determinado (4 de octubre de 1983 a 31 de diciembre de 2008), cuando lo procedente era, dada la ausencia de una legislación específica sobre la materia, la adopción de un ley que ampare a todas las víctimas, sin distinción del período en que fueron cometidas las violaciones a sus derechos.

Por otro lado, uno de los proyectos que mayor discusión generó en el año fue el proyecto de Código Integral Penal presentado por el Ejecutivo en 2011. La Comisión Especializada Permanente de Estructura del Estado y Justicia a cargo de su tramitación recibió varias observaciones sobre el proyecto, en especial, sobre los temas de: disminución de la edad para la imputabilidad y juzgamiento penal a los adolescentes, la tipificación de los delitos de desacato, los delitos de sabotaje y terrorismo, femicidio, aborto, violencia contra la mujer y trata de personas. Su aprobación fue diferida para 2013 y se espera que la misma se enmarque en un proceso de respeto irrestricto a los estándares constitucionales y de legislación internacional de derechos humanos y de no regresividad.

Otro proyecto de ley que se discute desde 2010, y que genera preocupación en materia de derechos humanos, es el de reformas a la Ley de Seguridad Pública

y del Estado, mediante el cual se pretende ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas para actividades de control interno, contrariando expresamente lo establecido en la Constitución.

En torno a los derechos del buen vivir, un proyecto de enorme trascendencia en materia laboral es la aprobación del Código de Trabajo, al que se suma el proyecto sobre jubilación de la mujer y de seguro universal.

Resoluciones legislativas

Durante el año, la Asamblea Nacional adoptó varias resoluciones legislativas entre las que se destacan, por su trascendencia para derechos humanos, las siguientes: amnistía conferidas a ocho campesinos de Nabón que fueron sentenciados por sabotaje pese a haber sido amnistiados por la Asamblea Constituyente en 2008; y la aprobación de informes de indulto, por razones humanitarias, a dos personas privadas de la libertad por delitos comunes.

También vía resolución se aprobaron dos convenios internacionales sobre derechos humanos: la Convención para Reducir los Casos de Apatridia y el Convenio sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadores con Responsabilidades Familiares.

Una resolución importante adoptada por la Asamblea en este año fue el Instructivo para la Aplicación de la Consulta Prelegislativa,² para garantizar “el derecho a la participación de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las organizaciones titulares de derechos colectivos, a ser consultados sobre temas específicos incluidos en los proyectos de ley que podrían afectar de manera objetiva sus derechos” (art. 2). Dicho instructivo establece principios y procedimientos para viabilizar este tipo de consultas. Si bien el instructivo refleja una voluntad por incorporar en el quehacer legislativo la consulta, preocupa que su adopción se haya hecho mediante resolución y no mediante ley, como corresponde por tratarse de un derecho constitucional (CRE, art. 57, num. 17). Además, en su formulación se evidencian algunos puntos que pueden incidir en su eficacia, como por ejemplo, la determinación de los asuntos sustantivos de consulta que son definidos por la Comisión a cargo y sometidos a la aprobación del pleno de la Asamblea Nacional; y el resultado final del proceso de consulta, que aunque se enmarca discursivamente bajo el procedimiento de consenso, en la práctica reproduce una lógica de mayorías.

Recomendaciones internacionales para el desarrollo normativo

En 2012 tres órganos de supervigilancia internacional sobre derechos humanos de Naciones Unidas emitieron recomendaciones específicas para

el desarrollo normativo del país. A ello se unieron las recomendaciones de una Veeduría Internacional conformada por el Gobierno para observar el proceso de reforma a la Justicia. Y ante el Sistema Interamericano se posicionaron los efectos de limitación del derecho al refugio generados por una norma de rango inferior a la ley.

A nivel de ONU, el Consejo de Derechos Humanos, dentro del Examen Periódico Universal al que se sometió Ecuador, recomendó la ratificación del Protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño relativo a denuncias individuales; las Enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma; y el Convenio 189 de OIT relativo al trabajo decente para trabajadoras y trabajadores domésticos. Este mismo Consejo exhortó al Estado a aprobar legislación que garantice el ejercicio de los derechos colectivos de la población indígena y los afroecuatorianos, de manera que aumenten las medidas de acción afirmativa en favor de estos grupos; examinar que las leyes vigentes y los proyectos de ley sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa estén en conformidad con las normas internacionales; así como eliminar del Código Penal las disposiciones que penalicen la difamación y el desacato; revisar la tipificación de los delitos de terrorismo y sabotaje; y velar porque los decretos 982/2008, 812/2011, relativos a la libertad de asociación, la libertad de reunión y la libertad de expresión, no se apliquen para bloquear la labor legítima de las ONG ni impedir la labor de los defensores de derechos humanos.³

El Comité contra la Discriminación Racial reiteró la recomendación que había realizado en informes pasados, para que se agilice el proceso de adopción del anteproyecto de ley para armonizar y regular las funciones, competencias y responsabilidades del sistema de justicia de los pueblos indígenas y las del sistema de justicia nacional.⁴

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales realizó las siguientes recomendaciones: suspender el Decreto Ejecutivo (DE) 1247⁵ de 2012, que contiene el Reglamento para la ejecución de la consulta previa, libre e informada en los procesos de licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarburiíferos; y en su lugar, diseñar de manera participativa con los pueblos indígenas las medidas legislativas para regular el derecho a la consulta, así como las consultas prelegislativas a que haya lugar; clarificar el ámbito de aplicación de los tipos penales de sabotaje, terrorismo y restringir su aplicación en contextos de manifestaciones sociales; ampliar el marco normativo de protección del derecho a la alimentación, complementando la Ley orgánica de alimentación con disposiciones tendientes a proteger la soberanía alimentaria; e implementar una reforma al código penal con el fin de establecer excepciones a la penalización del aborto cuando el embarazo sea consecuencia de una violación aunque no se trate de mujeres con discapacidad y cuando se ha establecido la existencia de malformaciones congénitas. Además instó a suprimir del Código Penal los términos de “idiotas” y “dementes” cuando se refiere a las mujeres con discapacidad mental y/o psicosocial. Por último, señaló su preocupación por el despido sin motivación de trabajadores públicos en el marco de la aplicación del DE 813 de 2011.⁶

A nivel del Sistema Interamericano, en octubre de 2012, en el marco de una audiencia temática ante la CIDH, se evidenciaron las medidas regresivas y limitativas de derechos contenidas en el DE 1182 adoptado en 2012, para reglamentar el derecho al refugio en el Ecuador, por: la supresión de la definición ampliada de refugio contenida en la Declaración de Cartagena; fijar un plazo para la presentación de solicitudes y refugio; y establecer un sistema acelerado de admisión violatorio del debido proceso.

Por su parte, la Veeduría Internacional a la Reforma de Justicia, en su informe final recomendó expresamente que el proyecto de Código Penal Integral se compatibilice con las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos; se tipifique la responsabilidad penal de personas jurídicas en los delitos de lesa humanidad; y se emita una Ley de víctimas de delitos de lesa humanidad.⁷

Como se puede apreciar, si bien se han registrado avances importantes en la producción legislativa de la Asamblea Nacional, todavía existen derechos constitucionales pendientes de desarrollo, especialmente en materia de derechos de grupos de atención prioritaria, de pueblos y nacionalidades y de la naturaleza. Se espera además que la nueva Asamblea Nacional supere el déficit de las leyes ordenadas por la propia Constitución y que las recomendaciones emitidas por organismos internacionales de derechos humanos y por la veeduría internacional para la reforma de la justicia sean tomadas en cuenta para la discusión y aprobación de leyes de gran trascendencia nacional como el Código Integral Penal, Ley de Consulta Previa y Prelegislativa, Código del Trabajo, entre otros.

Por otra parte, se exhorta al Gobierno a la revisión de normas de rango inferior a la ley que han sido adoptadas y que han sido observadas por los organismos internacionales de protección de derechos humanos, en particular los Decretos Ejecutivos 982/2008 y 812/2011 relativos al registro y funcionamiento de organizaciones no gubernamentales y de cooperación; 813/2011 sobre despidos de trabajadores públicos; 1182/2012 que reglamenta el derecho de refugio; y 1247/2012, sobre la consulta previa para actividades hidrocarburíferas.

Notas

1. PADH, “Base de datos. Conflictividad”, PADH, 2012. Elaborada a partir de la Cronología (OSAL-CLACSO), el período de revisión fue octubre de 2011 a diciembre de 2012, se identifica 454 conflictos con 2.550 registros de derechos afectados. Procesamiento a cargo de María Belén Ayala.
2. Esta base de datos se construye de manera anual con las siguientes fuentes: página web de la Asamblea Nacional del Ecuador, en <http://www.asambleanacional.gov.ec>; y respuestas a peticiones de información formuladas a la Secretaría de la Asamblea Nacional. Para el año 2012, Asamblea Nacional Del Ecuador, Oficio No. SAN-2013-0002, de 4 de enero de 2013, suscrito por Andrés Segovia, Secretario General.
3. Resolución Legislativa 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 733, de 27 de junio de 2012.

4. ONU, “Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal para Ecuador”, Consejo de Derechos Humanos, (A/HRC/21/4), 2012, párr. 134.44; 135.38, 44 y 58.
5. ONU, “Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Ecuador”, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, (CERD/C/ECU/CO/20-22), párr. 19.
6. Emitido el 19 de julio de 2012, publicado en el RO 759, de 2 de agosto de 2012.
7. ONU, “Observaciones finales del Comité sobre el tercer informe del Ecuador”, Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (E/C.12/ECU/CO/3), 2012, párr. 9, 10, 16, 24 y 29.
8. Baltasar Garzón et al., “Informe Final Veeduría Internacional para la Reforma a la Justicia en Ecuador”, Quito, 2012, p. 28-29.

Justicia y derechos humanos



Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley (CRE, art. 75).

En este apartado se expone información sobre algunos parámetros importantes para garantizar la justicia en términos generales como derecho y de manera particular en casos judicializados de derechos humanos: a) el control constitucional; b) la reforma de la administración de justicia; c) la defensa pública; d) de la activación de garantías constitucionales; e) la protección a víctimas de violaciones de derechos humanos; y, f) el estado de los casos de la Comisión de la Verdad.

Control constitucional

La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia (CRE, art 429).

La Corte Constitucional es clave para la construcción del Estado constitucional de derechos y justicia, intercultural y plurinacional. Conforme ella misma lo ha determinado, dos son los objetivos fundamentales que debe cumplir: “salvaguardar y defender el principio de la supremacía constitucional, y proteger los derechos, garantías y libertades públicas”.¹

En respuesta a la petición de información formulada por el PADH sobre el ejercicio de sus competencias, esta Corte informó que hasta octubre de 2012 ingresaron 42 procesos de acción por incumplimiento, 1.760 de acción extraordinaria

de protección y uno sobre medida cautelar; sin señalar cuántos fueron resueltos. Refirió también que emitió una sentencia de revisión que constituye jurisprudencia vinculante, tres sentencias de control de oficio sobre estados de excepción (aunque en el año se emitieron 14 estados de excepción) y 11 dictámenes sobre tratados internacionales. No hubo sentencias sobre acción extraordinaria de protección de justicia indígena ni sobre inconstitucionalidad por omisión por parte de las instituciones estatales de los mandatos constitucionales.

A pesar de que la Corte Constitucional es la instancia máxima de control constitucional, no proporcionó información sobre las demandas de inconstitucionalidad recibidas ni sobre las declaratorias de oficio de inconstitucionalidad de normas conexas contrarias a la Constitución.

Se mencionan dos silencios notables y muy importantes de la Corte que limitan el desarrollo del Estado constitucional diverso y de derechos. El uno tiene que ver con la competencia de seleccionar casos para revisar las sentencias que emiten los jueces de primera instancia con relación a las garantías jurisdiccionales. Desde que se expidió la CRE, es decir después de 4 años, apenas se han expedido dos sentencias de revisión vinculantes. Para poder valorar este aspecto, si comparamos esta competencia con la misma que tiene la Corte Constitucional Colombiana, podremos observar que en los primeros cinco años de funcionamiento de esta (1992-1996) conoció 1.339 casos.²

El segundo está relacionado con la innovación que introdujo la Constitución al reconocer a la justicia indígena en el mismo nivel que la justicia estatal, con la única limitación de que se respeten los derechos fundamentales, en especial los derechos de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes y que se la practique en su ámbito territorial (CRE, art. 171). De esta forma, cuando existen conflictos de competencia entre la justicia indígena y la justicia estatal, la única autoridad que puede resolver dichos conflictos es la Corte Constitucional. En 2010 hubo un conflicto de competencia en el caso conocido como La Cocha, en el que la comunidad juzgó y resolvió un caso de muerte, y autoridades de la justicia estatal no solo no estuvieron de acuerdo con lo resuelto, sino que denunciaron a la autoridades indígenas y procesaron a las personas juzgadas (ahora están llamadas a juicio por asesinato y se presentan todos los viernes en el Tribunal Penal de Cotopaxi). Este caso lleva tres años en la Corte Constitucional y se mantiene sin resolución, pese a que en él se juegan no solo los derechos de las personas a no ser juzgadas dos veces por el mismo hecho (*non bis in ídem*), sino también la construcción del Estado plurinacional.

De esta forma, se puede concluir que en 2012, la Corte Constitucional del Ecuador: 1. Tiene una baja producción de revisión de sentencias; 2. No ha dado la suficiente importancia a las garantías jurisdiccionales de protección de derechos; 3. No evidencia acciones concretas para contribuir en la construcción de un Estado pluricultural que establezca clara y adecuadamente la relación entre las competencias de la justicia indígena y la estatal.

Ante esta situación es urgente que la Corte Constitucional fortalezca sus competencias de control y justicia constitucional como un mecanismo efectivo

para la protección y garantía de los derechos humanos. En ese sentido, se exhorta a que supere los vacíos que se registran en materia de sentencias vinculantes de revisión, así como las de disputas de competencia entre justicia indígena y del Estado. Es además imperativo que desarrolle un sistema de información que garantice el acceso y seguimiento de las causas y que permita ubicar cuantitativa y cualitativamente su trabajo.

Garantías jurisdiccionales

Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general por las siguientes disposiciones: 1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. 2 [...] a) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. [...] b) Serán hábiles todos los días y horas. c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito sin formalidades y sin necesidad de citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de un abogado para proponer la acción (CRE, art. 86).

Según la CRE, la protección de los derechos constitucionales se concreta a través de tres tipos de garantías: normativas, de políticas públicas y jurisdiccionales. Las garantías jurisdiccionales son: Acción de Protección (art. 88), Acción de hábeas corpus (art. 89 y 90), Acción de acceso a la información (art. 91), Acción de hábeas data (art. 92); Acción por incumplimiento (art. 93); y Acción extraordinaria de protección (art. 94).

La información enviada por el Consejo de la Judicatura de Transición fue procesada por el PADH (ver anexo 1) y permite ubicar en términos globales el número de garantías jurisdiccionales interpuestas en 12 provincias medianas y pequeñas (16 + 8)(ver cuadro 4 en página 48).

De ese total, 621 procesos fueron apelados, lo que representa el 37%. Cerca de la tercera parte de la información enviada contiene el detalle del tipo de garantía accionada; la acción de protección (61%) y el hábeas corpus (18%) son las más interpuestas, seguidas de la medida cautelar (8%), el hábeas data (7%) y acceso a la información (6%).

Para ampliar esto, se revisó información de la Función Judicial de Pichincha;³ según esta fuente, en 2012 se interpusieron 1.726 garantías jurisdiccionales, 348 menos en comparación con el mismo período en 2011, lo que representa una disminución del 16,78%. De ellas, las principales garantías son la acción de protección (53%) y hábeas corpus (40%); con gran diferencia porcentual sigue el hábeas data con el 6% (ver anexo 5, gráfico 1), manteniéndose la tendencia de 2011 y 2010 expuesta en los informes anteriores.

La acción de protección disminuyó en valor absoluto en 29,23% y también disminuyó en el porcentaje respecto del total de garantías interpuestas en el año en 9,33 puntos. Para el caso del hábeas corpus se registra un incremento en términos absolutos de 3,92% y aumentó el porcentaje en 7,95 puntos respecto del total

Cuadro 4
Garantías interpuestas por provincias, 2012

No.	Provincia	TG
1	Azuay	405
2	Bolívar	39
3	Cañar	80
4	Carchi	18
5	Chimborazo	97
6	Cotopaxi	38
7	Imbabura	293
8	Loja	380
9	Orellana	56
10	Pastaza	60
11	Santa Elena	170
12	Zamora Chinchipe	42
	Total	1.678

Fuente: Respuestas de 12 provincias a petición de información.
Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

de garantías. Los procesos de hábeas data presentan un aumento en términos absolutos de 4,44% y en valor relativo de 1,11 puntos respecto de 2011 (ver anexo 5, cuadro 1).

Durante el período señalado en 2012, se resolvieron 1.294 procesos constitucionales, 25 causas menos que en 2011. De los procesos resueltos, 1.054 corresponden a ingresos efectuados en 2012 y 240 a causas ingresadas en fechas anteriores.

La relación entre causas ingresadas y resueltas por tipo de garantía muestra que para el acceso a la información pública, la acción de protección y el hábeas corpus el porcentaje es mayor al 60%, mientras que para la acción extraordinaria de protección y el hábeas data los porcentajes son menores, 20% y 40% respectivamente; la única medida cautelar que ingresó el 20 de enero no fue resuelta (ver anexo 5, gráfico 2).

La dinámica mensual entre ingreso y resoluciones deja causas pendientes en proporciones diferentes, hay meses con porcentajes bajos de resolución, por ejemplo, en el mes de enero ingresaron 100 procesos de acción de protección y se resolvieron 10; en el mismo mes, ingresaron 64 peticiones de hábeas corpus y se resolvieron 28 (ver anexo 5, cuadros 2, 3 y 4).

En promedio, las judicaturas resolvieron el 61% de los procesos constitucionales ingresados en 2012, quedando pendiente un 39% de las causas, cifra preocupante pues si por principio los procesos judiciales deben ser procesados con agilidad y en los tiempos previstos, la activación de garantías jurisdiccionales

demanda mayor celeridad para que efectivamente sean garantes de los derechos, especialmente cuando se trata de hábeas corpus.

De la información proporcionada, en 2012 fueron apeladas 324 causas, de las cuales 321 fueron procesos ingresados en ese año; no se indica el número de los que fueron resueltos ni hay desglose por tipo de garantía.

Por su parte, la Corte Nacional de Justicia, en su respuesta a la petición de información efectuada, reporta que entre noviembre/2011 y 24 de octubre/2012, recibió 51 recursos de apelación de hábeas corpus y uno para dirimir la competencia sobre un hábeas corpus.

En síntesis, de la información de las 13 provincias, la acción de protección y el hábeas corpus son las principales garantías accionadas y las restantes son porcentajes menores. La magnitud de garantías interpuestas no es alta; en Pichincha, que cuenta con 96 juzgados, el promedio es de 18 procesos al año, esto es, 1,5 por mes. La muestra de las 12 provincias pequeñas y medianas implica un promedio de 5,3 causas al año por juzgado y se observan diferencias en el promedio de carga procesal por provincias, siendo la más alta en Santa Elena y la más baja en Carchi (ver anexo 1, cuadro 2).

Respecto a la información más detallada para el caso de Pichincha, las principales tendencias evidenciadas en años anteriores se mantienen en 2012; esto es, hay una disminución de las garantías interpuestas y las principales son la acción de protección, el hábeas corpus y el hábeas data, que, en conjunto, suman el 98,38% del total y las demás representan un porcentaje mínimo, pues en conjunto alcanzan 1,62%. Así también se mantiene la demora en el procesamiento.

Esta información estadística que permite ubicar grandes tendencias requiere ser complementada con información cualitativa que permita ubicar, entre otros aspectos, la calidad de la resolución de las garantías activadas. Los estudios de casos y de sentencias contribuyen a ello.

Cabe tener presente que en 2010 se alertó sobre el “abuso ilegítimo” en la activación de la acción de protección y medidas cautelares relacionadas con la obra y contratación pública, señalando que se abrirían juicios de daños y perjuicios contra los jueces que, por su resolución favorable a las garantías interpuestas, ocasionen la suspensión o retraso de la obra pública.⁴ En 2012 hubo una comunicación sobre las sanciones reiteradas a jueces que resolvieron favorablemente en dichos casos, para que tomen los correctivos y eviten la sanción.⁵ Estos hechos contrarían la independencia judicial y envían un mensaje contrario a la importancia del fortalecimiento de la activación de garantías como mecanismo vital para el cumplimiento de derechos.

Es deseable que para los próximos informes, el Consejo de la Judicatura cuente con información estadística nacional y con la suficiente desagregación, especialmente cuando se encuentra en implementación la plataforma Justicia 2.0 para establecer un sistema integrado de información sobre la administración de justicia. También con estudios cualitativos que permitan tener una lectura completa de

la activación de garantías y su calidad de resolución en el marco de la exigibilidad de derechos.

Reforma a la administración de justicia

Los jueces y juezas, como los demás componentes que integran el servicio público de la justicia tienen la obligación constitucional de proteger los derechos de los ciudadanos/as frente a cualquier atropello (Veeduría Internacional a la Reforma de la Justicia en Ecuador).

En los informes anteriores se expusieron varios elementos sobre la importancia y límites que presenta el acceso a la justicia en Ecuador como un derecho crucial que repercute en el cumplimiento y ejercicio del conjunto de derechos.

Distintas instancias del sistema de protección internacional de derechos humanos han establecido varias recomendaciones al Estado ecuatoriano en torno al acceso a la justicia, entre ellas, sobre: justicia indígena; protección a víctimas y testigos (especialmente para niños y niñas); protección de defensores de derechos humanos; seguimiento a los casos presentados por la Comisión de la Verdad; abusos en la aplicación de justicia por mano propia; procedimientos migratorios y garantías procesales a personas en condición de movilidad, especialmente en situación de refugio; justicia juvenil; justicia penal respecto de prostitución y trata infantil, delito de reclutamiento de niños; asistencia jurídica gratuita para pueblos afrodescendientes y de personas en situación de pobreza, violencia contra las mujeres, entre otros.⁶

Luego de la Consulta Popular efectuada el 7 de mayo de 2011, que contó con el 52% de aprobación ciudadana a la reforma de la justicia,⁷ se dio paso a la conformación del Consejo de la Judicatura de Transición, el cual definió un Programa de Reestructuración de la Función Judicial a partir de seis ejes estratégicos: talento humano, modelo de gestión, infraestructura civil y tecnológica, cooperación interinstitucional y gestión financiera equitativa.

Con el fin de garantizar la transparencia del proceso, el 7 de noviembre de 2011, se conformó una “Veeduría Internacional a la Reforma a la Justicia en Ecuador”, integrada por un grupo de expertos encabezados por Baltasar Garzón. Dicha veeduría durante 2012, emitió tres informes provisionales y uno final.

En general, el desarrollo del programa de reestructuración en 2012 presentó importantes cambios materiales (equipos, tecnología, edificios, etc.), acompañado de evaluaciones a los funcionarios de la justicia, adopción de medidas de control disciplinario y de procesos de selección de nuevos operarios, pero no dejó de presentar deficiencias relacionadas con los procedimientos y parámetros utilizados, especialmente en los procesos de designación de jueces y el respeto a la independencia judicial.

Desafíos importantes quedan pendientes, entre ellos el tratamiento de la articulación entre la justicia indígena con la justicia ordinaria, la ausencia de programas sostenidos de educación en materia constitucional, derechos humanos, no discriminación y sobre las recomendaciones establecidas por distintas instancias del sistema de protección internacional de los derechos humanos, pues las capacitaciones realizadas son puntuales; faltan mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación de la calidad de la administración de justicia tendientes a superar la lentitud en la resolución de algunos casos (como se muestra para el tema de garantías jurisdiccionales), el formalismo y la falta de motivación argumentada con apego a los estándares internacionales; y el tema de la independencia judicial que aún guarda la lógica de varias décadas de politización de la justicia y judicialización de la política.

De otra parte, si bien hay avances en la modificación de la desconfianza de la población en la administración de la justicia, falta mucho por trabajar para motivar la exigibilidad de derechos.

En su informe final, la veeduría internacional formuló recomendaciones importantes para el fortalecimiento de la justicia en materia de derechos humanos, entre las que se destacan: la creación de una dirección de derechos humanos en el Consejo de la Judicatura, encargada de impulsar políticas judiciales con enfoque de derechos y con la obligación de presentar informes anuales de avances; impulso a procesos de formación en derechos humanos para jueces; implementación de programas universitarios sobre derecho indígena; priorización de la investigación de las causas de desapariciones forzadas, garantizando el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación; impulso de campañas de sensibilización sobre el rol y responsabilidad del operador de justicia en la lucha contra la impunidad y fortalecer políticas de respeto de los derechos humanos al interior del sector público.⁸

En este contexto, los esfuerzos que ha venido desarrollando el Consejo de la Judicatura para concretar el proceso de reforma judicial deben fortalecerse atendiendo las recomendaciones de la veeduría internacional, especialmente en materia de derechos humanos, procesos de evaluación, promoción de instancias de participación y control, y garantías a la independencia de la Función Judicial.

Defensa pública

La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos [...] prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en todas las materias e instancias (CRE, art. 191).

La Defensoría Pública, en respuesta a la petición de información formulada por el PADH, indicó que en el período noviembre/2011 y octubre/2012 abrió

36.542 expedientes penales nuevos para la defensa de personas en estado de indefensión o que por su condición no pueden contratar servicios de defensa legal, que interpuso 10 garantías de hábeas corpus y que las defensas efectuadas en total sumaron 54.067 audiencias en juzgados y tribunales penales. También brindó asesoría y asistencia a personas que por su condición no pueden contar con servicios en 17.119 casos en materia de demanda de alimentos y 12.243 en lo laboral. Estas cifras evidencian una alta cantidad de personas que no pueden acceder, desde sus propios recursos, a servicios legales. Al mismo tiempo revelan dos problemáticas relevantes en materia de derechos: el tema de alimentos respecto de los derechos de niños, niñas y adolescentes y los conflictos en el campo laboral. Aspectos importantes que deberán considerarse en el momento de establecer las políticas públicas.

Protección a víctimas de delitos

Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado (CRE, art. 78).

La Fiscalía General del Estado dirigirá el sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, para lo cual coordinará la obligatoria participación de las entidades públicas afines a los intereses y objetivos del sistema y articulará la participación de organizaciones de la sociedad civil (CRE, art. 198).

El Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (SPAVT) y otros participantes en el proceso penal es parte de la Fiscalía General del Estado (FGE); según información referida por dicha instancia,⁹ durante 2012 atendió a 2.541 casos e incluyó en el programa de atención a 4.022 personas. Las provincias con más casos y personas atendidos por el SPAVIT son Manabí (625 casos y 735 personas), Azuay (567 casos y 715 personas), Esmeraldas (205 casos y 603 personas), Guayas (171 casos y 419 personas) y Los Ríos (104 casos y 157 personas); estas cinco provincias abarcan el 65,8% de los casos y el 65,4% de las personas protegidas.

Se encuentra en proceso de elaboración el modelo de gestión del SPAVT y del software para registro, seguimiento y evaluación del Sistema. Se espera que, en estas iniciativas, se especifique y diferencie el tratamiento que requieren las víctimas de violaciones de derechos humanos de las víctimas de delitos penales en general, incorporando el enfoque de diversidades y considerando los tipos de violaciones a sus derechos, como ya lo ha iniciado realizando estudios respecto de las víctimas de violencia sexual y el delito de trata de personas.

Se considera indispensable que la institucionalidad se encamine a fortalecer el funcionamiento autónomo que requiere la protección a víctimas y que se superen los límites presupuestarios existentes, tomando en cuenta que “Ecuador señaló que los aumentos de presupuestos no son suficientes para atender la actual demanda de protección de víctimas y testigos [...] [que] depende de la asignación establecida para la Fiscalía General [...] que se debe acudir a otras instancias administrativas para la ejecución de los recursos [...] [que subrayó] como el principal obstáculo el déficit presupuestario asignado al sistema de protección”.¹⁰

Casos del Informe de la Comisión de la Verdad

Se reconoce y garantizará a las personas [...] El derecho a la integridad personal que incluye la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes (CRE, art. 66 num. 3, lit. c).

Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles. Ninguno de estos casos será susceptible de amnistía. El hecho de que una de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecuta (CRE, art. 80).

El 3 de mayo de 2007 se creó la Comisión de la Verdad (CV), con el fin de documentar las presuntas violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en Ecuador entre 1984 y 2008. Esta comisión, en junio de 2010, entregó a la FGE 118 casos documentados para que inicie los procesos de investigación y promueva su judicialización. Posteriormente se entregaron 18 casos más, alcanzando de esta forma un total de 136 casos.

La FGE conformó en 2010 una Unidad Especializada compuesta por siete fiscales con su respectivo personal de apoyo. Sin embargo, esta unidad, como se mencionó en el Informe 2011, presentó varios problemas para adelantar un proceso de investigación diligente, eficaz y que garantice los derechos de víctimas y familiares.

En 2012 esta unidad fue reemplazada por la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos,¹¹ a la cual se le asignó la misión de “coordinar, apoyar e investigar los casos de violaciones a los derechos humanos” (art. 12.2.1.5), con competencias sobre casos de asesinatos y secuestros, desapariciones forzadas, torturas y otras lesiones graves a los derechos humanos, violaciones a los derechos colectivos de las comunidades indígenas y otros crímenes y graves violaciones contra los derechos de las personas (art. 12.2.1.5.2).

Como se puede apreciar, esta nueva estructura, si bien elevó la jerarquía de la instancia a cargo de los casos de la CV, le restó especificidad, pues en ella se incluyó una categoría mucho más amplia de delitos que investigar. Ello a su vez no vino acompañado de un incremento de personal, sino que, por el contrario, se registró

una disminución de estos, pues de siete fiscales con los que contaba la Unidad, se pasó a tener cinco. Y se dio paso a una nueva reorganización interna de (la tercera en lo que va del proceso).

En julio de ese mismo año la FGE emitió un Instructivo para casos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos,¹² que contempla que la Dirección pueda contar con un equipo de asesores (art. 3), lo que se concretó con la incorporación de dos asesores.

Bajo este marco, la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos informó al PADH que, en 2012, realizaron 141 indagaciones previas (no indica en cuántos casos), dos desestimaciones y una indagación no fue abierta. No reportó ninguna instrucción fiscal.

El único caso del Informe de la Comisión de la Verdad que durante 2012 fue ventilado judicialmente fue el de la muerte del joven de 16 años Damián Peña, ocurrida en 2002.¹³ En octubre de 2012, la Segunda Sala de Corte Provincial del Azuay conoció y negó el pedido de nulidad planteado por uno de los sindicatos en este caso. Cabe tener en cuenta que este proceso viene siendo impulsado por la acusación particular de la familia y la Fiscalía del Azuay.

De esta forma, tras haber transcurrido dos años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad a la FGE, esta apenas cuenta con un caso judicializado, lo que determina limitaciones en el deber del Estado de investigar y sancionar y en particular a la obligación de la Fiscalía de garantizar la diligencia debida.

Cuadro 5
Estado de trámite casos Comisión de la Verdad, 2012

	Fiscalía No. 1	Fiscalía No. 2	Fiscalía No. 3	Fiscalía No. 4	Fiscalía No. 5	Total
Indagaciones previas	30	32	26	27	26	141
Desestimaciones	0	0	1	1	0	2
Indagaciones no abiertas	1	0	0	0	0	1
					Total	144

Fuente: Respuestas de 12 provincias a petición de información.
Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Por su parte, se mantiene pendiente la garantía de una defensa adecuada y eficaz a las víctimas y familiares. En general, muchas de ellas se han sentido re-victimizadas durante el proceso de indagación y no cuentan con un patrocinio legal adecuado, pues se registra un déficit de formación sobre este nuevo ámbito de la justicia penal para investigar y juzgar delitos que, a su vez, son graves violaciones de derechos humanos.

Durante este año, la “Veeduría Internacional a la Reforma de la Justicia en el Ecuador” analizó¹⁴ la situación de los casos de la CV, bajo el acápite de “víctimas

de la impunidad”, y formuló 14 recomendaciones específicas encaminadas a fortalecer la judicialización de los casos, entre las que se destacan: la formación de los operadores jurídicos sobre el juzgamiento de delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, y su rol en la lucha contra la impunidad; la implementación de un sistema informático de seguimiento de las causas, la creación de una unidad especializada en la Defensoría Pública para el patrocinio de casos; la dotación de espacios adecuados para mejorar las condiciones de asesoría y atención a las víctimas, así como garantizar su seguridad; y las garantías de protección y seguridad para fiscales y jueces a cargo de este tipo de casos.

Sobre la base de estas recomendaciones es imperativo que la administración de justicia emprenda un proceso eficaz y sostenido de políticas para la investigación, sanción y reparación de las graves violaciones a los derechos humanos reportadas en el Informe de la Comisión de la Verdad, y en particular se exhorta a la FGE para que en el marco de sus competencias cumpla con la diligencia debida para la judicialización de estos casos.

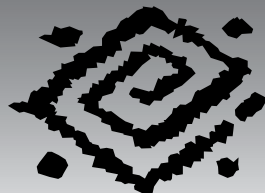
De lo expuesto en los puntos tratados en materia de justicia y derechos humanos, a pesar de los adelantos, se evidencian limitaciones en el control constitucional; en la autonomía de la función judicial y la cualificación de la formación de los operadores de justicia en derechos humanos, diversidades y constitucionalidad; en la eficacia de las garantías constitucionales para la protección de derechos por su baja activación y su lenta resolución; en las debilidades del sistema de protección a víctimas y testigos; y, sobre los casos presentados por la Comisión de la Verdad, es preocupante que, luego de dos años de la entrega de los casos a la FGE, se mantengan en etapa de indagación, lo que limita el derecho a la verdad, la justicia y la reparación efectivas. Por tanto, es urgente la adopción de un plan integral que aborde los diferentes ámbitos de la justicia e incorpore de manera sistemática las recomendaciones emitidas por la “Veeduría Internacional a la Reforma a la Justicia en Ecuador”, como las de las diferentes instancias internacionales de protección de derechos humanos.

Notas

1. Corte Constitucional para el período de Transición, Caso No. 0027-09-AN, Sentencia No. 000S-09-SAN-CC, de 9 de diciembre de 2009, p. 9.
2. Corte Constitucional de Colombia (CCC), “Corte Constitucional. Relatoría. Sentencias”, en <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/estadisticas1992-2013.png>.
3. Función Judicial de Pichincha, “Base de datos. Ingresos y resoluciones de garantías constitucionales 2011-2012”, procesada por PADH, 2013. La base fue enviada en respuesta a petición de información para el estudio “Garantías jurisdiccionales y migraciones internacionales en Quito”, mencionado en la metodología. La base contiene información sobre ingresos y resoluciones de garantías jurisdiccionales; para 2012 los datos disponibles son del período enero-octubre.

4. Presidencia de la República del Ecuador, Oficio circular No. T1.CI-SNJ-18-1689, de 18 de noviembre de 2010, suscrito por Alexis Mera, Secretario Nacional Jurídico.
5. Consejo de la Judicatura, Memorando circular No. 3524-UCD-2012, de 9 de julio de 2012, suscrito por Diego Zambrano Álvarez, Coordinador de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura.
6. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), *Ecuador y el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la ONU. Sistematización de Recomendaciones 2004-2011*, Quito, OACDH / Defensoría del Pueblo del Ecuador 2011.
7. Pregunta 4. Consulta Popular de 4 mayo de 2011: “Con la finalidad de superar la crisis de la Función Judicial ¿está usted de acuerdo en sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una Comisión Técnica compuesta por tres delegados designados uno por el Presidente de la República uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social para que durante un periodo de 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial enmendando la Constitución como lo establece el Anexo 4?”.
8. Baltasar Garzón *et al.*, “Informe final de la veeduría internacional a la Reforma de la Justicia en Ecuador”, Quito, diciembre 2012, p. 98-100.
9. Fiscalía General del Estado, Oficio No. 10368, de 28 de noviembre de 2012, suscrito por Alejandro Fuentes, Asesor y Memorando No. 307-FGE-DPVT de 12 de noviembre de 2012, suscrito por Patricia Ruiz Rivera, Coordinadora Nacional del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal.
10. Ana Selene Pineda Neisa, “Informe final sobre el estado de cumplimiento de las Guías de Santiago”, ILANUD / Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos, 2012, p. 84-87, en <<http://www.aiamp.org/index.php/documentos32?task=document.viewdoc&id=137>>.
11. FGE, “Estatuto Orgánico por Procesos de la Fiscalía General del Estado”, Resolución No. 003-A-FGE- 2012, ROS 268, de 23 de marzo de 2012.
12. FGE, “Instructivo para el tratamiento de casos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos dentro de la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos”, Resolución 40, publicada en el RO 753, de 20 de julio de 2012.
13. Ocurre en Cuenca, el 11 de enero de 2002, en el marco de manifestaciones estudiantiles, cuando el estudiante fue alcanzado por una bala de dotación policial.
14. Baltasar Garzón *et al.*, “Informe Final...”, *op. cit.*, p. 28-30.

Política pública y derechos humanos



Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad (CRE, art. 85, num.1).

Al tomar como referencia el mandato constitucional que establece la formulación de políticas públicas como una garantía de los derechos, se exponen los siguientes puntos: a) el estado de la incorporación del enfoque de derechos humanos en el PNBV; b) los indicadores del cumplimiento de las metas del PNBV en 2012; y c) los derechos del buen vivir vistos desde la igualdad y equidad.

El enfoque de derechos humanos en el PNBV

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente (CRE, art. 275).

La SENPLADES, instancia rectora de la planificación, elaboró el PNBV para el período 2009-2013; en su Informe de Rendición de cuentas 2012 expone los siguientes avances en materia de derechos humanos:

- Establecimiento como eje de trabajo la *equidad*, que impulse la igualdad, conocimiento y el ejercicio pleno de los derechos.
- Elaboración del Atlas para las desigualdades socioeconómicas (educación, salud, nutrición, empleo digno, vivienda, seguridad), con enfoques de

interculturalidad, género, generacional y de discapacidades. Herramienta para la elaboración y ejecución de políticas públicas con enfoque de derechos humanos.

- Revisión conceptual de las diferentes categorías de bienes y servicios, identificando bienes superiores que garantizan los derechos constitucionales y con metodología para determinar el rol del Estado en la provisión de dichos servicios.
- Establecimiento de la Estrategia Nacional para el Buen Vivir Rural, que combina la productividad, las capacidades humanas, la innovación tecnológica, el enfoque de derechos, la diversidad cultural, la cohesión social, la corresponsabilidad, los derechos de la naturaleza y la conciencia de género. Cuenta con el Comité de Coordinación Intersectorial para el Buen Vivir y de los Diálogos de Igualdad.
- Establecimiento de la Estrategia Nacional por la Igualdad, para enfrentar las desigualdades por razón de: condición económica, género, discapacidad, movilidad humana, edad e interculturalidad. Cuenta con la creación de Agendas para la igualdad en discapacidades, género, niñez y adolescencia, juventud y adultos mayores; tipología de inequidades; catálogo de discapacidades e interculturalidad.
- Alineación estratégica de las empresas públicas en el cumplimiento de derechos, mediante ubicación de principios de Gobierno Corporativo (GC) y el establecimiento de políticas remunerativas.

Como se puede apreciar, los avances expuestos se orientan a la incorporación de los enfoques de derechos y de diversidades en la planificación en el nivel de la re-conceptualización de algunos aspectos, el establecimiento de estrategias y creación de ciertas herramientas y guías, institucionalidad y agendas. Por tanto se encuentra pendiente la implementación de las acciones en el marco de estos enfoques.

Indicadores meta del PNBV

De la revisión de los indicadores meta del PNBV, se encuentra que de los 42 que cuentan con información de 2012, 30 presentan señales de avance y 10 de retroceso (ver anexo 6). Con la información disponible, se puede establecer la siguiente relación entre avances y retrocesos por derechos relacionados:

Si bien la información no es completa, cabe destacar que los avances macro respecto a la vivienda muestran políticas que integran algunas dimensiones estructurales, quedando pendiente conocer aquellas relativas al hábitat.

No obstante, los indicadores macro plantean la necesidad de tener en cuenta niveles de desagregación, pues solo así se puede contar con elementos más afinados y una visión más completa de la situación que refiere. En este sentido, a

Cuadro 6
Indicadores nacionales que señalan avances y retrocesos
en el cumplimiento de metas PNBV 2012

Derecho	Avance	Retroceso
Trabajo	Menos subempleo. Menos personas con ingresos menores al Salario Mínimo Vital (SMV). Más jóvenes en cargos de elección popular (entre 2007-2009). Más indígenas y afrodescendientes trabajan en el sector público. Disminuyeron los índices de pobreza en zonas de frontera norte, centro y sur.	Más desempleo juvenil. Aumentó la desigualdad entre hombres y mujeres en el trabajo reproductivo: horas dedicadas al cuidado de hijos/as, al trabajo doméstico y al voluntariado. Menos mujeres en cargos de elección popular (entre 2007-2009).
Vivienda	Más personas cuentan con vivienda propia, con acceso a electricidad, a teléfono fijo, a internet y a servicios de saneamiento y agua por red pública. Menos personas viven en hacinamiento y en viviendas con condiciones inadecuadas.	
Educación	Menos personas con analfabetismo funcional. Menos niños y niñas que trabajan y no estudian. Más adolescentes en el bachillerato. Más investigadores en desarrollo e innovación. Más personas autodefinidas como indígenas que hablan alguna lengua nativa.	Menos niñas y niños en la educación básica. Menos estudiantes en la educación superior.
Salud	Más personas cuentan con acceso a seguro público de salud.	
Deporte	Más participantes en olimpiadas.	
Naturaleza-Ambiente	Más capacidad del Sistema Nacional Interconectado.	Menos porcentaje de energías alternativas.

Fuente: SNI, Indicadores meta PNBV, marzo de 2013.

Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

continuación se analiza una muestra que ejemplifica la situación al considerar niveles de desagregación étnica y regional.

Derechos del buen vivir, igualdad y equidad

El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus observaciones finales emitidas en 2012 (julio, agosto y noviembre, respectivamente), sobre los informes presentados por el Estado ecuatoriano en 2012, reconocen los avances presentados en los respectivos reportes.

A la par, establecen una serie de recomendaciones, entre ellas, varias relativas a los derechos al trabajo, salud y vivienda, para que continúen los adelantos y para que se adopten medidas legislativas y políticas públicas tendientes a modificar la situación de afectación de determinados grupos como son los pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios, de zonas rurales y marginadas. Así también, para transformar la desigualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, en la brecha salarial, menor acceso al trabajo, entre otros. También señalan la importancia de contar con información desagregada y formas de seguimiento que permitan ubicar la situación en detalle y valorar los cambios.

Con estas referencias se priorizan cinco indicadores relevantes para obtener una visión panorámica de los derechos del buen vivir, especialmente de los derechos a la vivienda, la salud y el trabajo; estos son: el porcentaje de hogares con acceso exclusivo al agua por red pública, el porcentaje de hogares que viven en hacinamiento, el porcentaje de personas con seguro de salud público, la tasa de subempleo bruto nacional y el porcentaje de personas que reciben un salario menor al mínimo vital (SMV).

Según la información proporcionada por el SNI, se observa que los porcentajes de los indicadores seleccionados, a nivel nacional presentan avances importantes en la mejora de las condiciones de vida de la población en Ecuador; así, en 2012, en comparación con 2011, hubo un incremento del número de hogares que acceden al agua mediante red pública (1,86 puntos) y de las personas que acceden a un seguro de salud pública (2,75 puntos); por su parte hay una disminución en 2,04 puntos de los hogares que viven en hacinamiento; el número de personas que se encuentran en subempleo bajó en 3,29 puntos; y también se redujo en 4 puntos el número de personas que perciben ingresos menores al salario mínimo vital.

No obstante los avances, preocupa que los porcentajes de subempleo y salarios menores al SMV sean altos; en el primer caso, afecta a más de la mitad de las personas que trabajan y, en el segundo, a un 40%; así también que el acceso a un seguro de salud público llegue solo a una tercera parte de la población:

Cuadro 7
Indicadores seleccionados 2011-2012 (en porcentajes)

Indicador	2011	2012	Diferencia
Acceso agua red pública	72,67	74,53	1,86
Hogares con hacinamiento	11,24	9,20	2,04
Seguro de salud público	32,37	35,12	2,75
Subempleo	54,66	51,37	3,29
Salario menor al SMV	42,40	38,39	4,01

Fuente: SNI, Indicadores meta PNBV, marzo de 2013.

Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Los datos desagregados por provincias revelan que los avances son diferenciales puesto que: hay provincias con porcentajes que indican mejores condiciones en los indicadores, mientras otras registran deficiencias; unas han mejorado respecto de 2011 y otras han retrocedido; las diferencias en unos casos son menores y en otros son mayores. En los párrafos siguientes se expone la principal brecha existente a 2012, esto es, la diferencia entre la provincia con mejores condiciones y aquella que se encuentra en el otro extremo. Además, se establece una relación con 2011 y, como se podrá apreciar, en unos indicadores se presenta un aumento de la brecha respecto de 2011.

Así, en el acceso al agua potable por red pública, la provincia de Pichincha tiene los mejores porcentajes de cobertura, aunque registra una ligera disminución en 2012, mientras que las seis provincias amazónicas son las de menor cobertura y la brecha entre ambas es de 43,61 puntos. Respecto a la tasa nacional, 15 provincias tienen tasas menores de cobertura y ocho cuentan con cobertura más alta que el promedio nacional (Azuay, Carchi, El Oro, Guayas, Imbabura, Pichincha, Santa Elena y Tungurahua). Cabe señalar que el porcentaje de menor cobertura subió en siete puntos, lo que implica una reducción de la brecha respecto de 2011:

Cuadro 8
Brecha entre provincia con mayor y menor acceso a agua por red pública 2011-2012 (en porcentajes)

Provincia	2011	2012	Diferencia 2011-2012
Mayor acceso	Pichincha: 93,80	Pichincha: 93,47	0,33 retroceso
Menor acceso	Bolívar: 42,47	Provincias amazónicas: 49,86	7,39 avance
Brecha entre provincias	51,33	43,61	7,72 avance

Fuente: SNI, Indicadores meta PNBV, marzo de 2013.

Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Respecto del porcentaje de hogares con hacinamiento, también la provincia de Pichincha es la de mejor cobertura, pues tiene menor porcentaje de hacinamiento que disminuyó en 2012. Ocho provincias, siete de la Sierra y una de la Costa (Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Pichincha y Tungurahua), cuentan con tasas menores de hacinamiento respecto del porcentaje nacional y las restantes tienen tasas de mayor hacinamiento. En similar situación que en el indicador anterior, el porcentaje de la provincia de mayor hacinamiento (Santa Elena) presenta una disminución de la brecha en seis puntos en comparación con 2011:

Cuadro 9
Brecha entre provincia con menor y mayor número
de hogares con hacinamiento 2011-2012 (en porcentajes)

Provincia	2011	2012	Diferencia 2011-2012
Porcentaje menor	Pichincha: 4,53	Pichincha: 4,13	0,40 avance
Porcentaje mayor	Provincias amazónicas: 25,37	Santa Elena: 18,98	6,39 avance
Brecha entre provincias	20,84	14,85	5,99 avance

Fuente: SNI, Indicadores meta PNBV, marzo 2013.
Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Continuando con el acceso al seguro de salud público, es evidente la mejora del indicador en seis puntos, a la par que hay aumento en 3,6 puntos de la brecha entre las dos provincias comparadas respecto de 2011; esto responde al crecimiento desigual del acceso, puesto que en Pichincha hubo un incremento de seis puntos (la mitad de su población cuenta con seguro) y en Santa Elena el aumento fue de 2,4 puntos (no llega a la cuarta parte de sus habitantes):

Cuadro 10
Brecha entre provincia con mayor y menor acceso
a seguro de salud público 2011-2012 (en porcentajes)

Provincia	2011	2012	Diferencia 2011-2012
Mayor acceso	Pichincha: 43,69	Pichincha: 49,70	6,01 avance
Menor acceso	Los Ríos: 21,43	Santa Elena: 23,83	2,40 avance
Brecha entre provincias	22,26	25,87	3,61 retroceso

Fuente: SNI, Indicadores meta PNBV, marzo de 2013.
Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Las provincias de Azuay, Imbabura, Loja, Manabí y Pichincha tienen mayor acceso a seguro de salud público respecto al porcentaje nacional, quedan las 18 provincias restantes por debajo de ese porcentaje.

Nuevamente Pichincha presenta ventaja respecto del país: en 2012 el porcentaje de subempleo bajó en más de ocho puntos y afectó a una tercera parte de su población económicamente activa, mientras que en la provincia de Bolívar se incrementó en más de tres puntos y afectó a la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras (83,92%). En este indicador además se registra un significativo aumento de la brecha en 12 puntos; y de los indicadores revisados es la brecha más profunda:

Cuadro 11
Brecha entre provincia con menor y mayor porcentaje
de subempleo 2011-2012 (en porcentajes)

Provincia	2011	2012	Diferencia 2011-2012
Porcentaje menor	Pichincha: 41,31	Pichincha: 32,60	8,71 avance
Porcentaje mayor	Bolívar: 80,57	Bolívar: 83,92	3,35 retroceso
Brecha entre provincias.	39,26	51,32	12,06 retroceso

Fuente: SNI, Indicadores meta PNBV, marzo 2013.
Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Solo en las provincias de El Oro, Guayas, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas se registran porcentajes menores de subempleo que la tasa nacional; las 19 provincias presentan porcentajes más altos.

En cuanto al porcentaje de personas cuyos ingresos son menores al SMV, Pichincha tiene el porcentaje más bajo y la reducción más alta, mientras que Bolívar es la provincia donde más personas perciben un salario menor al SMV; la brecha anual se incrementó en cerca de tres puntos:

Cuadro 12
Brecha entre provincias en ingresos menores al SMV, 2011-2012 (en porcentajes)

Provincia	2011	2012	Diferencia 2011-2012
Mejor situación	Pichincha: 29,67	Pichincha: 24,98	4,69 avance
Porcentaje mayor	Bolívar: 80,57	Bolívar: 61,08	1,90 avance
Brecha entre provincias	39,26	36,10	2,79 retroceso

Fuente: SNI, Indicadores meta PNBV, marzo de 2013.
Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

En El Oro, Guayas, Pichincha y las seis amazónicas las tasas son menores que el porcentaje nacional, mientras que en 14 provincias las cifras indican un mayor porcentaje de personas que perciben salarios menores al SMV.

De esta breve revisión, en 2012, en los cinco indicadores la provincia de Pichincha presenta los mejores indicadores, mientras que las seis provincias amazónicas, Bolívar y Santa Elena se encuentran en el extremo que indica condiciones deficitarias:

Cuadro 13
Brecha entre provincias, 2012

Indicador	Brecha a 2012	Diferencia en relación a 2011
Subempleo	51,32	aumentó en 12 puntos
Acceso agua red pública	43,61	disminuyó en 7,7 puntos
Salario menor al SMV	36,10	aumentó en 2,8 puntos
Seguro de salud público	25,87	aumentó en 3,6 puntos
Hogares con hacinamiento	14,85	disminuyó en 6 puntos

Fuente: SNI, Indicadores meta PNBV, marzo de 2013.

Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

El cuadro también muestra que en cuatro de los cinco indicadores la magnitud de las brechas es alta, entre 26 y 51 puntos de diferencia, y que en tres se profundizó la brecha en relación a 2011, el subempleo es el indicador que más desigualdad provincial evidencia y la situación de hacinamiento la mejor tendencia de mejora (menor brecha y disminuye significativamente).

Otra dimensión importante es la desagregación de la información de los indicadores seleccionados según etnia; en la misma lógica de lo expuesto anteriormente, se toma en cuenta en cada indicador el porcentaje mejor y el que se encuentra en el otro extremo. Una primera constatación es que la magnitud de las brechas son mayores: en cuatro indicadores van entre 30 y 60 puntos; en forma similar a la situación entre provincias, la tendencia en el número de hogares con hacinamiento presenta la mejor tendencia (ver cuadro 14 en página 65).

En 2012 la población blanca se encontró en mejor situación en todos los indicadores, seguida de la población mestiza. Los pueblos montubios tuvieron menor acceso al agua de red pública, mayor porcentaje de hogares con hacinamiento y mayor población trabajadora con ingresos menores al SMV. Los pueblos indígenas registran el mayor porcentaje de subempleo y el menor acceso a un seguro de salud público. Los pueblos afrodescendientes se encuentran en una situación intermedia, en todos los indicadores se encuentran en tercer lugar y la distancia respecto del grupo en el extremo desfavorable es significativa, por ejemplo: en hogares con hacinamiento es de siete puntos en relación de los pueblos montubios, pero significa casi la mitad de la brecha que registra este pueblo, o en el subempleo donde la

Cuadro 14
Brecha entre etnias en 2012 (en porcentajes)

Indicador	Etnia en mejor condición	Etnia en situación deficitaria	Brecha 2012	Brecha 2012
Acceso agua red pública	Blanca: 84,39	Montubia: 24,54	59,85	aumentó en 21,7 puntos
Salario menor al SMV	Blanca: 24,00	Montubia: 77,00	53,00	aumentó en 13 puntos
Subempleo	Blanca: 48,28	Indígena: 82,00	33,72	disminuyó en 3 puntos
Seguro de salud público	Blanca: 45,93	Indígena: 16,38	29,55	aumentó en 7 puntos
Hogares con hacinamiento	Blanca: 4,60	Montubia: 19,43	14,83	disminuyó en 1,6 puntos

Fuente: SNI, Indicadores meta PNBV, marzo de 2013.

Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

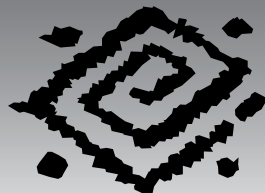
distancia con pueblos indígenas es de 28 puntos, esto es cerca de cinco veces menos. Cabe señalar que la brecha en el subempleo disminuyó respecto de 2011 y es el único caso en el que el porcentaje de la población blanca aumentó en tres puntos en relación a 2011, a la vez que es el porcentaje menor respecto de los demás grupos poblacionales (ver anexo 7, cuadros 1-5).

Las cifras expuestas manifiestan que: el crecimiento registrado a nivel nacional mantiene las serias desigualdades existentes entre regiones y etnias; en cuatro de los cinco indicadores las brechas van entre 26 y 60 puntos, es decir son altas y en algunos casos profundas (acceso al agua, subempleo y salario menor al SMV); las brechas étnicas son más acentuadas que las regionales; en relación a 2011, en cuatro indicadores las brechas se aumentaron implicando un retroceso; y el indicador sobre hogares que viven en hacinamiento presenta la mejor tendencia con porcentajes y brechas menores (regionales y étnicas).

En términos generales, los avances y límites en la incorporación del enfoque de derechos humanos en el PNBV y el estado de la situación que permiten ubicar los indicadores analizados, permiten ubicar los desafíos que el Estado ecuatoriano debe afrontar para garantizar el cumplimiento adecuado de los derechos, especialmente en salud, trabajo y vivienda. Lo cual requiere –como lo han señalado varias instancias internacionales de protección de los derechos humanos– la implementación urgente y en forma sostenida de todas las medidas necesarias que permitan el cumplimiento de los derechos, enfatizando en superar situaciones de discriminación.

Por ello, las políticas y planes deben orientarse a detener los retrocesos señalados y revertir las inequidades regionales y étnicas que en 2012 se reprodujeron; más aún, tomando en cuenta que el país se encuentra en una época de bonanza económica y que cuenta con recursos suficientes para dar señales sostenidas de progreso en el cumplimiento de los derechos y en apego al principio de progresividad y no regresividad. Es por tanto urgente que las políticas públicas incorporen acciones afirmativas para incidir de forma sostenida en la eliminación de las brechas de desigualdad étnica y regional.

Seguridad integral



El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno (CRE, art. 393).

En informes anteriores se refirió al alcance constitucional de la seguridad, que comprende 14 ámbitos con más de 100 artículos, pues es un derecho íntimamente relacionado con todos los demás. Buena parte de los puntos tratados en este informe tienen una arista mayor o menor en relación con la seguridad de las personas en términos individuales y colectivos, así como de la naturaleza. En este acápite se priorizan los siguientes temas: a) el establecimiento de los estados de excepción en el país; b) los delitos contra la seguridad del Estado; c) el caso Los 10 de Luluncoto; y d) los delitos contra las personas.

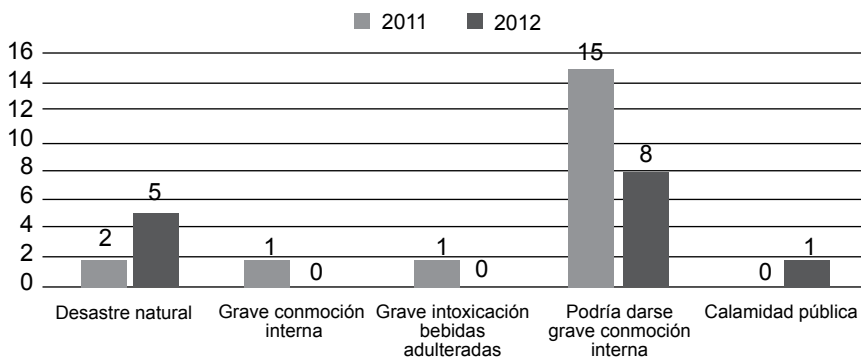
Seguridad jurídica y estados de excepción

La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural [...] El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad (CRE, art. 164).

De acuerdo a la base de Estados de Excepción del PADH, construida con los datos del Centro de Gestión Gubernamental, Sistema de Información de Decretos

Presidenciales,¹ durante 2012 se emitieron en total 14 decretos ejecutivos sobre estado de excepción. En cuanto a las situaciones que los motivaron: ocho fueron por las secuelas no superadas de la insubordinación policial del 30 de septiembre (cuatro de declaratoria y cuatro de renovación); cinco por los impactos de la intensa estación invernal (uno de declaratoria, dos de ampliación y uno de renovación); y uno por graves deficiencias en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Gráfico 14
Estados de excepción por causal



Fuente: CEGE, Decretos Ejecutivos 2011-2012; PADH, Base. Estados de excepción.
Elaborado por: Gina Benavides Llerena, PADH, 2013.

En un balance general del año, se destaca como avances la disminución del número de estados de excepción (cinco menos que en 2011); una mejor adecuación de las situaciones a la causal constitucional que se invoca (se utilizó la causal de desastre natural para inundaciones y se recurrió por primera vez a la de calamidad pública para el caso de los problemas generados por la falta de prestación de un servicio público); la ubicación de los derechos que están en riesgo y que se busca proteger (todos los decretos establecen los derechos constitucionales afectados); y, en general, un cumplimiento de los requisitos formales de procedencia (expedidos vía decreto, con determinación de lugar, tiempo de duración y notificación a la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional).

Sin embargo, persiste el estancamiento en su fundamentación material, que se expresa en las siguientes prácticas:

- Uso de declaratorias y renovaciones sucesivas para conseguir su prolongación en el tiempo. Esta práctica fue evidente en el estado de excepción de la Asamblea Nacional, con la expedición de ocho decretos, que permitió la mantención de la medida por un total de 360 días, pese a que la Constitución establece un plazo máximo de 60 días, pudiendo renovarse por 30 días más (art. 166, inc. 2).
- La tendencia a utilizarlo como un mecanismo para solucionar problemas de gestión administrativa que podrían canalizarse por la vía ordinaria; esto fue

evidente en el caso del estado de excepción decretado por la prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado.

- c) Ausencia de mecanismos efectivos de control constitucional, político e internacional. La Corte Constitucional solo emitió dictámenes de constitucionalidad en 4 de los 14 decretos sobre estados de excepción. La Asamblea no ejerció acción de control político de los mismos. Y ningún organismo internacional de derechos humanos los conoció, por la falta de la notificación correspondiente.
- d) No señalamiento de suspensión de derechos constitucionales, con lo cual se busca limitar los procesos de supervisión nacional e internacional.
- e) Déficit en mecanismos de rendición de cuentas que permitan valorar su pertinencia y eficacia. Durante el año, no se emitió ningún decreto de terminación ni se notificó con el informe correspondiente.

Sin duda, la situación más preocupante del año fue la prolongación del estado de excepción de las instalaciones de la Asamblea Nacional, el cual se encuentra vigente desde 2010 y que en 2012 superó los dos años de duración, incumpliendo con los principios de necesidad, excepcionalidad, temporalidad, proporcionalidad y razonabilidad que rigen sobre los estados de excepción y que están contemplados en la CRE y la normativa internacional de derechos humanos.

En conclusión, si bien se han detectado avances encaminados a limitar el uso de los estados de excepción, se evidencian todavía prácticas que limitan su legitimidad, por lo que se hace un llamado para circunscribir a los lineamientos constitucionales y de legislación internacional; en particular se exhorta al cese del estado de excepción de las instalaciones de la Asamblea Nacional.

Delitos contra la seguridad del Estado

Uno de los temas polémicos que enfrenta el país desde hace algunos años está relacionado con la ocurrencia de delitos que comúnmente se denominan sabotaje, terrorismo, desacato y rebelión. El Código Penal en varios capítulos detalla los delitos relacionados con los temas señalados; por un lado, hay una amplia discusión sobre la concepción contenida en esta regulación y, por otro, hay algunos vacíos que problematizan aún más su alcance; así, en varios casos no se precisa el delito pues se enlistan acciones y finalidad (art. 158 y parte de 160), también se incorpora términos amplios como “deterioro” (art.158) que podrían dar lugar a una interpretación discrecional y extenderse a otro tipo de delitos e incluso infracciones. A esto se suma la ausencia de definiciones expresas indispensables, como por ejemplo qué es terrorismo, o no se utiliza el término sabotaje en ninguno de los artículos.²

A partir de lo anterior, se expone la información tomando como referencia los artículos del Código Penal relativos a la seguridad del Estado; según datos proporcionados por la FGE, se observa que en 2012, de mantenerse la tendencia de los tres trimestres, habría una disminución de procesos penales iniciados en la

mayor parte de delitos registrados respecto de 2011, pues hasta el mes de septiembre se reportan 254 procesos abiertos:

Cuadro 15
Delitos relacionados con la seguridad del Estado 2011-2012

Delitos por art. Código Penal	2011	2012*
Acciones destructivas para provocar alarma colectiva (art. 158)	111	75
Acciones para delitos contra la seguridad común (art. 160, muerte)	3	2
Acciones para delitos contra la seguridad común (art. 160, lesiones)	1	5
Acciones terroristas y similares para delitos contra la seguridad común (art. 160 A)	6	4
Agresión terrorista (art. 164, lesiones)	4	4
Agresión terrorista (art. 164, muerte)	0	1
Amenaza terrorista (art. 165)	12	14
Impedir tránsito público (art. 129)	10	6
Alzarse contra gobierno (art. 130)	2	2
Conspirar para alzarse contra gobierno y propósitos (art. 131)	3	1
Invasión espacios públicos o privados para alterar orden público (art. 155)	62	36
Desobedecer autoridades orden mejora servicios (art. 234)	195	104
Total	409	254

* El período comprende enero-septiembre de 2012.

Fuente: Respuesta a petición de información, FGE, 2012.

Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, 2013.

Preocupa el aumento de procesos iniciados respecto de las acciones para delitos contra la seguridad del Estado que causan lesiones (art. 160), la agresión terrorista que ocasiona muerte (art. 164) y la amenaza terrorista (art. 165). También respecto de los delitos que se mantienen en igual número: agresión terrorista que causa lesiones (art. 164) y alzarse contra el gobierno (art. 130).

Caso “Los 10 de Luluncoto”

El caso abierto sobre terrorismo más polémico en 2012 es el denominado “Los 10 de Luluncoto”, proceso instaurado luego de la detención ocurrida el 3 de marzo, en el marco del operativo policial Sol Rojo, de 10 activistas sociales y políticos, estudiantes y profesionales, 7 hombres y 3 mujeres, que se encontraban

reunidos en un departamento en el barrio Luluncoto para analizar el contexto político del país, especialmente frente a la convocatoria realizada por varias organizaciones sociales a la movilización en defensa de la vida, el agua y la dignidad, que se inició el 8 de marzo y planteaba culminar el 22 de ese mes.

La detención fue anunciada por el Ministro del Interior en rueda de prensa, quien refirió que el operativo era resultado de investigaciones adelantadas por la Policía Nacional y la Fiscalía. Señaló que las personas detenidas estaban vinculadas a la organización subversiva Grupo de Combatiente Populares (GCP); que planeaban actos violentos a partir del 8 de marzo, entre ellos, “llamadas explosivas” a la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) y a mineras de Cuenca y Loja; que “Estos presuntos integrantes no eran meros operadores, eran en realidad los cabecillas, los líderes de esta célula subversiva”; que su intención era desestabilizar la democracia y tomarse el poder por las armas; que había evidencia suficiente; y que no descartaba que en las investigaciones se determine el nexo con otras organizaciones. El 4 de marzo la Fiscalía realizó la audiencia de formulación de cargos, estableciendo detención preventiva a 9 de las personas detenidas y dispuso medidas sustitutivas para una de las jóvenes por encontrarse embarazada.³

El grupo detenido fue acusado invocando el libro II, del Código Penal, sin que se especifique el tipo de delito ni se individualice el proceso judicial. La defensa del grupo manifestó que, en el momento de la detención, no se exhibió una orden judicial y que posteriormente se presentó una orden, pero que esta no era de un juez competente. Los detenidos fueron obligados a permanecer arrodillados por horas. Además señaló que todas las medidas interpuestas fueron negadas por los jueces; hubo lentitud en el proceso y no se entregó la información requerida a la Fiscalía; hechos que serían suficientes para establecer la nulidad del proceso.⁴

El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se estableció la audiencia de juzgamiento, que no se cumplió. El 20 de diciembre de 2012 se realizó la audiencia de hábeas corpus y, por cuestiones de forma, salieron en libertad los hombres detenidos, mientras que las mujeres, por llegar puntuales a la audiencia, no pudieron acogerse al recurso. Como es de conocimiento público, la sentencia se realizó a finales de febrero de 2013, fueron condenados por otro delito, el de intento de asociación terrorista y sentenciados a un año de prisión. Esta sentencia será analizada en el informe correspondiente a 2013.

Ante este caso, varias organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales manifestaron su preocupación por la serie de implicaciones que presenta en materia de derechos humanos la forma cómo se dio la detención, se realizó el proceso y seguramente se pronunciarán sobre el tipo de sentencia.

Por su parte, la Veeduría Internacional sobre la Reforma a la Justicia, sobre la extensión de calificaciones jurídicas de sabotaje y terrorismo a conductas que podrían entenderse como protestas sociales, reflexionó:

El riesgo de extender la calificación penal referida a otros ámbitos que excederían del concepto que internacionalmente se admite como terrorismo, máxime

cuando en Ecuador existen precedentes en los que se ha considerado como derecho a la resistencia, la ejecución de acciones similares, recogidas en la Amnistía 4 aprobada, en su día, por la Asamblea Constituyente a instancias del gobierno. Esta línea de interpretación se vio confirmada posteriormente con la sentencia de la Corte Constitucional No. 0004-09-SAN-CC.⁵

Por lo que recomendó “acomodar la ley que regula el denominado delito de sabotaje, con el fin de adecuarlo a la realidad del Ecuador democrático y plural, respetando el principio de proporcionalidad de las penas y la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva”.⁶

Otros delitos contra la seguridad

También, a partir de la información de la FGE, de mantenerse la tendencia de los tres trimestres, habría una disminución de los procesos iniciados en los siguientes delitos:

- Contra la libertad individual por detención ilegal: en 2011 se registraron 155 procesos y 108 hasta septiembre de 2012.
- Tráfico ilícito de migrantes: en 2011 se iniciaron 140 procesos y 57 hasta septiembre de 2012.

Para el delito de trata de personas se registra un incremento de procesos iniciados, pasando de 171 casos en 2011 a 176 en 2012.

Respecto de las muertes violentas, en 2012 el país registró una reducción histórica de la tasa de homicidios a 12,7 casos por cada 100 mil habitantes (1.884 casos), la tasa más baja en los últimos doce años.⁷

En este contexto, las cifras sobre asesinato, para el período noviembre/2011-septiembre/2012, referidas por la FGE indican que hubo 1.911 noticias del delito, se realizaron 1,787 indagaciones previas y se realizaron 401 instrucciones fiscales. En tanto que para homicidios simples fue: 832 noticias del delito, 802 indagaciones previas y 68 instrucciones fiscales. En los delitos de acción pública se registra 193.581 noticias del delito, 172.551 indagaciones previas y 18.824 instrucciones fiscales (ver anexo 8, cuadros 1, 2 y 3).

Además de las cifras, hay que considerar que preocupan los delitos relacionados con el sicariato, narcotráfico, lavado de activos, secuestros, entre otros ilícitos, que alertan al país para el establecimiento de prioridades, pues las implicaciones de estas modalidades son nefastas y difíciles de ser revertidas, cuando no hay medidas integrales y sostenidas.

Casos de desaparición

Un hecho de particular preocupación en 2012 fue el surgimiento de denuncias públicas de desaparición de personas en el país. Uno de los casos reportados fue el de Carolina Garzón Arcila, joven estudiante, artista y activista colombiana que desapareció en la ciudad de Quito, el 28 de abril de 2012.

En torno a este caso, se constituyó la Coordinadora de Solidaridad por Carolina Garzón (CSCG), y posteriormente la constitución de hecho de una Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas en Ecuador (ASFADEC), que aglutina a familiares de más de una decena de casos, por medio de la cual se buscó impulsar los procesos de investigación para dar con el paradero de sus familiares.

También en las redes virtuales se conformaron espacios para circular información y propiciar apoyo a las familias en la búsqueda de las personas desaparecidas. Actualmente existe la cuenta Facebook “Personas desaparecidas Ecuador” y el blog “Personas desaparecidas”; este registra información a partir de 2008 y hasta febrero de 2013 mostraba la información de más de 20 casos.

En, el país no cuenta con estadísticas al respecto, menos con información sobre las gestiones desplegadas en estos casos. Según datos de la Policía Judicial, durante el primer semestre de 2012 se reportaron 469 personas desaparecidas, cifra preocupante.⁸

Un hecho que debe tomarse en cuenta sobre este tema es que el Código Penal del Ecuador no ha incorporado el delito de desaparición forzada, pese a que es suscriptor de las dos principales convenciones sobre la materia.

Ante esa situación, se espera que en la discusión del Código Integral Penal el delito de desaparición forzada sea incorporado y adecuado a la realidad de los casos que se están presentando en el país. Y, en el marco de una respuesta efectiva a las víctimas y familiares frente a su demanda de verdad y justicia, se exhorta a que la Policía Nacional y la FGE impulsen acciones de investigación efectivas en el marco del cumplimiento de su obligación de diligencia debida.

Notas

1. Centro de Gestión Gubernamental. Sistema de Información de Decretos Presidenciales, en <<http://decretos.cege.gob.ec/decretos/>>.
2. Ver en el Título I, De los delitos contra la seguridad del Estado: Capítulo I, De los delitos que comprometen la paz y la dignidad del Estado art. (123-129); Capítulo III, De los Delitos contra la Seguridad Interior del Estado (art. 130-155); y Capítulo IV, De los delitos de sabotaje y terrorismo (art 156). También, en el Título III, De los delitos contra la Administración Pública el Capítulo I, De la rebelión y atentados contra los funcionarios (art. 218-235).
3. El Telégrafo, “Grupo planificaba actos subversivos a partir del 8 de marzo”, en *El Telégrafo*, Guayaquil, 6 de marzo 2013, <<http://www.telegrafo.com.ec/noticias/judicial/item/grupo-planificaba-actos-subversivos-a-partir-del-8-de-marzo.html>>; El Telégrafo, “Grupo subversivo planeaba hacer “llamadas explosivas”, en *El Telégrafo*, Guayaquil, 6 de marzo 2013, <<http://www>>.

- telegrafo.com.ec/noticias/judicial/item/grupo-subversivo-planeaba-hacer-llamadas-explivas.htmlb.
4. El Telégrafo, “¿Por qué no están libres los “Diez de Luluncoto”?”, en *El Telégrafo*, Guayaquil, 26 de noviembre de 2012, <<http://www.telegrafo.com.ec/noticias/judicial/item/por-que-no-estan-libres-los-diez-de-luluncoto.html>>.
 5. Baltasar Garzón *et al.*, “Informe final de la veeduría internacional a la Reforma de la Justicia en Ecuador”, Quito, 2012, p. 42.
 6. *Ibid.*, p. 41.
 7. Ministerio del Interior, “Ecuador presenta un índice de homicidios debajo del promedio de la región y menor al de varias ciudades de los Estados Unidos”, 1 de marzo de 2013, <<http://www.ministeriointerior.gob.ec/ecuador-presenta-un-indice-de-homicidios-debajo-del-promedio-de-la-region-y-menor-al-de-varias-ciudades-de-los-estados-unidos/>>.
 8. Hoy, “Quito tendrá una alerta para buscar a las personas desaparecidas”, en *Hoy*, Quito, 29 de abril de 2013, <<http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/quito-tendra-una-alerta-para-buscar-a-las-personas>> desaparecidas-579987.html>.

Derechos colectivos y de la naturaleza



Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos [...] La consulta previa, libre de informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes, programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente (CRE, art. 57, num. 7).

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos (CRE, art. 71).

En 2012 se registraron dos fallos judiciales importantes sobre la protección de derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza en Ecuador. Por una parte la ratificación de la Corte Superior de Sucumbíos, de la sentencia de primera instancia que ordenó a la empresa Chevron/Texaco el pago de 18.000 millones de dólares como sanción por la contaminación causada entre 1972 y 1990, en la Amazonía ecuatoriana.¹

Por otra parte, la sentencia emitida por la Corte IDH, sobre el caso Pueblo indígena kichwa de Sarayaku vs. Ecuador,² que declaró la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena, a la identidad cultural, garantías y protección judicial; y haber puesto en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de este pueblo.³

En la sentencia del caso Sarayaku, la Corte IDH dispuso varias medidas a cargo del Estado, tendientes a reparar los derechos violados, entre las que se destacan: “consultar al Pueblo Sarayaku de forma previa, adecuada, efectiva y de plena

conformidad con los estándares internacionales aplicables a la materia, en el eventual caso que se pretenda realizar alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en su territorio, o plan de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que implique potenciales afectaciones a su territorio”; así como a “adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para poner plenamente en marcha y hacer efectivo, en un plazo razonable, el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y tribales y modificar aquellas que impidan su pleno y libre ejercicio, para lo cual debe asegurar la participación de las propias comunidades”. A ello se suman medidas de capacitación, disculpas públicas, publicaciones y el pago de una indemnización económica por la suma de 58.000 dólares.⁴

Sobre este fallo, un representante del Gobierno admitió ante la Corte IDH la responsabilidad del Estado por los daños a la comunidad y manifestó la voluntad de implementar medidas para remediar el daño causado, aunque aclaró que no cree en una consulta vinculante.⁵ Por su parte, el Presidente de la República sostuvo que este hecho no corresponde a su período de gobierno, que detrás del caso estarían organizaciones extranjeras que buscan impedir que se realice la explotación petrolera y minera en el país; y que la pretensión de que las comunidades otorguen su consentimiento previo violaría la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.⁶

Políticas petroleras y mineras

A pesar que estas sentencias alertan sobre los graves impactos que la explotación petrolera genera sobre los derechos humanos y de la naturaleza, durante 2012, el gobierno mantuvo su propuesta de desarrollo económico y social sustentada en la explotación de recursos no renovables, con la ampliación y profundización de las políticas petroleras y mineras.

En este sentido, las principales medidas gubernamentales adoptadas en el año para impulsar la política petrolera fueron:

- a) La suscripción de dos contratos petroleros que alteró la política de estatización de los servicios petroleros, con dos empresas privadas extranjeras, la Schlumberger (EUA) y la Tecpetrol (Argentina), para la optimización de la producción de los campos maduros Libertad y Shushufindi, de la provincia de Sucumbíos, ante el declive de producción que presentaban esos campos tras cuarenta años de operación. Según la versión oficial, esta negociación permitirá que los campos “recuperen su nivel de producción de 59.000 barriles en conjunto a 90.000 o 100.000 barriles por día”, con una inversión de 1.700 millones de dólares.⁷
- b) La expedición del Reglamento para la Ejecución de la Consulta Previa, Libre e Informada en los procesos de licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarbúferos, a través del D E 1247.⁸ Dicha expedición no se realizó por

ley, como lo establece la CRE, por estar regulando un derecho constitucional; y se realizó sin tomar en cuenta que en la Asamblea Nacional se estaba tramitando un proyecto específico sobre la materia.

- c) Lanzamiento por parte del Gobierno de la convocatoria a la XI Ronda de Licitación Petrolera “Ronda Sur Oriente Ecuador”, que se realizó el 28 de noviembre de 2012, por la cual “se identificaron 21 bloques, de los cuales trece saldrán a licitación, cinco quedarán pendientes, porque aún faltan los estudios previos, y tres fueron adjudicados a la Empresa Pública Petroamazonas”.⁹
- d) Al amparo del DE 1247, el Gobierno inició procesos de socialización con las comunidades ubicadas en los territorios sometidos a la licitación de la XI Ronda, con la instalación de “45 oficinas permanentes, organizaron 37 audiencias públicas, en las que participaron 2.517 ciudadanos y, además, se efectuaron 32 asambleas que contaron con la presencia de 2.220 personas”.¹⁰ Sin embargo, estos procesos fueron objetados por las organizaciones indígenas CONAIE, ECUARUNARI y CONFENIAE, pues sostenían que no se consultó con ellas ni con sus dirigentes.¹¹ Además, el presidente del pueblo Sarayaku sostuvo: “Cómo podemos permitir que se abra una nueva frontera petrolera en un territorio en donde el 90% del bosque es conservado”.¹²

En cuanto a la política minera, el 5 de marzo de 2012, el Gobierno suscribió el primer contrato minero para explotación de cobre a cielo abierto con la empresa china Ecuacorrientes S.A. (ECSA), en el marco del Proyecto Mirador ubicado en la parroquia Tundayme-El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. La duración de este contrato es por 25 años y faculta a que la empresa empiece a operar a mediados de 2014. De acuerdo con el Gobierno, el proyecto contemplaría regalías por 2.774 millones de dólares y la generación de 3.100 plazas de trabajo. Además, se tiene proyectado invertir el 100% de las regalías en la zona hasta superar los niveles de pobreza.¹³

Frente a esta decisión, varias organizaciones indígenas y sociales desarrollaron acciones de protesta social, y denunciaron los impactos negativos de la minería metálica a cielo abierto, con la que se pretende operar este proyecto. Una de estas acciones fue la Marcha por el agua, la dignidad y la vida, que se realizó del 8 al 22 de marzo de 2012.

Otro hecho importante fue la difusión de los resultados de una auditoría efectuada por la Contraloría General del Estado al Proyecto Mirador, ubicando varias irregularidades legales y administrativas cometidas durante el proceso de concesión de este proyecto. No obstante, esta entidad, mediante un comunicado, señaló que se trataba de una “comunicación de resultados provisionales”¹⁴ y hasta finales de año no emitió un informe definitivo.

En relación con las políticas de control gubernamental sobre los procesos de exploración y explotación, se debe señalar que el Ministerio del Ambiente, en respuesta a la petición de información realizada por el PADH sobre el otorgamiento de licencias ambientales, informes de impacto ambiental o auditorías ambientales

y consultas previas realizadas a la comunidad,¹⁵ informó que durante el período noviembre/2011-octubre/2012 otorgó alrededor de 500 licencias ambientales; de ellas el 39% corresponde a la actividad hidrocarburífera, el 16% a telecomunicaciones, el 5% a minería y 3% actividades industriales y viales; estas en conjunto representan el 66% del total de licencias y el 34% comprende a actividades de saneamiento, agrícolas, turísticas, eléctrica y otras no especificadas.

Para el mismo período, esta entidad reportó que realizó ocho auditorías ambientales, cinco en el área de hidrocarburos y tres sobre desechos tóxicos. Indicó además que hasta octubre no se habían emitido aprobaciones de las auditorías ambientales de cumplimiento para el período 2011-2012. No proporcionó la lista de informes de impacto ambiental solicitada, y, en cuanto a la lista de consultas previas realizadas, señaló: “le manifiesto que este aspecto no aplica dentro de los procesos de licenciamiento ambiental”. Sin embargo, según la normativa ambiental vigente, el otorgamiento de este tipo de licencia tiene como antecedente la aprobación del estudio de impacto ambiental, para la cual, a su vez, es un requisito indispensable que se presente el informe del proceso de participación social realizado (consulta). Al respecto puede revisarse lo dispuesto por el art. 78 de la Ley de Minería; los art. 13, 16 y 17 del Reglamento Ambiental para actividades mineras, y el art. 5, num. 1 del Licenciamiento Ambiental para actividades hidrocarburíferas.

De esta forma, existe el riesgo de que los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana puedan ser afectados por el inicio de las actividades mineras a gran escala en la Amazonía centro sur, zona que hasta la fecha se ha mantenido intocada y que constituye una fuente incuestionable de riqueza natural y hábitat ancestral de pueblos indígenas, incluido el pueblo Sarayaku.

Ante esta situación, se exhorta al Gobierno que haga una revisión de su política petrolera y minera, inscribiéndola en la protección efectiva a los derechos humanos y de la naturaleza, que involucre el desarrollo y cumplimiento de los estándares de protección constitucionales y los fijados por la sentencia de la Corte IDH sobre el caso Sarayaku, encaminados a consolidar un proceso efectivo de consulta y consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas para decidir sobre el destino de sus territorios, así como la garantía del respecto al principio de precaución.

Daños e impactos ambientales

Desde 2010, el Ministerio de Ambiente viene impulsando el Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) como una instancia especializada en reparación integral de los pasivos socio-ambientales, encargada de llevar un catastro de los daños generados por la actividad hidrocarburífera y sus relaciones con el entorno social.

Una iniciativa importante de este programa desarrollada en 2012 fue la implementación en su página web del Sistema de Indicadores de Pasivos Ambientales y Sociales (SIPAS), el cual permite obtener datos cuantitativos sobre los derrames de petróleo producidos, las áreas de afectación y los avances en el proceso de remediación, dentro del período 1967-2009.¹⁶

En 2012, se dieron algunos derrames de petróleo que produjeron afectaciones a comunidades. Ante la ausencia de datos por parte del SIPAS sobre estos se realizó una sistematización de las noticias que sobre esta materia se generaron en el año y que dan cuenta de siete derrames de petróleo, con el siguiente detalle:

- a) Según *El Comercio*, el 22 de enero en el bloque 21, operado por Petroamazonas, en la cabecera del río Canambu, parroquia Chonta Punta, del cantón Tena, en Napo, se produjo un derrame que afectó a las principales fuentes de agua de las comunidades cercanas pertenecientes a los pueblos kichwa y waorani. No hubo versión oficial sobre la cantidad de petróleo derramado.¹⁷
- b) Esta misma fuente reportó que el 13 de abril en el campo Tetete, del Área Libertador de Petroecuador, en Sucumbíos, un derrame se produjo por la ruptura de una tubería que contaminó un estero y afectó al agua y al suelo de cinco comunidades del sector. Aunque la versión oficial estableció que el derrame fue de 40 barriles de petróleo, los pobladores sostuvieron que, dada la cantidad de tanqueros que llegaron para la remediación, podrían haber alcanzado los 1.000 barriles.¹⁸
- c) La misma fuente señaló que a principios de mayo, en el campo Shushufindi, provincia de Sucumbíos, se produjo otro derrame de petróleo provocado por un accidente en el cambio de tuberías. En este caso tampoco hubo una versión oficial de cuántos barriles fueron derramados y cuáles fueron las comunidades afectadas.¹⁹
- d) La misma fuente reportó que el 6 de mayo en el poliducto que transporta gasolina y diésel, a la altura del kilómetro 44 de la vía Quito-Ambato, se produjo un nuevo derrame. Tampoco hubo versión oficial sobre el volumen del derrame.²⁰
- e) Esta misma fuente en otra nota de prensa reportó que el 6 de mayo en el campo Drago, ubicado en la provincia de Sucumbíos, se derramaron tres galones de crudo por cambios de tubería, que afectó a 100 m².²¹
- f) De acuerdo a Ecuavisa, el 14 de mayo, en la comunidad San Francisco de Cononaco, provincia de Orellana, al interior del Parque Nacional Yasuní, un derrame afectó al río Cononaco Chico, dejó secuelas en varias hectáreas de sembríos, mató varios animales. Aunque no hubo versión oficial sobre la cantidad de petróleo derramado, en un solo día se recolectaron 23 barriles de petróleo.²²
- g) Ecuadorinmediato, recogiendo una nota de la Coordinadora de la Organización de Líderes Locales, informó que el 25 de mayo se produjo un derrame, en el kilómetro 53 de la vía Auca, campo petrolero Auca, donde opera Petroecuador, por el rebosamiento de un tanque en las instalaciones petroleras. El derrame

afectó al río Cristal que desemboca en el Tiputini y después ingresa en el Parque Nacional Yasuní. Afectó a la comunidad shuar Zaar Etnsa, cuyos pobladores sostuvieron que hacía un año enfrentaron el mismo problema y no hubo ninguna remediación. Las autoridades no proporcionaron datos oficiales de la cantidad derramada, aunque la población calcula que pudieron ser de 20 a 30 barriles.²³

Como se puede apreciar, existe una limitada información oficial sobre la magnitud de los impactos provocados y el alcance de los procesos de remediación ambiental por daños generados en el actual proceso de explotación petrolera. Se espera que en los próximos años el SIPAS pueda facilitar información oportuna sobre la magnitud de estos hechos y las políticas adoptadas.

Notas

1. Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, Juicio 2011-0106, Sentencia de 3 de enero de 2012.
2. Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Pueblo Indígena kichwa de Sarayaku vs. Ecuador”. Sentencia de 27 de junio de 2012.
3. *Ibid.*, X Puntos resolutivos, párr. 341, num. 2-4.
4. *Ibid.*, X Puntos resolutivos, párr. 341, num. 2-8; y párr. 323.
5. “El abogado de la Presidencia admitió la responsabilidad del Estado en los daños infligidos a la comunidad y comprometió al Gobierno a “hacer las reparaciones que haya que hacer”. Pero dejó claro que no cree en una consulta vinculante”, en *Hoy*, “El caso Sarayaku pesará en el futuro minero y petrolero”, en *Hoy*, Quito, 27 de julio de 2012, <<http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-caso-sarayaku-pesara-en-el-futuro-minero-y-petrolero-557057.html>>.
6. El Telégrafo, “ONG estarían detrás de reclamos indígenas en caso Sarayaku”, en *El Telégrafo*, Guayaquil, 21 de abril de 2012, <<http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/ongs-estarian-detras-de-reclamos-indigenas-en-caso-sarayaku.html>>.
7. La República, “Ecuador firma millonarios acuerdos petroleros”, en *La República*, 1 de febrero de 2012, <<http://www.larepublica.ec/blog/economia/2012/02/01/ecuador-firmara-con-tratos-petroleros-con-una-inversion-millonaria/>>.
8. D E 1247, de 19 de julio de 2012, publicado en el RO 759, de 2 de agosto de 2012.
9. El Telégrafo, “Undécima ronda de licitación petrolera se convoca esta noche”, en *El Telégrafo*, Guayaquil, 28 de noviembre de 2012, <<http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/undecima-ronda-de-licitacion-petrolera-se-convoca-esta-noche.html>>.
10. El Telégrafo, “\$ 115 millones para inversión social donde se explote petróleo”, en *El Telégrafo*, Quito, <<http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/115-millones-para-inversion-social-donde-se-explote-petroleo.html>>.
11. *Ibid.*
12. El Telégrafo, “Postergan licitación 5 bloques petroleros por resistencia de indígenas”, en *El Telégrafo*, Guayaquil, 22 de noviembre de 2012, <<http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/postergan-licitacion-5-bloques-petroleros-por-resistencia-de-indigenas.html>>.
13. El Telégrafo, “100% de utilidades mineras serán para desarrollar comunidades”, en *El Telégrafo*, Guayaquil, 7 de marzo de 2012, <<http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/100-de-utilidad-des-mineras-sera-para-desarrollar-las-comunidades.html>>.

14. Contraloría General del Estado, Dirección de Comunicación Institucional, “Boletín de Prensa 012”, de 8 de marzo de 2012, <http://www.contraloria.gob.ec/boletines_prensa.asp?id_SubSeccion=64&idNoticia=254>.
15. Ministerio de Ambiente, Oficio No. MAE-DNPCA-2012-1975, de 12 de diciembre de 2012, suscrito por Víctor Pérez Balladares, Director Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental.
16. Ministerio de Ambiente, “Sistema de Indicadores de Pasivos Ambientales y Sociales”, en <<http://www.sipas-pras.gob.ec/sipasweb/#>>.
17. El Comercio, “Quinto derrame de hidrocarburos en Ecuador en este año”, en *El Comercio*, Quito, 8 de mayo de 2012, <http://www.elcomercio.com.ec/negocios/Quinto-derrame-hidrocarburos_0_695930632.html>.
18. *Ibid.*
19. *Ibid.*
20. *Ibid.*
21. El Comercio, “Dos derrames en instalaciones de Petroecuador”, en *El Comercio*, Quito, 6 de mayo de 2012, <http://www.elcomercio.com/negocios/derrames-instalaciones-Petroecuador_0_695330546.html>.
22. Ecuavisa, “Derrame de petróleo ha causado daños ambientales en Orellana”, en *Ecuavisa*, Quito, 14 de mayo de 2012, <<http://www.ecuavisa.com/noticias/nacionales/49566-derrame-de-petroleo-ha-causado-danos-ambientales-en-orellana.html>>.
23. Ecuadorinmediato, “Comunidad Shuar denuncia derrame de petróleo en Orellana”, en *Ecuadorinmediato*, Quito, 4 de junio de 2012, <http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=174789&umt=comunidad_shuar_denuncia_derrame_petroleo_en_orellana>.

Conclusiones y recomendaciones



1. Si bien se notan esfuerzos importantes desde instancias gubernamentales, ONG, universidades y la prensa para producir información sobre derechos humanos, se mantiene aún el déficit de información especializada, sistemática, periódica y de acceso público. Al recalcar que la información pública es un derecho y que al mismo tiempo contribuye a la generación de políticas públicas y a la rendición de cuentas, especialmente por parte de las autoridades, se esperan cambios significativos que muestren el cumplimiento progresivo de este derecho. En este sentido serán señales de avance para los siguientes años, entre otras:
 - a) Disminuir el 44% de peticiones de información sin respuesta para la elaboración del Informe anual sobre derechos humanos; y mejorar la calidad de las contestaciones.
 - b) Que la DPE priorice la elaboración de un informe sobre la situación de derechos humanos en Ecuador, que tenga carácter integral y periódico, a base de indicadores cualitativos y cuantitativos, que permita conocer al país y a la comunidad internacional el nivel de cumplimiento de los derechos, y que dé cuenta de todas las atribuciones establecidas por la Constitución y la ley.
 - c) Que el SNI incorpore una sección de indicadores de derechos humanos de acuerdo a las recomendaciones internacionales y al compromiso voluntario asumido ante el Examen Periódico Universal realizado en 2012. También es importante la actualización permanente y oportuna de la información que promete el sistema en sus diferentes secciones.
 - d) Que la prensa incorpore información específica sobre derechos humanos en la información diaria y con reportes periódicos como aporte a la educación e interiorización de los valores democráticos y de

- convivencia social en la diversidad, lo cual es extensible a los demás medios de comunicación.
- e) Profundizar estudios y análisis en materia de derechos humanos desde instancias estatales, ONG, universidades y centros de investigación.
2. Al asumir que la conflictividad es parte vital de toda sociedad humana, en donde la forma y calidad del manejo del conflicto es indicador de los procesos de democratización y de la construcción de sociedades respetuosas de las personas y del entorno donde habitan, sí preocupan los niveles de polarización, radicalización de posturas y ausencia de espacios de diálogo político con condiciones de igualdad. Frente a ello, es urgente la reversión de esta tendencia, para lo cual la discusión del cumplimiento de derechos a través de espacios de diálogo basados en el respeto y valoración del disenso constituyen una guía primordial.
3. El desarrollo normativo es crucial para fortalecer el mandato constitucional en materia de derechos y garantías. Este desarrollo, aunque principalmente corresponde a la Asamblea Nacional, debe ser tomado en cuenta por todas las autoridades e instancias que generan lineamientos normativos. Aunque se registran esfuerzos para avanzar en el proceso de adecuación de la normativa secundaria al nuevo marco constitucional, se notan todavía varios límites en el cuarto año de aprobada la Constitución; por ello se recomienda de manera especial:
- a) Que la Asamblea Nacional cubra el déficit de adopción de leyes sobre derechos constitucionales pendientes, especialmente en materia de derechos de grupos de atención prioritaria, de pueblos y nacionalidades y de la naturaleza; y que, en el proceso de discusión y aprobación de nuevas leyes o sus reformas, incorpore las recomendaciones emitidas por organismos internacionales de derechos humanos y por la Veeduría Internacional para la reforma a la justicia.
- b) Que se revisen las normas de rango inferior a la ley, adoptadas y observadas por los organismos internacionales de protección de derechos humanos, como son los DE 982/2008 y 812/2011 relativos al registro y funcionamiento de organizaciones no gubernamentales y de cooperación; 813/2011 sobre despidos de trabajadores públicos; 1182/2012 que reglamenta el derecho de refugio; y 1247/2012 sobre la consulta previa para actividades hidrocarburíferas.
4. El país se encuentra en medio de varias acciones que buscan reformar la administración de justicia con miras a superar problemas de larga data; no obstante, perviven varias limitaciones urgentes de ser superadas, como: poco control constitucional; baja activación de garantías; falta de autonomía de la función judicial; baja formación de los operadores de justicia en derechos humanos; debilidad en la protección a víctimas y testigos en causas penales;

lentitud en atender los casos presentados por la Comisión de la Verdad, entre otros. Por tanto es indispensable:

- a) Que la Corte Constitucional fortalezca sus competencias de control y justicia constitucional como un mecanismo efectivo para la protección y garantía de los derechos humanos; y que cuente con un sistema de información que permita conocer a cabalidad su actuación según sus competencias.
 - b) Que se establezcan con claridad las relaciones y competencias entre justicia indígena y del Estado.
 - c) Que el Consejo de la Judicatura concrete la implementación la plataforma Justicia 2.0 para contar con un sistema integrado de información sobre la administración de justicia, que se complemente con estudios sobre la calidad de resolución de causas, especialmente en materia de garantías constitucionales.
 - d) Que se implementen a cabalidad las recomendaciones de la Veeduría Internacional a la Reforma de la Justicia en el Ecuador, especialmente en materia de derechos humanos, procesos de evaluación, promoción de instancias de participación y control, y respeto a la independencia de la Función Judicial.
 - e) Que se asuman, para la definición de las políticas de justicia, las recomendaciones emitidas por diferentes instancias internacionales de protección de derechos humanos, en especial las emitidas en las observaciones y recomendaciones finales emitidas sobre los informes del país.
 - f) Que la Defensa Pública, en coordinación con otras entidades del Estado y la sociedad, adopte medidas efectivas para tratar la alta prevalencia de causas sobre el derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes; y derechos laborales.
 - g) Que se brinde mayor agilidad y calidad en las políticas para la investigación, sanción y reparación de las graves violaciones a los derechos humanos reportadas en el Informe de la Comisión de la Verdad, para lo cual es necesario que la FGE cumpla con la diligencia debida para la judicialización de estos casos.
 - h) Que se fortalezca la autonomía político-técnica y financiera del sistema de protección a víctimas.
 - i) Que se adopten medidas concretas y efectivas para prevenir y atender los casos de personas desaparecidas, especialmente desde la Policía Nacional y la FGE; y que, en la discusión del Código Integral Penal, se incorpore el delito de desaparición forzada, tomando en cuenta la realidad de los casos que se están presentando en el país.
5. Sin duda existen avances en la incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas macro como lo es el PNBV; sin embargo, es evidente que estos avances todavía no se traducen en acciones que fortalezcan la exigibilidad, el cambio de una lógica asistencial y, en algunos casos, clientelar; el tránsito de la

noción de necesidad a la de derecho; la importancia de la adopción de acciones afirmativas sustanciales, entre otras. Por tanto, se recomienda trabajar en la transversalización del enfoque de derechos en todo el ciclo de las políticas y la implementación de indicadores de derechos humanos que permitan visualizar el avance progresivo de las mismas. De manera urgente, se esperan acciones dirigidas a detener y revertir el aumento de brechas de inequidad por razones de diferencia étnico-cultural y regional, evidenciadas en el análisis de los indicadores relacionados al buen vivir. Así también, continuar con los esfuerzos de las brechas, que, si bien han disminuido, todavía se presentan en porcentajes altos.

6. La seguridad integral es otro desafío para el pleno cumplimiento de los derechos en su conjunto. Son preocupantes los estados de excepción promulgados sin la debida motivación y sin observar los principios constitucionales; las irregularidades en el proceso del caso “Los 10 de Luluncoto”; las limitaciones en la administración de justicia que restringen la seguridad jurídica; y la existencia de personas desaparecidas. La recomendación central es la implementación de medidas articuladas que asuman el derecho a la seguridad integral basada en la seguridad de las personas y su entorno.
7. La estrecha relación entre derechos colectivos y de la naturaleza plantea una gran complejidad para su cumplimiento. Se destacan los fallos emitidos en 2012 sobre los casos Texaco-Chevron (Corte Superior de Sucumbíos) y Sarayaku (Corte IDH) tendientes a reparar la violación de derechos; también la auditoría realizada por la Contraloría General del Estado al Proyecto Mirador, donde se ubicaron irregularidades en el proceso de concesión de este proyecto. De otra parte, durante 2012 se produjeron siete derrames de petróleo los que ocasionaron afectaciones a comunidades y a la naturaleza; y continuaron las políticas petroleras y mineras en una lógica que no guarda concordancia con el alcance de los derechos colectivos y de la naturaleza. Esta situación amerita una atención particular, por lo que se exhorta al Gobierno a:
 - a) Una revisión de sus políticas en este campo, a fin de cumplir con la protección efectiva a los derechos humanos y de la naturaleza.
 - b) Incorporación en dichas políticas de los estándares de protección constitucionales e internacionales (por ejemplo, la Sentencia de la Corte IDH sobre el caso Sarayaku), entre ellos, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para decidir sobre el destino de su vida y territorios; y la garantía del respecto al principio de precaución.
 - c) Superar la limitada información oficial sobre la magnitud de los impactos provocados por los actuales procesos de explotación petrolera y minera, los resultados de los procesos de remediación ambiental y las políticas adoptadas.

En forma global, se insiste en la recomendación formulada en el Informe 2011 que “reitera la importancia de generar espacios de diálogo y deliberación, entre todos los actores, para la búsqueda de soluciones que garanticen el contenido material de la Constitución”.

Bibliografía



Libros e informes

- Defensoría del Pueblo del Ecuador, “Informe de Labores 2012. El desafío de ser diferentes es sentirnos semejantes”, en <www.dpe.gob.ec>.
- Garzón, Baltasar, *et al.*, “Informe final de la veeduría internacional a la Reforma de la Justicia en Ecuador”, Quito, 2012, <<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ess3lRdgzFkJ:www.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2013/02/procesos01.pdf+informe+final+veedur%C3%ADa+baltasar+garzon+pdf&cd=7&hl=es-419&ct=clnk>>.
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *Ecuador y el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la ONU. Sistematización de Recomendaciones 2004-2011*, Quito, OACDH / Defensoría del Pueblo del Ecuador 2011.
- Organización de Naciones Unidas, “Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal para Ecuador”, Consejo de Derechos Humanos, (A/HRC/21/4), 2012.
- “Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Ecuador”, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, (CERD/ C/ECU/CO/20-22), 2012.
- “Observaciones finales del Comité sobre el tercer informe del Ecuador”, Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (E/C.12/ECU/CO/3), 2012.
- Pineda Neisa, Ana Selene, “Informe final sobre el estado de cumplimiento de las Guías de Santiago”, ILANUD / Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos,

2012, en <<http://www.aiamp.org/index.php/documentos32?task=document.viewdoc&id=137>>.

Programa Andino de Derechos Humanos, (PADH) comp., *Informe sobre derechos humanos. Ecuador 2011*, Quito, UASB-E, 2012.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, “Informe de Rendición de Cuentas 2012”, en <<http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/05/Folleto-Informe-de-Rendicion-de-cuentas-Mayo.pdf>>.

Instrumentos y jurisprudencia internacional

Convención Americana de Derechos Humanos, 1969.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Pueblo Indígena kichwa de Sarayaku contra Ecuador”, Sentencia de 27 de junio de 2012.

Corte Constitucional de Colombia, “Corte Constitucional. Relatoría. Sentencias”, CCC, en <<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/estadisticas1992-2013.png>>.

Normativa, jurisprudencia y expediente nacionales.

Constitución de la República del Ecuador, 2008.

Código Penal, 1971. Última reforma 2012.

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 2001.

Resolución Legislativa 0, Registro Oficial (RO) Suplemento 733, de 27 de junio de 2012.

Corte Constitucional para el período de Transición, Caso No. 0027-09-AN, Sentencia No. 000S-09-SAN-CC, de 9 de diciembre de 2009.

Decreto Ejecutivo 1247, de 19 de julio de 2012, RO 759, de 2 de agosto de 2012.

Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, Juicio No. 2011-0106, Sentencia de 3 de enero de 2012.

Fiscalía General del Estado, “Estatuto Orgánico por Procesos de la Fiscalía General del Estado”, Resolución No. 003-A-FGE- 2012, ROS 268, de 23 de marzo de 2012.

—— “Instructivo para el tratamiento de casos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos dentro de la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos”, Resolución 40, publicada en el RO 753, de 20 de julio de 2012.

Respuestas a peticiones de información

Asamblea Nacional del Ecuador, Oficio No. SAN-2013-0002, de 4 de enero de 2013, suscrito por Andrés Segovia, Secretario General.

—— Oficio PAN-FC-2013-No. 0042, de 24 de enero de 2013, suscrito por Fernando Cordero, Presidente.

- Comisión de Transición Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, Oficio No. CTCI-PRESI-2012-0547-OFI, de 9 de noviembre de 2012, suscrito por Sonia Paulina Estrella, Presidenta subrogante.
- Consejo de la Judicatura de Transición, Oficio No. 2759-DG-CJ-12, de 6 de noviembre de 2012, suscrito por Mauricio Jaramillo, Director General.
- Oficio No. 2760-DG-CJ-12 de 7 de noviembre de 2012, suscrito por Mauricio Jaramillo, Director General.
- Oficio No. 2762-DG-CJ-12 de 9 de noviembre de 2012, suscrito por Mauricio Jaramillo, Director General.
- Oficio No. 2769-DG-CJ-12 de 19 de noviembre de 2012, suscrito por Mauricio Jaramillo, Director General.
- Oficio No. 2782-DG-CJ-12 de 27 de noviembre de 2012, suscrito por Mauricio Jaramillo, Director General.
- Oficio No. 2793-DG-CJ-12 de 3 de diciembre de 2012, suscrito por Mauricio Jaramillo, Director General.
- Oficio No. 0199-DG-CJ-13 de 29 de enero de 2013, suscrito por Francisco Jácome Robalino, Director General (E).
- Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, Oficio No. CNNA-SEN-2012-1406-OF, de 6 de noviembre de 2012, suscrito por Álvaro Sáenz Andrade, Secretario Ejecutivo Nacional.
- Corte Constitucional del Ecuador, Oficio No. 0002-CCE-SG-2012, de 12 de noviembre de 2012, suscrito por Jaime Pozo Chamorro, Secretario General Ad-Hoc.
- Corte Nacional de Justicia, Oficio No. 1627-SP-CNJ-2012, de 7 de noviembre de 2012, suscrito por Carlos Ramírez Romero, Presidente.
- Defensoría del Pueblo del Ecuador, Oficio No. DPE-ADJP-2012-0091-0, de 31 de octubre de 2012. Suscrito por Patricio Benalcázar Alarcón, Adjunto Primero.
- Defensoría Pública del Ecuador, Oficio No. DP-DPG-DOG-AGC-2012-0615, de 20 de noviembre de 2012, suscrito por Ernesto Pazmiño Granizo, Defensor Público General
- Fiscalía General del Estado, Oficio No. 10368, de 28 de noviembre de 2012, suscrito por Alejandro Fuentes, Asesor.
- Memorando No. 075-FGE-DCVDH, de 6 de noviembre de 2012, suscrito por Fidel Jaramillo Paz y Miño, Director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos.
- Memorando No. 1016-FGE-DI, de 12 de noviembre de 2012, suscrito por Fausto Valle Mancheno, Director de Investigaciones.
- Memorando No. 307-FGE-DPVT, de 12 de noviembre de 2012, suscrito por Patricia Ruiz Rivera, Coordinadora Nacional del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal.
- Memorando s/n, de 13 de noviembre de 2012, suscrito por Cecilia Armas de Tobar, Directora de Asesoría Jurídica (E).

- Oficio No. 10406 FGE-DGP, de 29 de noviembre, 2012, suscrito por Marco Navas Arboleda, Director de Gestión Procesal.
- Ministerio de Ambiente, Oficio No. MAE-DNPCA-2012-1975, de 12 de diciembre de 2012, suscrito por Víctor Alexander Pérez Balladares, Director Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental.
- Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Oficio No. MJDHC-DM-2012-0995-OF, de 5 de noviembre de 2012, suscrito por Carmen Amalia Simone Lasso, Viceministra de Justicia Derechos Humanos y Cultos.
- Vicepresidencia de la República, Oficio No. VPR-2012-05507-O, de 9 de noviembre de 2012, suscrito por Alex Esteban Camacho Vásconez, Secretario General.
- Procuraduría General del Estado, Oficio No. 10358, de 25 de octubre de 2012, suscrito por Erick Roberts, Director Nacional de Derechos Humanos.

Prensa

- Ecuadorinmediato, “Comunidad Shuar denuncia derrame de petróleo en Orellana”, en *Ecuadorinmediato*, Quito, 4 de junio de 2012, <http://www.ecuatorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=174789&umt=comunidad_shuar_denuncia_derrame_petroleo_en_orellana>.
- EcuadorLibreRed, “Pobladores se oponen a la apertura de nuevos pozos petroleros”, en *EcuadorLibreRed*, 23 de julio de 2013, <<http://www.ecuadorlibrerred.tk/index.php/ecuador/ambiente/1425-pobladores-se-oponen-a-la-apertura-de-nuevos-pozos-petroleros>>.
- Ecuavisa, “Derrame de petróleo ha causado daños ambientales en Orellana”, en *Ecuavisa*, Quito, 14 de mayo de 2012, <<http://www.ecuavisa.com/noticias/nacionales/49566-de-derrame-de-petroleo-ha-causado-danos-ambientales-en-orellana.html>>.
- El Comercio, “Dos derrames en instalaciones de Petroecuador”, en *El Comercio*, Quito, 6 de mayo de 2012, <http://www.elcomercio.com/negocios/derrames-instalaciones-Petroecuador_0_695330546.html>.
- “Quinto derrame de hidrocarburos en Ecuador en este año”, en *El Comercio*, Quito, 8 de mayo de 2012, <http://www.elcomercio.com.ec/negocios/Quinto-derrame-hidrocarburos_0_695930632.html>.
- El Telégrafo, “Grupo planificaba actos subversivos a partir del 8 de marzo”, en *El Telégrafo*, Guayaquil, 6 de marzo de 2012, <<http://www.telegrafo.com.ec/noticias/judicial/item/grupo-planificaba-actos-subversivos-a-partir-del-8-de-marzo.html>>.
- “Grupo subversivo planeaba hacer “llamadas explosivas”, en *El Telégrafo*, Guayaquil, 6 de marzo de 2012, <<http://www.telegrafo.com.ec/noticias/judicial/item/grupo-subversivo-planeaba-hacer-llamadas-explosivas.html>>.

- “100% de utilidades mineras serán para desarrollar comunidades”, en *El Telégrafo*, Guayaquil, 7 de marzo de 2012, <<http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/100-de-utilidades-mineras-sera-para-desarrollar-las-comunidades.html>>.
- “ONG estarían detrás de reclamos indígenas en caso Sarayaku”, en *El Telégrafo*, Guayaquil, 21 de abril de 2012, <<http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/ongs-estarian-detras-de-reclamos-indigenas-en-caso-sarayaku.html>>.
- “Postergan licitación 5 bloques petroleros por resistencia de indígenas”, en *El Telégrafo*, Guayaquil, 22 de noviembre de 2012, <<http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/postergan-licitacion-5-bloques-petroleros-por-resistencia-de-indigenas.html>>.
- “¿Por qué no están libres los “Diez de Luluncoto”?”, en *El Telégrafo*, Guayaquil, 26 de noviembre de 2012, <<http://www.telegrafo.com.ec/noticias/judicial/item/por-que-no-estan-libres-los-diez-de-luluncoto.html>>.
- “Undécima ronda de licitación petrolera se convoca esta noche”, en *El Telégrafo*, Guayaquil, 28 de noviembre de 2012, <<http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/undecima-ronda-de-licitacion-petrolera-se-convoca-esta-noche.html>>.
- “\$ 115 millones para inversión social donde se explote petróleo”, en *El Telégrafo*, Guayaquil, 29 de noviembre de 2012, <<http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/115-millones-para-inversion-social-donde-se-explote-petroleo.html>>.
- Hoy, “El caso Sarayaku pesará en el futuro minero y petrolero”, en *Hoy*, Quito, 27 de julio de 2012, <<http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-caso-sarayaku-pesara-en-el-futuro-minero-y-petrolero-557057.html>>.
- “Quito tendrá una alerta para buscar a las personas desaparecidas”, en *Hoy*, Quito, 29 de abril de 2013, <<http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/quito-tendra-una-alerta-para-buscar-a-las-personas-desaparecidas-579987.html>>.
- La República, “Ecuador firma millonarios acuerdos petroleros”, en *La República*, 1 de febrero de 2012, <<http://www.larepublica.ec/blog/economia/2012/02/01/ecuador-firmara-contratos-petroleros-con-una-inversion-millonaria/>>.

Fuentes estadísticas y bases de datos

- Función Judicial de Pichincha, “Base de datos. Ingresos y resoluciones de garantías constitucionales 2011-2012”, procesada por PADH, 2013.
- Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO), “Cronología Nov-2011 / Dic.-2012”, Mario Unda-Centro de Investigaciones Ciudad, coord., Comité de Seguimiento y Análisis de la Coyuntura del Ecuador.
- PADH, “Base de datos. Conflictividad”, 2012. Elaborada a partir de la Cronología OSAL-CLACSO.

- “Base de datos. Desarrollo normativo”, PADH, 2012.
 - “Base de datos. Estados de excepción”, PADH, 2012.
 - “Base de datos. Seguimiento de prensa impresa”, PADH, 2012, elaborada a partir de la Cronología OSAL-CLACSO.
 - “Base de datos. Seguimiento de prensa virtual”, PADH, 2012.
 - “Base de datos. Seguimiento producción DDHH”, PADH, 2012.
- Sistema Nacional de Información, en <http://www.sni.gob.ec/web/guest;jsessionid=0B0058E07C1949B9229C37060437B06B>.

Otros

- Asamblea Nacional del Ecuador, página web, en <http://www.asambleanacional.gov.ec>.
- Consejo de la Judicatura, Memorando circular No. 3524-UCD-2012, de 9 de julio de 2012, suscrito por Diego Zambrano Álvarez, Coordinador de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura.
- Contraloría General del Estado, “Boletín de Prensa 012”, Dirección de Comunicación Institucional, de 8 de marzo de 2012, en http://www.contraloria.gob.ec/boletines_prensa.asp?id_SubSeccion=64&idNoticia=254.
- Ministerio de Ambiente, “Sistema de Indicadores de Pasivos Ambientales y Sociales”, en <http://www.sipas-pras.gob.ec/sipasweb/#>.
- Ministerio del Interior, “Ecuador presenta un índice de homicidios debajo del promedio de la región y menor al de varias ciudades de los Estados Unidos”, 1 de marzo de 2013, en <http://www.ministeriointerior.gob.ec/ecuador-presenta-un-indice-de-homicidios-debajo-del-promedio-de-la-region-y-menor-al-de-varias-ciudades-de-los-estados-unidos/>.
- Presidencia de la República del Ecuador, Oficio circular No. T1.CI-SNJ-18-1689, de 18 de noviembre de 2010, suscrito por Alexis Mera, Secretario Nacional Jurídico.

Información del Consejo de la Judicatura de Transición sobre garantías jurisdiccionales

Anexo 1



Alcance de la muestra

Con la finalidad de dar cuenta de la activación de las garantías jurisdiccionales en el ámbito nacional, se realizó una petición de información al Consejo de la Judicatura (CJ) para acceder a la información detallada que permita analizar la situación. Sin embargo, no se obtuvo la respuesta esperada debido a que dicha entidad notificó a cada provincia sobre el requerimiento y las respuestas fueron enviadas en forma diferente. Así, en unos casos, el envío fue efectuado por cada judicatura, y, en otros, se recibió un consolidado; también el contenido fue diferencial: solo cuatro provincias enviaron la información requerida y las restantes lo hicieron en forma parcial, dificultando la consolidación nacional. La información procesada fue la recibida entre noviembre de 2012 y enero de 2013 (ver cuadro 1).

Como las respuestas de las provincias de Esmeraldas, Guayas y Sucumbíos no son representativas (una judicatura en cada una), no fueron consideradas para el procesamiento, por lo que la información analizada corresponde a 12 provincias cuyas respuestas alcanzan el 86% de sus judicaturas; esto constituye una muestra altamente representativa, recalando que el contenido permite ver aspectos generales. Cabe resaltar que las 12 provincias son medianas y pequeñas, ocho de la Sierra, tres de la Amazonía y una de la Costa; por tanto, la información aporta a comprender la situación en este tipo de provincias.

Cuadros

Cuadro 1
Características de las respuestas

No.	Provincia	Judicaturas	Judicaturas responden	%	Forma de envío de la información	Tipo de información
1	Azuay	55	47	85	Cada judicatura	Parcial
2	Bolívar	25	25	100	Consolidado con detalle de judicaturas	Parcial
3	Cañar	33	33	100	Consolidado	Parcial
4	Carchi	21	21	100	Consolidado	Completa
5	Chimborazo	34	23	68	Cada judicatura	Parcial
6	Cotopaxi	25	23	92	Cada judicatura	Parcial
7	Esmeraldas	26	1	4	Cada judicatura	Parcial
8	Guayas	147	1	1	Cada judicatura	Parcial
9	Imbabura	30	30	100	Consolidado	Parcial
10	Loja	49	29	59	Cada judicatura	Parcial
11	Orellana	10	10	100	Consolidado	Parcial
12	Pastaza	10	7	70	Consolidado con detalle de judicaturas	Parcial
13	Santa Elena	9	9	100	Consolidado	Parcial
14	Sucumbíos	13	1	8	Cada judicatura	Parcial
15	Zamora Chinchipe	14	11	79	Cada judicatura	Parcial
	Total	501	271	54		

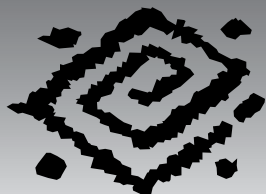
* El período comprende enero-septiembre de 2012.
Fuente: Respuesta a petición de información, FGE, 2012.
Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, 2013.

Cuadro 2
Carga procesal garantías por provincias, 2012

No.	Provincia	Garantías	Judicaturas	Promedio al año
1	Azuay	405	55	7,4
2	Bolívar	39	25	1,6
3	Cañar	80	33	2,4
4	Carchi	18	21	0,9
5	Chimborazo	97	34	2,9
6	Cotopaxi	38	25	1,5
7	Imbabura	293	30	9,8
8	Loja	380	49	7,8
9	Orellana	56	10	5,6
10	Pastaza	60	10	6,0
11	Santa Elena	170	9	18,9
12	Zamora Chinchipe	42	14	3,0
	Total	1678	315	5,3

Fuente: Respuestas de 12 provincias a petición de información, CJ, 2012-2013.
Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Anexo 2



Otras respuestas a peticiones de información

Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género

La Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, para el período noviembre/2011-octubre/2012, reporta que realizó observancia a 11 casos sobre el cumplimiento de los derechos de las mujeres; de estos seis son relacionados a violencia sexual, física, psicológica y patrimonial; dos a igualdad ante la ley: uno sobre falta de debido proceso; uno sobre vulneración del derecho de paridad; y el restante sobre cancelación de remuneraciones. Otros temas tratados fueron el cierre de las clínicas de rehabilitación y el registro de apellidos en el nacimiento.

Sobre el proceso de transversalización del enfoque de género se indica que hay avances en la incorporación de este principio en: el Sistema Nacional de Planificación; en el Presupuesto General del Estado para lo cual el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos trabajó en el catálogo de Orientación de Gastos, Políticas de Igualdad Género, implementado para el ejercicio fiscal 2012; en el proceso electoral 2013; y en el alineamiento de la cooperación internacional. No refiere aspectos de evaluación sobre dichos avances.

Otro tema reportado es la construcción participativa de la Agenda Nacional para la Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir de las Mujeres y personas de diversa condición sexo-genérica del Ecuador, 2013-2017, que contó con una prueba piloto en la provincia de Loja.

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia envía información sobre los alcances institucionales por períodos:

Cuadro 1
CNNA organismos y presupuesto 2004-2012

Organismos del Sistema		2004-2008	2009-2012
CNNA	Conformados	141	217
	En proceso	73	4
	Secretarios Ejecutivos (titular)	-	160
	Presupuesto	\$ 3,425.996	\$ 12,387.360
JCPD	Conformados	27	162
	En proceso	53	13
CCCNA	Conformados	35	123
	En proceso	30	61
DC	Organizadas	115	767
	Proceso	-	616

Fuente y elaboración: CNNA, 2012.

También señala que realizaron 196 acciones relacionadas a la política pública y 1.267 coordinaciones interinstitucionales, especialmente con Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Vicepresidencia de la República. Bono Joaquín Gallegos Lara

La información enviada sobre la cobertura del Bono José Joaquín Gallegos Lara fue procesada considerando la provincia y número de hombres y mujeres beneficiados. El detalle es el siguiente:

Cuadro 2
Personas beneficiarias del Bono Joaquín Gallegos Lara, 2012

No.-	Provincia	Hombres	Mujeres	Total	Porcentaje
1	Azuay	247	235	482	3,21
2	Bolívar	213	131	344	2,29
3	Cañar	266	257	523	3,48
4	Carchi	124	125	249	1,66
5	Chimborazo	226	220	446	2,97
6	Cotopaxi	177	186	363	2,41
7	El Oro	687	529	1.216	8,09
8	Esmeraldas	301	222	523	3,48
9	Galápagos	3	4	7	0,05
10	Guayas	1.267	1.056	2.323	15,45
11	Imbabura	159	139	298	1,98
12	Loja	418	395	813	5,41
13	Los Ríos	600	472	1.072	7,13
14	Manabí	705	680	1.385	9,21
15	Morona Santiago	164	110	274	1,82
16	Napo	118	126	244	1,62
17	Orellana	152	106	258	1,72
18	Pastaza	141	134	275	1,83
19	Pichincha	1.286	1.004	2.290	15,23
20	Santa Elena	212	175	387	2,57
21	Santo Domingo	321	284	605	4,02
22	Sucumbíos	130	97	227	1,51
23	Tungurahua	147	107	254	1,69
24	Zamora Chimchipe	88	92	180	1,20
Totales				15.038	100,00

Fuente: Registro de beneficiarios, Vicepresidencia de la República del Ecuador.

Nota: la información tiene corte a octubre de 2012.

Elaboración: PADH, 2013.

Información de la Defensoría del Pueblo del Ecuador

Anexo 3



Informe de gestión 2012

Cuadro 1
Total de casos receptados por tipo en 2012

Tipo de casos	No.	Porcentaje
Casos atendidos por competencia	14.667	35,34
Casos asesorados y remitidos	26.836	64,66
Total casos receptados	41.503	100,00

Fuente: Informe de labores 2012, DPE, p. 20.
Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Cuadro 2
Casos por competencias atendidos por ejes de trabajo

Eje	Casos ingresados	Casos resueltos	Porcentaje
1. Lucha contra la violencia y discriminación (especialmente de grupos atención prioritaria)	695	457	65,76
2. Derecho a la integridad personal, lucha contra la tortura, los tratos crueles inhumanos y degradantes (el Informe indica 5 visitas a centros de privación de libertad y 38 a CDP)	0	0	
3. Control de servicios públicos domiciliarios	1.677	1.047	62,43
Total	2.372	1.504	63,41

Fuente: Informe de labores 2012, DPE, p. 30, 41 y 44.
Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Cuadro 3
Otros casos por competencia atendidos

Derechos	Casos ingresados	Casos resueltos	Porcentaje
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria: Personas consumidoras	6.901	4.928	71,41
Derechos del buen vivir: Trabajo y seguridad social	679	404	59,50
Derechos del buen vivir: Salud	161	90	55,90
Derechos del buen vivir: Hábitat y vivienda	174	102	58,62
Derechos del buen vivir: Educación	412	213	51,70
Derechos del buen vivir: Cultura y ciencia	0	0	0
Derechos del buen vivir: Comunicación e información	177	58	32,77
Derechos del buen vivir: Ambiente sano	83	30	36,14
Derechos del buen vivir: Alimentación	5	1	20,00
Derechos de protección: Debido proceso	1.991	936	47,01
Derechos de participación: Ser consultados	5	4	80,00
Derechos de participación: Participación de los asuntos de interés público	6	1	16,67
Derechos de participación: Elegir y ser elegidos	3	1	33,33
Derechos de libertad: Vida digna	67	51	76,12
Derechos de libertad: Tomar decisiones libres, informadas voluntarias y responsables sobre la sexualidad, su vida	3	0	0
Derechos de libertad: Propiedad	208	128	61,54
Derechos de libertad: Opinar y expresar el pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones	8	5	62,50
Derechos de libertad: Inviolabilidad de la vida	5	0	0
Derechos de libertad: Inviolabilidad de domicilio	12	7	58,33
Derechos de libertad: Intimidad personal y familiar	2	1	50,00
Derechos de libertad: Integridad personal	281	180	64,06
Derechos de libertad: Honor y buen nombre	12	5	41,67
Derechos de libertad: Dirigir quejas y peticiones	418	96	22,97
Derechos de libertad: Desarrollar actividades económicas	4	2	50,00
Derechos de libertad: Contratación	9	5	55,56
Derechos de libertad: Asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria	12	4	33,33
Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades	9	5	55,56
Derechos de la naturaleza	49	9	18,37
Total	11.696	7.266	62,12

Fuente: Informe de labores 2012, DPE, p. 30, 41 y 44.

Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Cuadro 4
Otros casos por competencia atendidos
en relación a la información pública

Derecho	Casos ingresados	Casos resueltos	Porcentaje
Acceso a la información pública (buen vivir)	599	424	70,78

Fuente: Informe de labores 2012, DPE, p. 57.

Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

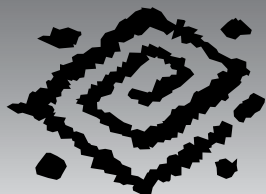
Cuadro 5
Síntesis de casos por competencia ingresados
y resueltos por bloques de derechos constitucionales 2012

Derechos	Casos ingresados	Porcentaje	Casos resueltos	Porcentaje
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria	9.273	63,22	6.432	69,36
Derechos del buen vivir	2.290	15,61	1.322	57,73
Derechos de protección: Debido proceso	1.991	13,57	936	47,01
Derechos de libertad	1.041	7,10	484	46,49
Derechos de la naturaleza	49	0,33	9	18,37
Derechos de participación	14	0,10	6	42,86
Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades	9	0,06	5	55,56
Total	14.667	100	9.194	62,68

Fuente: Informe de labores 2012, DPE, p. 20, 30, 41, 44, 48-51 y 57.

Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Anexo 4



Producción en derechos humanos 2012

Libros

Ministerio Coordinador de Patrimonio, *Viviendo la justicia. Pluralismo jurídico y justicia indígena en Ecuador*, Quito, Manthra Editores / Programa de Desarrollo y Diversidad Cultural (Fondo ODM España) / Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Ecuador (OACDH), 2012, en <http://www.oacdh.ecuador.ec/index.php/documentos-de-consulta/publicaciones/file/1-viviendo-la-justicia>.

Larrea, Carlos, coord., *Petróleo, sustentabilidad y desarrollo en la Amazonía centro-sur*, Quito, UASB-E / Fundación Pachamama, 2012.

Pásara, Luis, edit., *El uso de los instrumentos internacionales de derechos humanos en la administración de justicia*, Quito, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos / OACDH, 2012, en <http://www.oacdh.ecuador.ec/index.php/documentos-de-consulta/publicaciones/file/12-el-uso-de-los-instrumentos-internacionales-de-derechos-humanos-en-la-administracion-de-la-justicia>.

Red Jurídica Amazónica, *El derecho al territorio y al autogobierno territorial de los pueblos indígenas de la región amazónica de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela*, Quito, Fundación Pachamama, 2012.

Estudios específicos

Arcentales, Javier, “Derecho al trabajo de las personas con necesidad de protección internacional en Ecuador”, Quito, UASB-E / Fundación Ambiente y Sociedad (FAS) / Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 2012, en <http://www.uasb.edu.ec/padh.php>.

Arcentales, Javier, Susy Garbay y Silvana Sánchez, “Garantías Jurisdiccionales y Migraciones Internacionales en Quito”, Quito, UASB-E / FAS / ACNUR, 2012, en <http://www.uasb.edu.ec/padh.php>.

Minda, Pablo, “Investigación del estado actual de la tenencia de las tierras de las comunidades indígenas y afro descendientes en el norte de Esmeraldas”, Quito, Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio / ACNUR, mimeo. 2012.

Santacruz Benavides, Lucy, Expectativas de Futuro de la Población Refugiada en las ciudades de Ibarra, Lago Agrio y Esmeraldas, Quito, FLACSO / ACNUR, 2012, en prensa.

Informes temáticos

Amnistía Internacional, “*Para que nadie reclame nada*”. ¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?, Londres, Amnistía Internacional-Secretariado Internacional, 2012, en <http://www.amnistiainternacional.org/publicacion-213>.

Arcentales, Javier, y Susy Garbay, “En el país de la ciudadanía universal. Informe sobre movilidad humana. Ecuador 2011”, Quito, Coalición por las Migraciones y el Refugio, 2012, en <http://movilidadhumana.wordpress.com/category/informe-anual-movilidad-humana/>.

Astaíza, Mery, “El pueblo afrodescendiente en el Ecuador”, Quito, Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE), 2012.

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), “Graves violaciones a los derechos humanos en 2012”, Quito, 2012, en http://www.cedhu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=189:2012-graves-violaciones-a-los-derechos-humanos&catid=1:noticiasprincipal&Itemid=10.

CEDHU, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Clínica Ambiental, *Informe psicosocial y de derechos humanos caso 10 de Luluncoto. Operativo Sol Rojo*, Quito, CEDHU / INREDH / Clínica Ambiental, 2012, en http://www.cedhu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=187:ocaso-de-la-justicia-informe-psicosocial-y-de-derechos-humanos&catid=1:noticiasprincipal&Itemid=10.

Garzón Real, Baltasar, *et al.*, “Informe Final de la Veeduría Internacional a la Reforma de la Justicia en el Ecuador”, Quito, 13 de diciembre de 2012, en Giro Ciudadano Consultores, *El derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación. Patrones y prácticas culturales discriminatorias en los medios de comunicación: producción nacional y publicidad discriminatoria*, Quito, DPE, 2012.

Hidalgo, Gabriela, *El servicio eléctrico: acceso, calidad y cobertura en las provincias de Orellana y Sucumbíos*, Quito, DPE, 2012.

Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, *Estado de los derechos de la niñez y adolescencia en Ecuador 1990-2011. A los 21 años de la Convención de los Derechos del Niño*, Quito, Imprenta Nación, 2012, en <<http://www.odna.org.ec/ODNA-PDF/Edna2011.pdf>>.

Informes sobre cumplimiento de tratados ante la Organización de Naciones Unidas

ONU, “Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos Ecuador”, Ginebra, Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, 8 de marzo de 2012, en <<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/117/31/PDF/G1211731.pdf?OpenElement>>.

ONU, “Informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención. Informes periódicos 20 a 22 que debían presentarse en 2012. Ecuador”, (CERD/C/ECU/20-22), Ginebra, 17 de abril de 2012, en <<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/419/22/PDF/G1241922.pdf?OpenElement>>.

ONU, “Documento básico que forma parte integrante de los informes de los Estados partes. Ecuador. Adición. Actualización de datos del documento básico común del Ecuador (HRI/CORE/ECU/2009)”, Ginebra, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, HRI/CORE/ECU/2009/Add.1, 10 de mayo de 2012, en <<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/431/58/PDF/G1143158.pdf?OpenElement>>.

ONU, “Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal-Ecuador”, Ginebra, Consejo de Derechos Humanos, (A/HRC/21/4), 5 de julio de 2012, en <<http://www.oacdhecuador.ec/images/pdf/informegrupo.pdf>>.

ONU, “Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el art. 9 de la Convención. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial Ecuador”, Ginebra, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, (CERD/C/ECU/CO/20-22), 31 de agosto de 2012, en <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.ECU.CO.20-22_sp.pdf>.

ONU, “Observaciones finales del Comité sobre el tercer informe del Ecuador, aprobada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su cuadragésimo noveno período de sesiones (14 al 30 de noviembre de 2012)”, Ginebra, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (E/C/12/ECU/CO/3), 30 de noviembre de 2012, en <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/E.C.12.ECU.CO.3_sp.pdf>.

ONU, “Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención. Informes periódicos octavo y noveno que los Estados partes debían presentar en diciembre de 2012. Ecuador”, Ginebra, Comité para la eliminación de la discriminación a la mujer, (CEDAW/C/ECU/8-9), 13 de diciembre de 2012, en http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW%20C%20ECU%208-9_sp.pdf.

Informes paralelos sobre cumplimiento ONU

CEDHU, “Informe sobre el estado de la educación en Ecuador”, Informe sombra para el Relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, Quito, 2012, en http://www.cedhu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=197:informacion-sobre-el-estado-de-la-educacion-en-el-ecuador&catid=31:desc-trabajo-educacion-salud-y-vivienda&Itemid=7.

CEDHU, “Informe sobre la situación de los derechos económicos sociales y culturales en Ecuador”, informe presentado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CDESC), Quito, 2012, en http://cedhu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=170:informe-alternativo-sobre-desc-en-el-ecuador-al-comite-de-naciones-unidas&catid=31:desc-trabajo-educacion-salud-y-vivienda&Itemid=7.

CEDHU y Federación Internacional de Derechos Humanos, “Intervención minera a gran escala en Ecuador y vulneración de derechos humanos. Caso Corrientes Resources”, informe presentado ante el Comité DESC, Quito, 2012, en http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/FIDH_Ecuador_CESCR49_sp.pdf.

Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios (CAPAJ), “Informe no gubernamental alternativo presentado ante el Comité para la eliminación de la discriminación racial”, Ginebra, CAPAJ, Consejo Indio Exterior, Instituto de pueblos ecuatoriales, Red de información y acción amazónica, Parlamento del Pueblo Qollanaymara y otros defensores de derechos humanos, 20 de mayo de 2012, en http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/CAPAJ_Ecuador_CERD81.pdf.

Centro de Derechos Reproductivos, “Supplementary information on Ecuador, scheduled for review by the U.N. Comission on Economic, Social and Cultural rights during its 49th Session (November 2012)”, en <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/CRREcuador49.pdf>.

Coalición por las Migraciones y el Refugio, “Informe alternativo Convención Eliminación Discriminación Racial”, presentado al Comité para la Eliminación de Todas las Formas Discriminación Racial, en http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/CMR_Ecuador81_sp.pdf.

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), “Informe alternativo presentado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), ante el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación racial-CERD 2012”, en <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds81.htm>.

FIAN *et al.*, “Continúa criminalización de defensores de derechos humanos en Ecuador: Páramo Quimsacocha”, Informe remitido al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, Ginebra 2012, en http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/FIAN_OBS_PIDHDD_Ecuador49_sp.pdf.

Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, *et al.*, “Alternative Report on the situation of sexual and reproductive rights and health of women in Ecuador, for the 49th Session of Committee on Economic, Social and Cultural Rights, November 12-30, Geneva, Switzerland”, Ginebra 2012, en http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/Report_IPPF_CEPAM_AMUME_OEML_Ecuador.pdf.

Fundación Pachamama, “Informe alternativo a ser presentado al Comité para la eliminación de la discriminación racial (2012)”, Quito, julio 2012, en http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/FundacionPachamama_Ecuador81.pdf.

INREDH, “Informe sombra derechos económicos, sociales y culturales (DESC) 2012”, presentado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Ginebra, 23 de agosto de 2012, en http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/FRADH_Ecuador_CESCR49.pdf.

Sentencias, informes y audiencias Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), “Pueblo Indígena kichwa de Sarayaku *vs.* Ecuador”, Sentencia de 27 de junio de 2012, Fondo y Reparaciones, en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_35_ing.doc.

Corte IDH, “Caso Palma Mendoza y otros *vs.* Ecuador. Excepción preliminar y fondo”, Sentencia de 3 de septiembre de 2012, Serie C, 247, en <http://www.corteidh.or.cr/index.php/jurisprudencia#>.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDHI), Informe 14/12, Petición 670-06, Admisibilidad, Carlos Andrés Rodríguez Cárdenas y Familia, Ecuador, 20 de marzo de 2012, en <http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp>.

CIDH, Informe 15/12, Petición 786-02, Admisibilidad, Ester Avigail Fajardo y Claudio Alfonso Naser Leal, Ecuador, 20 de marzo de 2012, en <http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp>.

CIDH, Informe 65/12, Petición 1671-02, Admisibilidad, Alejandro Peñafiel Salgado, Ecuador, 29 de marzo de 2012, en <http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp>.

CIDH, “Informe 75/11, Caso 12.683, Fondo, Melba del Carmen Suárez Peralta, Ecuador, 20 de julio de 2011, remitido a la Corte IDH el 26 de enero de 2012, en <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12.683Fondoesp.pdf.pdf>.

CIDH, Informe 84/12, Petición 677-04, Admisibilidad, Luis Fernando García García y familia, Ecuador, 8 de noviembre de 2012, en <http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp>.

CIDH, Informe 85/12, Petición 381-03, Admisibilidad, S. y otras, Ecuador, 8 de noviembre de 2012, en <http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp>.

CIDH, Informe 86/12, Petición 1201-07, Admisibilidad, César Lorenzo Cedeño Muñoz y otros, Ecuador, 8 de noviembre de 2012, en <http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp>.

CIDH, “Situación de defensores de derechos humanos y defensores del medio ambiente en Ecuador”, Audiencia temática, 146 períodos de sesiones, 2 de noviembre de 2012, participantes: Estado del Ecuador, Fundación Pachamama, INREDH y Fundación Centro Lianas, en <http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=30>.

CIDH, “Situación de los solicitantes de refugio y refugiados en Ecuador”, Audiencia temática, 146 períodos de sesiones, 2 de noviembre de 2012, participantes: Estado del Ecuador, Universidad San Francisco de Quito, en <http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=20>.

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, “Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador, Sentencia de 6 de mayo de 2008, (*Excepción Preliminar y Fondo*)”, publicada en RO 623, Segundo Suplemento, 20 de enero de 2012.

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, “Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pueblo Indígena kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Resumen Oficial emitido por la Corte Interamericana. Sentencia de 27 de junio de 2012 (*Fondo y reparaciones*)”, publicada en ROS 770, de 20 de agosto de 2012.

Ministerio de Defensa Nacional, “Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Mejía Idrovo vs. Ecuador. Resumen Oficial emitido por la Corte Interamericana de la sentencia de 5 de julio de 2011 (*Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas*)”, publicada en RO 611, de 5 de enero de 2012.

Herramientas para el trabajo en derechos humanos

Almeida Unda, Alexandra, *Compendio de los casos más relevantes en relación al derecho a la igualdad y no discriminación, tramitados por la Defensoría del Pueblo en el período 2009 al 2012*, Quito, DPE, 2012.

Aguilar, Yolanda, “Sanar nuestros cuerpos, reconstruir nuestra memoria” *Memorias de un proceso para sanar heridas de mujeres colombianas sobrevivientes de violencia sexual y otras violencias, refugiadas en Ecuador, 2009-2011*, Quito, Asylum Access Ecuador y Consejo Noruego para Refugiados, 2012.

Asylum Access Ecuador, *Justicia integral: mujeres refugiadas y violencia basada en género, Cuadernos de trabajo, Serie, Derechos de las personas refugiadas*, Quito, Asylum Access Ecuador y Consejo Noruego para Refugiados, 2012.

Contrato Social por la Educación, *Educación para la vida, la creatividad, la diversidad y la democracia. Agenda ciudadana por la educación. 2013-2021*, Quito, Contrato Social por la Educación, Fondo Regional de la Sociedad Civil por la Educación, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Plan Be a part of it, UNICEF, 2012.

DPE, *Criterios de admisibilidad de casos de competencia de la Defensoría del Pueblo*, Quito, Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza, 2012.

DPE, *Directrices vigilancia del debido proceso*, Quito, Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza, 2012.

DPE, *Guía de información para el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP*, Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza Coordinación Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Quito, 2012.

DPE, *Guía referencial del proceso de rendición de cuentas / Guía para el cumplimiento de la presentación del informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública (LOTAIP)*, Quito, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y DPE, 2012.

Gal, Amandine, *Escrito en el cuerpo: rompiendo el silencio y construyendo justicia integral. Memoria mujeres colombianas sobreviviendo a experiencias de violencias sexuales y buscando o en situación de refugio en Ecuador*, Quito, Asylum Access y Consejo Noruego para Refugiados, 2012.

OACDH, *Indicadores de derechos humanos: una guía para su medida e implementación*, Quito, OACDH, 2012, en http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf.

Pazmiño, Andrés, *Guía de atención de casos de discriminación*, Quito, DPE, 2012.

Varela, Rodrigo, *et al.*, *Manual de Capacitación Ambiental para las Juntas Parroquiales*, Quito, Agencia Catalana de Coperació al Desenvolupament / Red de líderes comunitarios Angel Shingre / INREDH, 2012, en http://www.inredh.org/archivos/pdf/manual_juntas_parroquiales.pdf.

Producciones digitales y/o audiovisuales

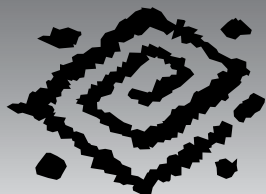
Colectivo Pro Derechos Humanos, PRODH y Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, CPJ, “Rumbo a Cairo +20”, Campaña de cuñas radiales, Quito, 2012, en <http://www.prodh.org/Contenido/Recursos/producciones/cairo20.html>.

INREDH, CEDHU y Clínica Ambiental, “Campaña Yo también soy “Sol Rojo” 10 presos de Luluncoto”, Quito, INREDH, 2012, en <https://www.youtube.com/watch?v=s1tk2dtnM64>.

PRODH y CPJ, “Placer con cordura”, Video clip, Quito, 2012, en <http://soundcloud.com/productotra-ecuador/placer-con-cordura/s-xkKFi>.

Luna, Ricardo, director, “No nos quitarán el río”, Chérrez Cecilia y David Reyes, producción, Quito, Red de Ecologistas Populares, REDLAR y Acción Ecológica 2012, en <http://www.accionecologica.org/>.

Anexo 5



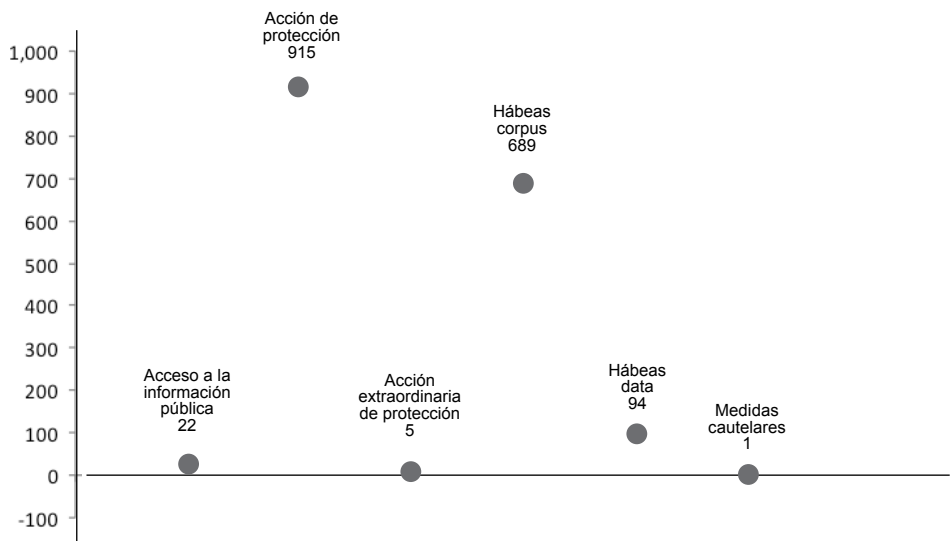
Información de la Función Judicial de Pichincha sobre garantías jurisdiccionales

Cuadro 1
Ingresos por tipo de garantías,
Pichincha, enero-octubre de 2011-2012

Garantía	2011	Porcentaje	2012	Porcentaje	Diferencia	Porcentaje
Acceso a la información pública	20	0,96	22	1,27	2	10,00
Acción de protección	1.293	62,34	915	53,01	-378	29,23
Acción extraordinaria de protección	5	0,24	5	0,29	0	0,00
Acción por incumplimiento	1	0,05	0	0,00	-1	100,00
Hábeas corpus	663	31,97	689	39,92	26	3,92
Hábeas data	90	4,34	94	5,45	4	4,44
Incumplimiento de medidas de amparo	1	0,05	0	0,00	-1	100,00
Medidas cautelares	1	0,05	1	0,06	0	0,00
Totales	2.074	100,00	1.726	100,00	348	16,78

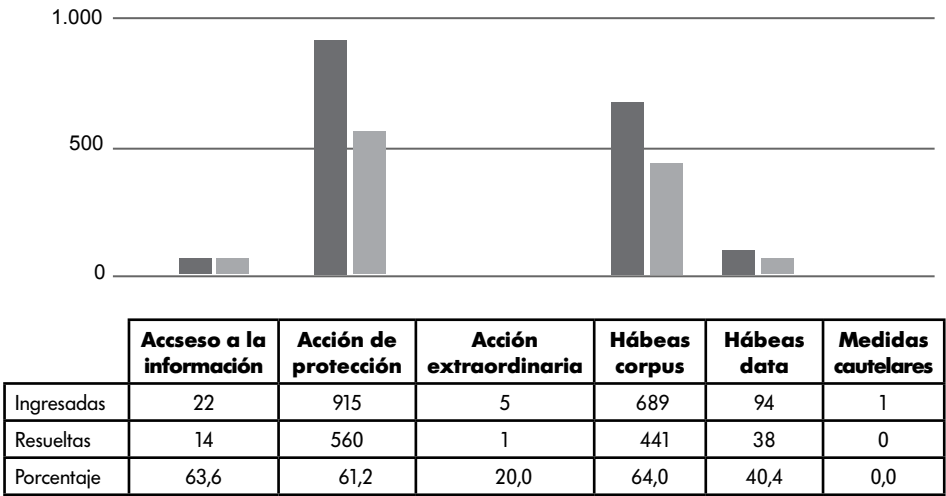
Fuente: Base de datos Función Judicial de Pichincha, enero-octubre de 2012.
Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Gráfico 1
Garantías interpuestas por tipo, Pichincha, 2012



Fuente: Base de datos Función Judicial de Pichincha, enero-octubre de 2012.
Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Gráfico 2
Causas ingresadas y resueltas por tipo de garantía,
Pichincha, enero-octubre de 2012



Fuente: Base de datos Función Judicial de Pichincha, enero-octubre de 2012.
Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Cuadro 2
Garantías jurisdiccionales ingresadas y resueltas por mes,
Pichincha, enero-octubre de 2012

Mes	Garantías ingresadas	Garantías resueltas	Porcentaje
Enero	181	38	20,99
Febrero	149	73	48,99
Marzo	208	117	56,25
Abril	164	102	62,20
Mayo	206	110	53,40
Junio	160	134	83,75
Julio	171	137	80,12
Agosto	172	132	76,74
Septiembre	189	112	59,26
Octubre	126	99	78,57
Total	1.726	1.054	61,07

Fuente: Base de datos Función Judicial de Pichincha, enero-octubre de 2012.

Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Cuadro 3
Procesos de acción de protección ingresados y resueltos por mes,
Pichincha, enero-octubre de 2012

Mes	Procesos ingresados	Procesos resueltos	Porcentaje	Procesos rezagados
Enero	100	10	10,00	90
Febrero	98	48	48,98	50
Marzo	108	64	59,26	44
Abril	98	58	59,18	40
Mayo	114	51	44,74	63
Junio	84	75	89,29	9
Julio	86	72	83,72	14
Agosto	79	74	93,67	5
Septiembre	83	57	68,67	26
Octubre	65	51	78,46	14
Total	915	560	61,20	355

Fuente: Base de datos Función Judicial de Pichincha, enero-octubre de 2012.

Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

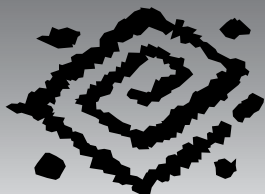
Cuadro 4
Procesos de hábeas corpus ingresados y resueltos por mes,
Pichincha, enero-octubre de 2012

Mes	Procesos ingresados	Procesos resueltos	Porcentaje	Procesos rezagados
Enero	64	28	43,75	36
Febrero	39	23	58,97	16
Marzo	78	49	62,82	29
Abril	55	37	67,27	18
Mayo	84	53	63,10	31
Junio	69	51	73,91	18
Julio	75	58	77,33	17
Agosto	83	53	63,86	30
Septiembre	92	45	48,91	47
Octubre	50	44	88,00	6
Total	689	441	64,01	248

Fuente: Base de datos Función Judicial de Pichincha, enero-octubre de 2012.

Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Anexo 6



Síntesis de indicadores de metas por objetivos PNBV 2012

No.	Meta al 2013 / Indicador	Variación en relación a 2011
Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad		
1	M. Reducir la brecha de intermediación en 20% I. Índice de brechas de intermediación (VIRE-I): promedio general de brechas de precios para secciones 0, 2 y 3 de la clasificación central de productos (CPP) 98	Aumentó el índice en 1,60 puntos: 2011: 109,45 2012: 111,05
2	M. Aumentar a 71% los hogares con vivienda propia I. Porcentaje de hogares cuya vivienda es propia	Aumentó el % en 1,39 puntos: 2011: 67,80% 2012: 69,19%
3	M. Reducir a la cuarta parte el % de niños y niñas que trabajan y no estudian I. Porcentaje de niños y niñas de 8 a 15 años que trabajan y no estudian	Disminuyó el % en 1,12 puntos: 2011: 1,55% 2012: 1,43%
4	M. Alcanzar el 40% de personas con Seguro Social I. % de personas con Seguro de salud público	Aumentó el % en 2,75 puntos: 2011: 32,37% 2012: 35,12%
5	M. Incrementar a 66,5% la matrícula de adolescentes en bachillerato I. Tasa neta de matrícula en bachillerato	Aumentó el % en 1,24 puntos: 2011: 62,52% 2012: 63,76%
6	M. Alcanzar el 98% de matrícula en educación básica I. Tasa neta de matrícula en educación básica	Disminuyó el % en 0,37 puntos: 2011: 95,44% 2012: 95,07%
Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía		
7	M. Aumentar 969 investigadores dedicados a I+D+I I. Número de investigadores dedicados a I+D+I	Aumentaron 329 investigadores: 2011: 2.066 2012: 2.395

8	M. Alcanzar 45 participantes en las Olimpiadas I. Número de participantes en olimpiadas	Aumentaron 12 participantes en el período: 2008: 24 2012: 36
9	M. Reducir al 10% el analfabetismo funcional I. % de analfabetismo funcional	Disminuyó el % 0,26 puntos: 2011: 14,67% 2012: 14,41%
10	M. Triplicar el % de hogares con acceso a internet I. % de hogares con acceso a internet	Aumentó el % 6,01 puntos: 2011: 16,68% 2012: 22,49%
11	M. Alcanzar el 50% de hogares con acceso a teléfono fijo I. % de hogares con acceso a teléfono fijo	Aumentó el % 2,45 puntos: 2011: 39,92% 2012: 42,37%
12	I. Tasa neta de matrícula en educación superior	Disminuyó el % 1,53 puntos: 2011: 30,10% 2012: 28,57%
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población		
13	M. Disminuir a 35% el % de hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas I. % de hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas	Disminuyó el % 3,37 puntos: 2011: 37,95% 2012: 34,58%
14	M. Disminuir en un 33% el % de hogares que viven en hacinamiento I. % de hogares que viven en hacinamiento.	Disminuyó el % 2,04 puntos: 2011: 11,24% 2012: 9,20%
15	M. Alcanzar el 80% de las viviendas con acceso a servicios de saneamiento I. % de viviendas con acceso a servicios de saneamiento	Aumentó el % 1,86 puntos: 2011: 65,71% 2012: 67,57%
Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable		
16	M. Aumentar en 1.091 MW la capacidad instalada I. Capacidad instalada en el Sistema Nacional Interconectado (MW)	Aumentó 277,7 MW: 2011: 4.840,5 MW 2012: 5.118,2 MW
17	M. Alcanzar el 6% de participación de energías alternativas en el total de la capacidad instalada I. Participación de energías alternativas en el total de la capacidad instalada	Disminuyó el % 0,11 puntos: 2011: 1,98% 2012: 1,87%
18	M. Alcanzar el 97% las viviendas con servicio eléctrico I. % de viviendas con servicio eléctrico	Aumentó el % 0,21 puntos: 2011: 95,55% 2012: 95,76%

Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana		
19	M. Reducir la pobreza por NBI en la frontera centro en un 25% en el área urbana y en un 50% en el área rural I. Pobreza por NBI en frontera centro	Disminuyó el % 14,7 puntos: 2011: 116,18 2012: 101,48
20	M. Reducir la pobreza por NBI en la frontera norte en un 25% en el área urbana y en un 50% en el área rural I. Pobreza por NBI en frontera norte	Disminuyó el % 5,81 puntos: 2011: 54,78% 2012: 48,97%
21	M. Reducir la pobreza por NBI en la frontera sur en un 20% en el área urbana y en un 50% en el área rural I. Pobreza por NBI en frontera sur	Disminuyó el % 14,82 puntos: 2011: 86,64% 2012: 71,82%
22	M. Incrementar a 0,95 la razón de exportaciones industriales sobre las exportaciones de productos primarios no petroleros I. Razón de exportaciones industriales sobre exportaciones de productos primarios no petroleros	Aumentó la razón en 0,08 puntos: 2011: 0,69 2012: 0,77
Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas		
23	M. Aumentar a 1,57 millones el número de visitantes extranjeros I. Número de visitantes extranjeros	Aumentaron 130.916 visitantes: 2011: 1'141.037 2012: 1'271.953
24	M. Disminuir en un 27% el % de personas que reciben un salario menor al mínimo vital I. % de personas que reciben salario menor al mínimo vital	Disminuyó el % 4,01 puntos: 2011: 42,40% 2012: 38,39%
25	M. Tender a 1 en la igualdad de horas dedicadas al trabajo reproductivo I. Razón de las horas dedicadas al cuidado de hijos entre hombres y mujeres	Aumentó el indicador en 0,29 puntos: 2011: 1,94 2012: 2,23
26	M. Tender a 1 en la igualdad de horas dedicadas al trabajo reproductivo I. Razón de las horas dedicadas al trabajo doméstico entre hombres y mujeres	Aumentó el indicador en 0,2 puntos: 2011: 2,36 2012: 2,56
27	M. Tender a 1 en la igualdad de horas dedicadas al trabajo reproductivo I. Razón de las horas dedicadas al trabajo voluntario entre hombres y mujeres	Disminuyó el indicador en 0,3 puntos: 2011: 0,74 (a jun.) 2012: 0,71
28	M. Revertir la tendencia creciente del desempleo juvenil y reducirlo en un 24% I. Tasa de desempleo para personas entre 16 Y 29 años	Aumentó el % 0,7 puntos: 2011: 9,40% 2012: 9,47%
29	M. Disminuir en 10 puntos el subempleo bruto nacional al 2013 I. Tasa de subempleo bruto nacional	Disminuyó el % 3,29 puntos: 2011: 54,66% 2012: 51,37%

30	I. Tasa neta de matrícula en educación superior	Disminuyó el % 1,53 puntos: 2011: 30,10% 2012: 28,57%
Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad		
31	M. Aumentar al 80% de la población indígena que habla alguna lengua nativa I. % de la población autodefinida como indígena que habla alguna lengua nativa	Aumentó el % 2,01 puntos: 2011: 71,40% 2012: 73,41%
Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política		
32	M. Alcanzar el 15% de participación de jóvenes en cargos de elección popular I. % de jóvenes en cargos de elección popular	Aumentó el % 6,29 puntos entre elecciones: 2007: 7,70% 2009: 13,99%
33	M. Alcanzar el 30% de participación de las mujeres en cargos de elección popular I. % de mujeres en cargos de elección popular	Disminuyó 1% 11,3 puntos entre elecciones: 2007: 34,62% 2009: 23,32%
Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible		
34	M. Alcanzar el 15,1% de participación del turismo en las exportaciones de bienes y servicios no petroleros I. Participación de los ingresos por concepto de turismo respecto a exportaciones de bienes y servicios no petroleros	Aumentó el % 1,4 puntos: 2011: 9,06% Jun. 2012: 10,49%
35	M. Alcanzar una producción de derivados de hidrocarburos de 71 miles de barriles I. Producción nacional de derivados de hidrocarburos	Aumentó la producción en 1.593: 2011: 69.800 2012: 71.393
36	M. Obtener un crecimiento de 5% del PIB industrial no petrolero I. Tasa de variación del PIB industrial no petrolero	Se mantiene igual 2011: 0,07 Mar. 2012: 0,07
37	M. Aumentar en 110% el volumen de montos de la banca pública I. Volumen de crédito (montos en USD)	Se establecería el % de aumento al conocerse el volumen a dic. 2012: 2011: 146,086, 251 Jul. 2012: 125.408.581
38	M. Aumentar en 69% el volumen de operaciones de la banca pública I. Volumen de crédito (número de operaciones)	Se establecería el % de aumento al conocerse el volumen a dic. 2012: 2011: 9.487 Jul. 2012: 25.536
39	M. Incrementar la producción petrolera (estatal y privada) a 500,5 miles de barriles por día I. Volumen de producción petrolera (estatal y privada) en miles de barriles diarios	Aumentó en la producción 3,98: 2011: 499,61 2012: 503,59

Objetivo 12. Construir un Estado democrático para el buen vivir		
40	M. Alcanzar el 82% de viviendas con acceso a agua entubada por red pública I. % de hogares con acceso exclusivo a agua por red pública	Aumentó el % 1,85 puntos: 2011: 72,67% 2012: 74,53%
41	M. Alcanzar el 12% de indígenas y afroecuatorianos ocupados en el sector público I. % de ocupados en el sector público por grupo étnico (indígenas y afroecuatorianos)	Aumentó el % 5,54 puntos: 2011: 9,65% 2012: 15,19%
42	M. Disminuir a 11% las pérdidas de electricidad en distribución I. % de pérdidas de electricidad en distribución.	Disminuyó el % 0,69 puntos: 2011: 14,47% 2012: 13,78%

Fuente: SNI, Indicadores meta PNBV, marzo de 2013.

Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Cuadros de indicadores del buen vivir seleccionados desagregados por etnia 2011-2012

Anexo 7



Cuadro 1
Porcentaje de hogares con acceso exclusivo al agua por red pública

Etnia	Porcentaje 2011	Brecha respecto a mejor porcentaje 2011	Porcentaje 2012	Brecha respecto a mejor porcentaje 2012	Diferencia brechas 2011-2012
Afroecuatoriana	63,53	14,94	68,55	15,84	0,90
Blanca	77,16	1,31	84,39		
Indígena	40,31	38,16	40,08	44,31	6,15
Mestiza	78,47		80,17	4,22	
Montubia	28,98	49,49	24,54	59,85	10,36
Brecha	49,49		59,85		10,36

Fuente: Base de datos Función Judicial de Pichincha, enero-octubre de 2012.
Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Cuadro 2
Porcentaje de hogares que viven en hacinamiento

Etnia	Porcentaje 2011	Brecha respecto a mejor porcentaje 2011	porcentaje 2012	Brecha respecto a mejor porcentaje 2012	Diferencia brechas 2011-2012
Afroecuatoriana	15,86	9,45	12,55	7,95	1,50
Blanca	6,41		4,60		
Indígena	22,87	16,46	18,50	13,90	2,56
Mestiza	9,50	3,09	7,84	3,24	0,15
Montubia	21,17	14,76	19,43	14,83	0,07
Brecha	16,46		14,83		1,63

Fuente: SNI, Indicadores meta PNBV, marzo de 2013.
Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Cuadro 3
Porcentaje de personas con seguro de salud público

Etnia	Porcentaje 2011	Brecha respecto a mejor porcentaje 2011	Porcentaje 2012	Brecha respecto a mejor porcentaje 2012	Diferencia brechas 2011-2012
Afroecuatoriana	28,59	10,82	29,18	16,75	5,93
Blanca	39,41		45,93		
Indígena	16,87	22,54	16,38	29,55	7,01
Mestiza	33,99	5,42	36,78	9,15	3,73
Montubia	25,34	14,07	28,81	17,12	3,05
Brecha	22,54		29,55		7,01

Fuente: SNI, Indicadores meta PNBV, marzo de 2013.
Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Cuadro 4
Tasa de subempleo bruto nacional

Etnia	Porcentaje 2011	Brecha respecto a mejor porcentaje 2011	Porcentaje 2012	Brecha respecto a mejor porcentaje 2012	Diferencia brechas 2011-2012
Afroecuatoriana	55,31	9,32	54,32	6,04	3,28
Blanca	45,99		48,28		
Indígena	82,79	36,80	82,00	33,72	3,08
Mestiza	54,11	8,12	51,35	3,07	5,05
Montubia	69,35	23,36	73,04	24,76	1,40
Brecha	36,80		33,72		3,08

Fuente: SNI, Indicadores meta PNBV, marzo de 2013.

Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

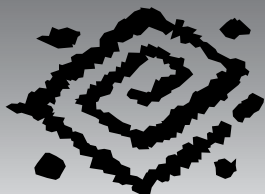
Cuadro 5
Porcentaje de personas que reciben un salario menor al mínimo vital (SMV)

Etnia	Porcentaje 2011	Brecha respecto a mejor porcentaje 2011	Porcentaje 2012	Brecha respecto a mejor porcentaje 2012	Diferencia brechas 2011-2012
Afroecuatoriana	43,78	7,87	46,19	22,19	14,32
Blanca	35,91		24,00		
Indígena	57,39	21,48	56,46	32,46	10,98
Mestiza	39,95	4,04	35,59	11,59	7,55
Montubia	75,91	40,00	77,00	53,00	13,00
Brecha	40,00		53,00		13,00

Fuente: SNI, Indicadores meta PNBV, marzo de 2013.

Elaboración: Gardenia Chávez Núñez, PADH, 2013.

Anexo 8



Información de la Fiscalía General del Estado sobre muertes violentas y delitos de acción pública

Cuadro 1
Asesinatos, noviembre 2011-septiembre 2012

Año	Noticia del delito	Indagación previa	Instrucciones fiscales
2011 (nov.-dic.)	381	331	70
2012 (ene.-sep.)	1.530	1.456	331
Total	1.911	1.787	401

Fuente: Respuesta a petición de información, FGE, 2012.
Elaboración: FGE, 2013.

Cuadro 2
Homicidios simples, noviembre 2011- septiembre 2012

Año	Noticia del delito	Indagación previa	Instrucciones fiscales
2011 (nov.-dic.)	127	132	13
2012 (ene.-sep.)	705	670	55
Total	832	802	68

Fuente: Respuesta a petición de información, FGE, 2012.
Elaboración: FGE, 2013.

Cuadro 3
Delitos de acción pública, noviembre 2011- septiembre 2012

Año	Noticia del delito	Indagación previa	Instrucciones fiscales
2011 (nov.-dic.)	34.890	30.199	2.854
2012 (ene.-sep.)	158.691	142.352	15.970
Total	193.581	172.551	18.824

Fuente: Respuesta a petición de información, FGE, 2012.
Elaboración: FGE, 2013.

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR

SEDE ECUADOR

La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica de nuevo tipo, creada para afrontar los desafíos del siglo XXI. Como centro de excelencia, se dedica a la investigación, la enseñanza y la prestación de servicios para la transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos.

La Universidad es un centro académico abierto a la cooperación internacional, tiene como eje fundamental de trabajo la reflexión sobre América Andina, su historia, su cultura, su desarrollo científico y tecnológico, su proceso de integración, y el papel de la Subregión en Sudamérica, América Latina y el mundo.

La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución de la Comunidad Andina (CAN). Como tal forma parte del Sistema Andino de Integración. Fue creada en 1985 por el Parlamento Andino. Además de su carácter de institución académica autónoma, goza del estatus de organismo de derecho público internacional. Tiene sedes académicas en Sucre (Bolivia), Quito (Ecuador), sedes locales en La Paz y Santa Cruz (Bolivia), y oficinas en Bogotá (Colombia) y Lima (Perú). La Universidad tiene especial relación con los países de la UNASUR.

La Universidad Andina Simón Bolívar se estableció en Ecuador en 1992. En ese año la Universidad suscribió un convenio de sede con el gobierno del Ecuador, representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ratifica su carácter de organismo académico internacional. En 1997, el Congreso de la República del Ecuador, mediante ley, la incorporó al sistema de educación superior del Ecuador, y la Constitución de 1998 reconoció su estatus jurídico, el que fue ratificado por la legislación ecuatoriana vigente. Es la primera universidad del Ecuador en recibir un certificado internacional de calidad y excelencia.

La Sede Ecuador realiza actividades, con alcance nacional e internacional, dirigidas a la Comunidad Andina, América Latina y otros ámbitos del mundo, en el marco de áreas y programas de Letras, Estudios Culturales, Comunicación, Derecho, Relaciones Internacionales, Integración y Comercio, Estudios Latinoamericanos, Historia, Estudios sobre Democracia, Educación, Adolescencia, Salud y Medicinas Tradicionales, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Migraciones, Gestión Pública, Dirección de Empresas, Economía y Finanzas, Estudios Agrarios, Estudios Interculturales, Indígenas y Afroecuatorianos.

PROGRAMA ANDINO DE DERECHOS HUMANOS

El Programa Andino de Derechos Humanos es un espacio académico de debate, intercambio de opiniones y experiencias, orientado a contribuir a la construcción de sociedades democráticas y el Estado constitucional de derechos, desde la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los distintos países de América Latina.

Entre sus estrategias se encuentra el trabajo colaborativo con universidades de los países sudamericanos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones estatales y organismos internacionales, cuya sinergia enriquece los procesos de formación, investigación y difusión en el continente.

Los programas académicos que brinda el PADH tienen un carácter interdisciplinario y crítico, con enfoque latinoamericano y de reconocimiento de las diversidades en general, y de género en particular, vinculando teoría y práctica. En esta perspectiva ofrece posgrados y cursos de educación continua en Derechos Humanos. Además, por petición y bajo convenio con organizaciones sociales, instituciones estatales o cooperación internacional, el PADH organiza cursos específicos y de corta duración sobre distintos ámbitos de los derechos humanos.

Dispone de un sitio web que se ha constituido en un referente de encuentro y comunicación de los distintos espacios comprometidos con los derechos humanos en la región, a través de la revista electrónica cuatrimestral Aportes Andinos y un centro de referencia en línea <www.uasb.edu.ec/padh.php>. El PADH ha generado además una línea de publicaciones, a partir de investigaciones realizadas por docentes y estudiantes, materiales de trabajo producto de procesos de capacitación, y memorias de conferencias regionales y otras actividades académicas realizadas a lo largo de su gestión. La UASB-E, cuenta con un fondo bibliográfico-documental específico sobre derechos humanos, constituido por más de ocho mil registros procesados técnicamente para facilitar el acceso de quienes investigan y estudian en el campo de los derechos humanos.

El Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, presenta el *Informe sobre derechos humanos. Ecuador 2012*, cuyo objetivo es contribuir al respecto, promoción y garantía de los derechos humanos mediante el seguimiento de su desarrollo y el análisis para ubicar tendencias, fortalecer la memoria social y promover la acción del Estado y la sociedad.

El presente informe contiene ocho numerales, inicia con la exposición del objetivo y la metodología, continúa con el análisis desde la perspectiva de derechos humanos de varios temas como: acceso a la información, conflictividad social, producción normativa, justicia, seguridad, políticas públicas, y derechos colectivos y de la naturaleza. Se cierra con las conclusiones y recomendaciones generales; y acompañan la bibliografía y varios anexos que sustentan y amplían el contenido.

Para el análisis se han priorizado los siguientes aspectos: el carácter integral, interrelacionado e interdependiente de los derechos; la responsabilidad estatal que surge de los acuerdos internacionales y del marco constitucional; la articulación de las garantías constitucionales en el ámbito normativo, el diseño y funcionamiento institucional, la política pública y las acciones jurisdiccionales para la tutela de los derechos.



**UNIVERSIDAD ANDINA
SIMÓN BOLÍVAR**
Ecuador



ISBN: 978-9978-19-586-4



9789978195864